CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

0000225

CASO DEL PERIODICO "LA NACIÓN"

MAURICIO HERRERA ULLOA Y
FERNÁN VARGAS ROHRMOSER
vs
LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DEMANDA DE LAS VÍCTIMAS
ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS

REPRESENTANTES DE LAS VÍCTIMAS

Fernando Guier Esquivel
Pedro Nikken B.
Carlos Ayala Corao

CORTE I.D.H.
31 MAR 2003
RECIBIDO

Indice
Caso 12.367
MAURICIO HERRERA ULLOA Y FERNAN VARGAS ROHRMOSER vs.
LA REPUBLICA DE COSTA RICA
"CASO DEL PERIODICO LA NACION"

DEMANDA DE LAS VICTIMAS Y SUS REPRESENTANTES
ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

I. INTRODUCCION GENERAL..... 2

A. Antecedentes inmediatos..... 2

B. Objeto del presente escrito..... 3

C. Representación de las víctimas..... 5

II. HECHOS..... 5

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO..... 10

1. Las violaciones a la libertad de expresión..... 12

A. La libertad de expresión en una sociedad democrática..... 12

B. El Estado de Costa Rica violó el artículo 13 de la Convención Americana al haber sentenciado penalmente y declarado a Mauricio Herrera Ulloa autor responsable de cuatro delitos de publicación de ofensas en la gama de difamación..... 17

- La libertad de expresión, la difusión de noticias de terceras Fuentes y la prueba de la verdad [CADH, art. 13.1..... 17

- Medida de la legitimidad de las limitaciones a la libertad de expresión con base en el respeto a la reputación de los demás, cuando se trata de información atinente a la conducta de funcionarios públicos [CADH, art. 13.2]..... 24

C. El estado costarricense violó el derecho a la libertad de Expresión de Mauricio Herrera Ulloa al incluirlo en el Registro de Delincuentes..... 34

D. La sanción patrimonial resarcitoria impuesta *in solidum* al periodista Mauricio Herrera Ulloa y al Periódico "La Nación",

representado pro el señor Fernán Vargas Rohrmoser, como consecuencia civil de la condena penal por delito de publicación de ofensas en la gama de difamación, es violatoria de la Convención Americana..... 38

- La condena civil derivada del delito viola el derecho de libertad de expresión de las víctimas..... 39

- La condena civil in solidum contra el Periódico "La Nación" viola el artículo 13 de la Convención..... 44

E. El Estado costarricense violó el artículo 13 de la Convención Americana al ordenar retirar el enlace existente en "La Nación Digital" que se encuentra en Internet, entre el apellido Przedborski y los artículos escritos por Mauricio Herrera Ulloa Y al establecer un vínculo entre dichos artículos y la parte Dispositiva de la sentencia condenatoria..... 51

F. Sobre la condición de víctima del señor Fernán Vargas Rohrmoser por estar directamente afectado por la ejecución Forzosa de la sentencia judicial..... 53

2. Las violaciones a las Garantías Judiciales [CADH, art. 8]..... 55

A. Admisibilidad de la denuncia por violaciones al artículo 8 de la Convención..... 55

B. El derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior..... . 58

C. El derecho a ser juzgado por jueces imparciales..... 65

D. La violación de la presunción de inocencia..... 67

3. La violación del artículo 50 de la Convención..... 68

4. Las violaciones de los artículos 1.1 y 2 de la Convención..... 71

IV. CONCLUSIONES..... 80

V. RESTITUCION, REPARACIONES Y COSTAS..... 81

1. Obligación de restituir y reparar..... 81

2. Medidas de restitución, satisfacción y garantías de no repetición..... 89

3. Reparación por equivalente..... 90

0000227

- Daños materiales..... 91
- Daños inmateriales..... 93

4. Costas y gastos..... 94

VI. SOLICITUD DE EJERCICIO URGENTE DE LOS PODERES DE LA HONORABLE CORTE..... 96

VII. PETITUM FINAL..... 106

VIII. RESPALDO PROBATORIO..... 109

IX. DATOS DE LOS REPRESENTANTES DE LAS VICTIMAS..... 111

0000229

MAURICIO HERRERA ULLOA Y FERNÁN VARGAS ROHRMOSER vs LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
"CASO DEL PERIÓDICO LA NACION"

DEMANDA DE LAS VÍCTIMAS Y SUS REPRESENTANTES ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

1. Nosotros, FERNANDO GUIER ESQUIVEL, costarricense, abogado, domiciliado en San José, con cédula de identidad costarricense número 1-229-965 y carné expedido por el Colegio de abogados de Costa Rica con el número 718; PEDRO NIKKEN B., venezolano, abogado domiciliado en Caracas, con cédula de identidad venezolana número 1.758.988 y debidamente inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado de Venezuela bajo el número 5.470; y CARLOS AYALA CORAO, venezolano, abogado domiciliado en Caracas, con cédula de identidad venezolana número 4.767.891 y debidamente inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado de Venezuela bajo el número 16.021, procediendo, en nuestra condición de abogados asistentes y de representantes de Mauricio Herrera Ulloa, costarricense, periodista, domiciliado en San José y con cédula de identidad costarricense número 1-761-923; y Fernán Vargas Rohrmoser, costarricense, abogado, domiciliado en San José y con cédula de identidad costarricense número 1-227-995; quienes son víctimas en el caso identificado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, también "la Ilustre Comisión", "la Comisión", "la Comisión Interamericana" o "la CIDH", indistintamente), con el número **12.367 (MAURICIO HERRERA ULLOA Y FERNÁN VARGAS ROHRMOSER CONTRA LA REPÚBLICA DE COSTA RICA)**; representación la nuestra que consta de instrumento de poder que obra en manos de esa honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, también "la Honorable Corte", "la Corte Interamericana" o "la Corte", indistintamente)[1], respetuosamente acudimos ante esa Honorable Corte, en la oportunidad fijada por el artículo 35.4 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, también "el Reglamento de la Corte" y "el Reglamento", indistintamente), ***para presentar autónomamente nuestras solicitudes, argumentos y pruebas***, en el presente proceso incoado ante la Corte por la Comisión, el cual se originó en nuestra petición ante esta última, introducida el 1º de marzo de 2001 y

2. ampliada mediante un *"ALCANCE"* del día 30 del mismo mes y año. En ese contexto, con el debido respeto y acatamiento, exponemos:

---

[1] *Véase*, Anexo 22 de la demanda de la Comisión Interamericana.

I. Introducción General

A. Antecedentes inmediatos

2. El 1º de marzo de 2001 Mauricio Herrera Ulloa, representado por Fernando Guier Esquivel, abogado defensor de la identificada víctima ante los tribunales costarricenses en la querella penal incoada en su contra en Costa Rica, a la que se refiere el presente caso; Fernán Vargas Rohrmoser, actuando en nombre propio y en nombre del mismo Mauricio Herrera Ulloa, asistidos ambos por el abogado Carlos Ayala Corao, todos identificados, introdujeron una petición ante la Comisión Interamericana[2], por la cual fue denunciado que la República de Costa Rica (en adelante, también "el Estado", "Costa Rica" y "el Gobierno", indistintamente) violó, en perjuicio de Mauricio Herrera Ulloa y Fernán Vargas Rohrmoser, los siguientes artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, también "la Convención", "la Convención Americana" y "el Pacto de San José", indistintamente): artículo **1.1)**, (obligación de respetar y garantizar los derechos reconocidos en la Convención a todas la personas bajo la jurisdicción costarricense; artículo **2** (obligación de adoptar disposiciones de Derecho Interno); artículo **8 (**Garantías Judiciales); artículo **13 (**Libertad de Expresión**)**; artículo **24** (igualdad ante la ley sin discriminación); artículo **25** (derecho a recurso sencillo para amparar violaciones a derechos consagrados en la Convención Americana); y artículo **29** (normas de interpretación). Dicha petición comprendió una solicitud de medidas cautelares a la CIDH para evitar perjuicios irreparables a las víctimas. Mediante un nuevo escrito dirigido a la misma Comisión, ampliamos nuestra petición original, según se evidencia del recibido en la sede de la CIDH el 30 de marzo de 2001[3]. El periodista Mauricio Herrera Ulloa fue sometido a juicio penal por querella (privada) intentada en su contra ante los tribunales penales costarricense por el señor Félix Przedborski Chawa, por supuestos delitos contra el honor cometidos contra el querellante en varios artículos publicados por dicho periodista en el diario "La Nación", de San José, en los cuales daba cuenta –de forma mesurada y equilibrada-- de diversas publicaciones en medios impresos europeos, donde, con un lenguaje mucho más enérgico que el empleado por el periodista Herrera, se hacían señalamientos relativos a ciertas actividades del querellante. Como resultado de ese proceso penal, en el cual se incurrió en graves irregularidades contra el debido proceso, Mauricio Herrera Ulloa fue condenado penalmente, en aplicación de disposiciones del Código Penal de Costa Rica (en adelante, también "Código Penal"), por sí mismas flagrantemente violatorias del Pacto de San José. Le fueron asimismo aplicadas varias penas accesorias, entre ellas la de resarcir, *in solidum* con el periódico

---

[2] *Véase*, Expediente del caso ante la CIDH, tomo I. folios 1-36.

[3] *Véase*, Expediente del caso ante la CIDH, tomo I, folios 114-169. El 24 de marzo de 2001, el señor Pedro Nikken había solicitado incorporarse como peticionario en el caso.

"La Nación", representado por Fernán Vargas Rohrmoser, los alegados daños morales reclamados por el querellante, señor Przedborski, así como las costas procesales y personales. En el curso del procedimiento ante la Comisión hubo incidencias en búsqueda de una solución amistosa (por iniciativa de los peticionarios); de medidas cautelares de la Comisión; de medidas provisionales de la Honorable Corte, tal como está descrito en la demanda presentada por la Comisión (véase párrs. 10-36 de dicha demanda).

3. El 28 de octubre de 2002, la Comisión notificó a las víctimas, peticionarios y representantes de aquéllas que, en su 116º período ordinario de sesiones, examinó el caso de Mauricio Herrera Ulloa y Fernán Vargas Rohrmoser y aprobó el informe al que hace referencia el artículo 50 de la Convención, sobre el fondo del caso (en adelante, también "el Informe de la Comisión". El Estado no dio cumplimiento a las recomendaciones contenidas en dicho informe, razón por la cual y previa solicitud nuestra en ese sentido, la Comisión decidió someter este caso a la jurisdicción de esa Honorable Corte e interpuso la demanda correspondiente contra Costa Rica. La Comisión denunció la violación de los artículos 1.1, 2 y 13 de la Convención. Mediante diversas comunicaciones, la última de las cuales fue recibida el día 17 de febrero de 2002, la Secretaría de esa Honorable Corte notificó la introducción de la demanda a las víctimas y sus representantes, a fin de que, de conformidad con el artículo 35.4 del Reglamento, presentáramos autónomamente nuestras solicitudes, argumentos y pruebas.

B. Objeto del presente escrito

4. El presente escrito tiene por objeto someter a la consideración de la Honorable Corte las solicitudes, argumentos y pruebas de las víctimas, relacionadas con las violaciones a la Convención cometidas por el Estado costarricense al haber impuesto condena penal al periodista Mauricio Herrera Ulloa, declarándolo autor responsable de cuatro delitos de publicación de ofensas en la gama de difamación, con todos los efectos jurídicos y prácticos derivados de la misma. Dichos efectos comprenden: haber incluido la sentencia condenatoria dictada contra Mauricio Herrera en el Registro Judicial de Delincuentes; haber ordenado retirar el enlace existente en "La Nación Digital" en Internet, entre el apellido Przedborski y los artículos escritos por Mauricio Herrera Ulloa; haber condenado a Mauricio Herrera Ulloa, solidariamente con el periódico "La Nación" a pagar la suma de sesenta millones de colones, por concepto de daños morales o consecuencias civiles del supuesto hecho punible; al pago de las costas procesales y personales, también *in solidum* con "La Nación" hasta por un monto de tres millones ochocientos once mil colones; y haber intimado al señor Fernán Vargas Rohrmoser al cumplimiento de la

sentencia con la expresa advertencia sobre la posibilidad de incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad.

5. El proceso y la condena como delincuente de Mauricio Herrera Ulloa violaron derechos humanos reconocidos por la Convención. En primer lugar, la condena penal contra el mencionado periodista contraviene el artículo 13 de la Convención Americana. Ello, habida cuenta que la reproducción o difusión de información o noticias provenientes de la prensa internacional, que son de interés de la opinión pública costarricense, y que se relacionan con la conducta de agentes del Estado en el ejercicio de sus funciones es un acto legítimo de ejercicio de la libertad de expresión. La calificación y sanción de esos actos legítimos como un delito, infringe dicho instrumento internacional, puesto que no sólo se omite la garantía debida a la libertad de expresión, sino que se penaliza su ejercicio.

6. Los tribunales costarricenses exigieron, como único medio para evitar que las publicaciones de Mauricio Herrera Ulloa fueran sancionadas como delitos, la prueba de la verdad en su sentido más chocante contra la libre circulación de información e ideas. En efecto, no bastó que el periodista demandado penalmente demostrara que las publicaciones de la prensa europea a las que se contraían sus reportajes verdaderamente existían, sino que los hechos que aquellas publicaciones imputaban al señor Przedborski eran, a su vez, ciertas en todos sus detalles. Tal exigencia, además de imponer un límite irrazonable a la libertad de expresión en una sociedad democrática, viola el derecho al debido proceso garantizado por el artículo 8 de la Convención, particularmente en lo que hace a la *presunción de inocencia* contenida en el artículo 8.2 de dicho tratado.

7. Por otra parte, dentro del sistema jurídico costarricense, como quedó evidenciado en el proceso seguido contra Mauricio Herrera Ulloa, el único recurso existente para impugnar la sentencia condenatoria de primera instancia es el recurso de casación. La casación no es una apelación ni un recurso pleno, que permita la revisión integral del fallo de primera instancia, sino un recurso extraordinario, rigurosamente formal, que se limita a controlar la recta aplicación del Derecho. El recurso de casación, por lo tanto, no satisface *el derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior*, garantizado por el artículo 8.2.h de la Convención. Esta omisión de un recurso eficaz contra una sentencia violatoria de los derechos humanos constituye, a su vez, una privación de un recurso sencillo y rápido contra los actos que lesionen los derechos reconocidos por la Convención, la Constitución o las leyes, tal como está contemplado en el artículo 25.1 del Pacto de San José.

8. En fin, las circunstancias en que tuvo lugar el proceso penal contra Mauricio Herrera Ulloa condujeron a que la última sentencia que se dictó en su contra fuera dictada por el mismo tribunal (la Sala Tercera de la Corte Suprema

de Justicia) que menos de dos años antes había anulado una sentencia en que se lo absolvía por los mismos hechos y dentro de la misma causa, con el particular agravante de que los Magistrados que componían esa Sala era ***exactamente los mismos*** en las dos sentencias. Este hecho viola el derecho a un juez imparcial, previsto en el artículo 8.1 de la Convención.

C. Representación de las víctimas

9. Tal como está acreditado en el poder acompañado a la demanda por la Comisión[4], los infrascritos Fernando Guier Esquivel, Pedro Nikken y Carlos Ayala Corao, representamos a las víctimas, Mauricio Herrera Ulloa y Fernán Vargas Rohrmoser para todos los efectos del presente caso ante la Honorable Corte.

II. HECHOS

10. El señor Félix Przedborski Chawa, ciudadano costarricense de origen polaco, ocupó varias responsabilidades diplomáticas *"ad honorem"* en representación de Costa Rica en Europa, entre ellas la de embajador honorario ante la Organización Internacional de Energía Atómica, con sede en Viena, Austria. Habría servido, además, y siempre *"ad honorem"*, en otros países de Europa. En diversas oportunidades el Sr. Félix Przedborski fue objeto de informaciones y comentarios adversos por varios prestigiosos medios de comunicación europeos. En el caso al que este escrito se refiere, desde abril de 1995 varios medios de comunicación belgas de reconocido prestigio, como lo son, por ejemplo *Le Soir*, *Le Soir Illustré*, *De Morgen*, *Finacieel-Ekonomisce Tijf (FET)* y *La Libre Belgique*c., involucraron al susodicho Sr. Félix Przedborski en diversas operaciones de apariencia turbia. El hecho es que durante el año 1995 más de diez reportajes de la prensa escrita belga[5] atribuyeron al señor Félix Przedborski una vinculación con hechos irregulares graves, que al ser imputados a un funcionario diplomático *"ad honorem"* costarricense, resultaban, fuera de todo género de dudas, noticias de interés para la opinión pública costarricense y para el propio Gobierno del país, cuyo prestigio internacional quedaba en entredicho ante semejantes publicaciones. Tanto más cuanto el ex Presidente de la República, don Luis Alberto Monge, declaró públicamente a la prensa nacional que el mencionado señor Przedborski prestaba finaciamiento a los dos principales partidos políticos de Costa Rica (Anexo "H")

---

[4] *Véase*, Anexo 22 de la demanda de la Comisión Interamericana.

[5] *Véase*, anexo 6 de la demanda de la CIDH.

11. De hecho, con motivo del revuelo causado por las publicaciones periódicas europeas cuyo contenido fue reproducido parcialmente por el periodista Herrera Ulloa en "La Nación" de Costa Rica, el Gobierno de este último país nombró una comisión de alto nivel para estudiar el tema de los diplomáticos honorarios al servicio del país y, de acuerdo con el informe de dicha Comisión, se decidió eliminar todos dichos cargos. La nota de la agencia AP que reseña ese hecho el 15 de julio de 1996[6] encabeza la noticia en los siguientes términos: *"El Canciller Fernando Naranjo anunció que hoy serán declarados cesantes los últimos 56 diplomáticos honorarios del servicio exterior, entre ellos el polémico embajador en Austria."* (Anexo "I")

12. A raíz de tales publicaciones europeas, el señor Mauricio Herrera Ulloa, periodista costarricense, escribió una serie de artículos publicados por el diario "La Nación" los días 19, 20 y 21 de mayo y 13 diciembre de 1995[7], relacionados con el aludido diplomático *ad honorem* Félix Przedborski Chawa. En dichos artículos, el periodista reprodujo parcialmente los referidos reportajes de la prensa escrita belga que atribuían al señor Przedborski hechos ilícitos graves como narcotráfico, defraudación fiscal y quiebra fraudulenta, entre otros,[8] a la vez de señalar vínculos de éste con políticos costarricenses,[9] e indicar que la Cancillería no había llevado todavía a cabo una investigación oficial respecto a los presuntos hechos ilícitos denunciados en la prensa extranjera.[10] Por tratarse de un funcionario público naturalizado costarricense,

---

[6] (http:/www.laprensahn.com/caarc/9607/c15002.htm).

[7] *Véase*, Anexo 6 de la demanda de la CIDH: El señor Herrera Ulloa como redactor del diario La Nación publicó: "Diplomático Nacional cuestionado en Bélgica" de 19 de mayo de 1995; "Autoridades de Bélgica exoneraría a Przedborski" de 20 de mayo de 1995; "Nexo Tico en Escándalo Belga" de 21 de mayo de 1995 y "Polémico Diplomático en la Mira" de 13 de diciembre de 1995.

[8] *Véase*, Anexo 6 de la demanda de la CIDH: Publicaciones Europeas y traducciones. El periodista indicó en sus artículos que los periódicos belgas *De Morgen*, *La Libre Belgique*. *Le Soir Illustré* y *Financieel-Ekonomische Tijd*, y el periódico alemán Der Spiegel, hicieron varias publicaciones en las que señalaban al señor Przedborski como sospechoso de haber recibido comisiones ilícitas en las negociaciones de la venta de helicópteros italianos de combate al Reino de Bélgica, con las cuales habría invertido sumas millonarias en proyectos turísticos de Costa Rica. Refirió que dichos periódicos, con base en fuentes diplomáticas y policiales anónimas, le atribuían un amplio expediente policial en Bélgica y en la Policía Internacional (INTERPOL), por lo que el señor Przedborski se habría refugiado en la inmunidad de su cargo diplomático costarricense como medio para continuar con sus actividades ilícitas, las cuales abarcaban desde tráfico de monedas, cigarrillos, armas y estupefacientes, hasta contratos fraudulentos en perjuicio de la aerolínea alemana Lufthansa. También señaló que los periódicos, basados en informes de inteligencia occidentales, indicaban que Przedborski había infiltrado espías de algunos países de Europa del Este durante la época de la Guerra Fría y provisto de pasaportes falsos a varios agentes secretos polacos. Refirió que la prensa belga cuestionaba el origen de su exorbitante fortuna y propiedades en Miami, en la Costa Azul de Francia y en Tervueren de Bélgica, señalando que en una ocasión, en 1981, se vio enfrentado a una causa penal por defraudación fiscal en Bélgica. Asimismo, indicó que ante una solicitud del Gobierno de Costa Rica para integrar a Przedborski en la sede de la UNESCO, en París, el Ministerio de Francia habría rechazado la postulación debido a las polémicas actuaciones de dicho funcionario. Ver artículo del 25 de mayo de 1995, "Nexo Tico en Escándalo Belga", diario La Nación Online (en adelante, artículo del 25 de mayo de 1995) y artículo del 13 de diciembre de 1995, "Polémico Diplomático en la Mira", diario La Nación Online (en adelante, artículo del 13 de diciembre de 1995).

[9] El periodista indicó que Przedborski contaba con el respaldo de prominentes personalidades políticas costarricenses, por ser contribuyente financiero de las campañas políticas de los dos partidos mayoritarios. Ver artículo del 13 de diciembre de 1995, p.2.

[10] Señaló que el Gobierno de Costa Rica había mantenido una actitud pasiva frente a dicho funcionario, y que recientemente se había nombrado una Comisión de Alto Nivel para la reestructuración del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Servicio Exterior, la cual plantearía la eliminación de todos los puestos diplomáticos honorarios, expresando que dicha Comisión debía evaluar el amplio expediente del diplomático Przedborski. Dichos cargos fueron declarados cesantes en 1996, incluyendo el cargo del señor Przedborski. Ver artículo del 13 de diciembre de

los reportajes belgas resultaban de sumo interés para la opinión pública costarricense, razón por la que el periodista Mauricio Herrera Ulloa los reseñó de manera sucinta en mayo y diciembre de 1995 añadiendo únicamente, por su parte, las referencias a las relaciones de amistad del señor Przedborski con otros funcionarios y dirigentes políticos costarricenses y aspectos de contexto y declaraciones de dos ex presidentes de la República de Costa Rica que se refirieron favorablemente al señor Przedborski, así como declaraciones de su abogado en Costa Rica, el Lic. Ricardo Castro Calvo. El 25 de mayo de 1995, el diario La Nación publicó un amplio artículo suscrito por el señor Przedborski, con el título "Nací en el dolor y respeto a Costa Rica", en el cual el diplomático dio, sin limitación alguna, su versión de los hechos relatados en las informaciones aparecidas ese mes. Previas a las de diciembre, y en su afán de dar equilibrio a sus publicaciones –como se hace evidente de su lectura, el 30 de noviembre de 1995, el periodista Herrera Ulloa se dirigió al abogado en Costa Rica del señor Przedborski, Lic. Ricardo Castro Calvo, ante la imposibilidad de establecer contacto directo con el interesado; y le remitió por esa vía un cuestionario relativo a las cuestiones que se imputaban a su cliente en la prensa europea (Anexo "F"). El señor Przedborski tuvo entonces la ocasión de ejercer su derecho de rectificación o de respuesta, pero se rehusó a hacerlo, desaprovechando la oportunidad que, conforme al interés de informar teniendo en cuenta las distintas versiones que pudieran existir de los mismos hechos, le brindaron Mauricio Herrera Ulloa y el Diario "La Nación" al señor Félix Przedborski Chawa.

13. El mencionado diplomático entabló, en un solo proceso ante la jurisdicción penal, acción penal y acción civil resarcitoria, esta última como *"consecuencia civil del hecho punible"*, ante los tribunales costarricenses, contra Mauricio Herrera Ulloa por los delitos de calumnia y difamación, la cual fue resuelta por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José mediante sentencia del 29 de mayo de 1998, que ***absolvió de toda responsabilidad al señor Mauricio Herrera Ulloa***. Dicha sentencia absolutoria dictaminó que: *"El Periodista Herrera Ulloa lo que hizo fue transcribir lo dicho por los periódicos Le Soir Illustré, La Libre Belgique, Financiell Ekonomische Tijd (FET), De Morgen y Der Spiegel, obviando inclusive términos más ofensivos que estos periódicos citaban, y utilizó el balance al que se hacía mención al ofrecerle al lector posiciones y pruebas a favor del señor Przedborski, inclusive posiciones favorables de dos expresidentes de la República. En este sentido y como se ha demostrado en los CONSIDERANDOS CUATRO, QUINTO, SEXTO SÉPTIMO Y OCTAVO no* ***existió en su accionar el dolo requerido por los tipos penales que se***

1995, p.1, artículo del 21 de mayo de 1995 y *Denuncia y Solicitud de Medidas Cautelares Para el Periodista Costarricense Mauricio Herrera Ulloa y el Doctor Fernán Vargas Rohrmoser del diario "La Nación"*, recibida en la CIDH el 1º de marzo de 2001, p.11 (en adelante, Denuncia).

acusan, ni lo hizo con espíritu de maledicencia o por puro deseo de ofender, sino únicamente el deber de informar sobre los cuestionamientos que se hacían en el exterior sobre un funcionario público costarricense, *el cual estaba acreditado como representante de Costa Rica ante la Organización Internacional de Energía Atómica con sede en Viena, máxime cuando en esos cuestionamientos se repetía el nombre de COSTA RICA, al grado de que se decía por parte de los medios informativos aludidos que el querellante utilizaba su estatus diplomático costarricense para protegerse."*[11] (Énfasis añadido).

14. El señor Przedborski interpuso recurso de casación contra esta sentencia ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y obtuvo la anulación de dicha sentencia el 7 de mayo de 1999, por lo que el expediente fue reenviado al Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, el cual dictó sentencia el 12 de noviembre de 1999 puntualizando: *"Dado que el honor es sólo uno, por lo tanto indivisible, no es posible considerar que en la publicación se cometieran varias acciones delictivas, sino que nos encontramos ante un delito de difamación, el cual es cometido con dolo, que consiste en el pleno conocimiento y voluntad que le asistía al querellado Mauricio Herrera, de lesionar el honor del querellante, reproduciendo y redactando, así como publicando una noticia, donde la información no se ajustaba a la realidad (...)."*[12] En tal virtud, la parte resolutiva de dicha sentencia determinó lo siguiente:

> ***... se declara sin lugar la exceptio veritatis*** *y en consecuencia* ***se declara a Mauricio Herrera Ulloa, autor responsable de cuatro delitos de publicación de ofensas en la modalidad de difamación,*** (sic) *la pena de cuarenta días multa por cada delito a razón de Dos mil quinientos colones cada día, para un total de ciento sesenta días de multa y en aplicación de las reglas del concurso material se reduce la suma al triple de la mayor impuesta, es decir, a ciento veinte días multa, para un total de trescientos mil colones. En aplicación del principio In Dubio Pro Reo se absuelve a Mauricio Herrera Ulloa por un delito de difamación, en perjuicio de Félix Przedborski Chawa.* ***Se declara con lugar la acción civil resarcitoria, condenándose a Mauricio Herrera Ulloa y al periódico La Nación S. A., representada por Fernán Vargas Rohrmoser****, presidente de la compañía, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, como demandados civiles y* ***en carácter de responsables civiles solidarios,*** *al pago de sesenta millones de colones, ello a título de daño moral causado en las*

[11] *Véase*, Anexo 7 de la demanda de la CIDH: Copia de la Sentencia Nº 61/98 Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, 29 de mayo de 1998. Costa Rica: X Consideraciones Finales de Hecho y de Derecho, párr.7.

[12] *Véase* Anexo 8 de la demanda de la CIDH: Sentencia del Tribunal Penal de Juicios del Primer Circuito Judicial de San José del 12 de noviembre de 1999 (en adelante, Sentencia del 12 de noviembre de 1999), pág. 331.

> *publicaciones del periódico La Nación de los días 19, 20, 21 de mayo y 13 de diciembre de 1995. Se rechaza la petición del querellante en el sentido de que la suma concedida sea depositada por los demandados civiles en forma directa a favor de instituciones de bien social, debiendo para ello realizarse con los requisitos de la ley civil.* ***Se ordena la publicación del Por Tanto de la presente sentencia, en el periódico La Nación****, en la misma sección, sea la denominada El País y en el mismo tipo de letra de los artículos objeto de la presente querella, ello a cargo de Mauricio Herrera Ulloa por ser el autor responsable de los ilícitos cometidos. Asimismo se* ***ordena al periódico La Nación SA representada por el señor Fernán Vargas Rohrmoser, retirar el enlace existente en La Nación Digital que se encuentra en Internet, entre el apellido Przedborski y los artículos querellados, así como establecer una liga entre los artículos y la parte dispositiva de esta sentencia, cuya publicación ha sido ordenada****. Se condena a los demandados civiles al pago de las* ***costas procesales*** *en la suma de un millón de colones y por* ***costas personales*** *en la suma de tres millones ochocientos diez mil colones.* ***Son las costas del proceso a cargo del sentenciado****. Con esta lectura quedan debidamente notificadas las partes.*[13] (Énfasis añadidos).

15. Además, posteriormente el mismo tribunal que condenó a Mauricio Herrera Ulloa por el delito en cuestión, intimó al señor Fernán Vargas Rohrmoser, representante legal del periódico "La Nación", a dar cumplimiento a dicho fallo bajo el apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad previsto en el artículo 305 del Código Penal, que conlleva la imposición de una pena privativa de la libertad.[14]

16. El 3 de diciembre de1999, las víctimas interpusimos ante la misma Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia dos recursos de casación --los únicos disponibles en el ordenamiento jurídico costarricense,-- los cuales fueron declarados sin lugar por este tribunal el 24 de enero de 2001, con lo cual quedó confirmada la sentencia.[15]

17. El 1º de marzo de 2001, se inscribió en el Registro Judicial de Delincuentes al señor Mauricio Herrera Ulloa en virtud de lo dispuesto por la Ley del Registro y Archivos Judiciales Nº 6723 de 10-3-1982 como resultado de la inscripción de la sentencia de condena. Posteriormente, a razón de la

---

[13] *Ibíd..*, págs. 351 y 352,

[14] *Véase*, Anexo 9 de la demanda de la CIDH: Resoluciones de Orden de Ejecución del Tribunal Penal de Juicio del Primer Circuito Judicial de 21 de febrero de 2001 y 3 de abril de 2001.

[15] *Véase*. Anexo 12 de la demanda de la CIDH (segunda parte): Resolución 2001-00084 del 24 de enero de 2001, Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

Resolución de esa Honorable Corte que ordenó Medidas Provisionales el 6 de abril de 2001, se suspendió la ejecución de la sentencia, lo que se anotó en el mencionado Registro el 26 de abril de 2001.[16]

18. Por diferentes vicisitudes procesales dentro de los tribunales costarricenses, la condena civil accesoria a la sentencia penal está en fase de ejecución, pero, para la fecha del presente escrito, aún no se ha ejecutado en lo que se refiere a la condena civil derivada del delito ilegítimamente imputado al periodista Herrera Ulloa. Si tal evento acaeciera, los daños materiales de las víctimas se agravarían sustancialmente, pues el querellante Félix Przedborski obtendría el pago de la reparación de los supuestos "daños morales" que los artículos querellados le habrían ocasionado; de modo que las víctimas deberán, en tal supuesto, ser resarcidas de dicho pago por el Estado que ordenó hacerlo en violación de la Convención.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO

19. La sentencia condenatoria de Mauricio Herrera Ulloa, dictada por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José de 12 de noviembre de 1999 y confirmada por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia el 21 de enero de 2001, tanto en la imputación que se le hizo como autor de un hecho punible, como en todas las consecuencias materiales e inmateriales de esa condena, son violatorias de elementos esenciales de la libertad de expresión dentro de una sociedad democrática, tal como la concibe el artículo 13 de la Convención. La circunstancia de que los tribunales costarricenses hayan condenado al periodista Herrera Ulloa por haber difundido noticias presuntamente agraviantes de un funcionario público y *originadas en medios extranjeros* (Código Penal, art. 152: *"publicación de ofensas"*); y por no haber demostrados que *o que publicaron aquellos medios era verdad* (Código Penal, art. 149: *prueba de la verdad* o *exceptio veritatis*) viola igualmente el artículo 13 de la Convención. Dichos fallos consideraron como un hecho criminal el ejercicio del derecho la víctima de *buscar y difundir información e ideas de toda índole sin consideración de fronteras*; menoscabó el derecho de la sociedad a recibir información de toda índole, en particular sobre la conducta atribuida a funcionarios públicos del país, para formarse criterio y ejercer a plenitud sus derechos ciudadanos en una sociedad democrática; advirtió a los medios de comunicación sobre las consecuencias negativas, tanto en el plano informativo como en el pecuniario, que puede acarrearles la difusión de tales informaciones, induciendo así a la autocensura, incompatible con el artículo 13 de la Convención.

---

[16] *Véase* Anexo 18 de la demanda de la CIDH: Certificaciones expedidas por el Poder Judicial relativa a la inscripción de Mauricio Herrera Ulloa en el Registro Judicial de Delincuentes.

20. Todos los componentes de la sentencia contra Mauricio Herrera Ulloa infringen la Convención. La condena principal, por sí misma, comporta un grave atentado contra el artículo 13 de la Convención, tanto en lo que se refiere al delito de *publicación de ofensas*, tipificado en el artículo 152 del Código Penal, como por lo que corresponde a la exigencia de la *prueba de la verdad* como causa de justificación absolutoria para el reo de los delitos de difamación o injuria, tal como está contemplado en el artículo 149 del mismo Código. También son violatorias de la libertad de expresión las penas o condenas accesorias, a saber, la inclusión de Mauricio Herrera Ulloa en el Registro Judicial de Delincuentes; las condenas civiles impuestas solidariamente a Mauricio Herrera Ulloa y al periódico "La Nación"; la prohibición judicial de difundir información por Internet y la imposición de enlaces en *Internet* a quienes difunden información por ese medio; y la emisión *"Orden de Ejecución y Prevención"* contra el señor Fernán Vargas Rohrmoser, bajo apercibimiento de ser enjuiciado por el delito de desobediencia, sancionado con pena privación de libertad.

21. El proceso y la condena de Mauricio Herrera Ulloa también han infringido otras disposiciones de la Convención, conforme puede concluirse de los hechos del caso tal como han sido presentados ante esa Honorable Corte en la demanda introducida por la Ilustre Comisión. En ese sentido, Ha sido violado *el derecho a la garantías judiciales* reconocido en el artículo 8 de la Convención, particularmente por lo que toca a la *presunción de inocencia* (artículo 8.2); al *derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior* (artículo 8.2.h); y al *derecho a un juez o tribunal imparcial* (artículo 8.1). Asimismo, el Estado violó los artículos 1.1 y 2 de la Convención al no haber adoptado las disposiciones de derecho interno para garantizar el respeto a los derechos humanos de toda persona sometida a su jurisdicción. Por último, como consecuencia de la total desatención al Informe de la Comisión, el Estado infringió el artículo 50 del Pacto de San José.

1. Las violaciones a la libertad de expresión

A. La libertad de expresión en una sociedad democrática

22. El artículo 13 de la Convención Americana reconoce a todo individuo el derecho a la libertad de expresión al establecer:

> *1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.*
>
> *2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:*
>
> *a. el respeto a los derechos o la reputación de los demás, o*
> *b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.*
>
> *3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.*
>
> *4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.*
>
> *5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.*

23. La Honorable Corte Interamericana ha sostenido en innumerables ocasiones el rol esencial que cumple la libertad de expresión dentro de una sociedad democrática al decir:

> *El bien común reclama la máxima posibilidad de información y es el pleno ejercicio del derecho a la expresión lo que la favorece. La libertad de expresión es un elemento fundamental sobre el cual se basa la existencia de una sociedad democrática. Resulta indispensable para la formación de la opinión pública. También constituye una conditio sine qua non para el desarrollo de los partidos políticos, los gremios, las sociedades científicas y culturales y, en general, de*

> *todos los que desean influir al público. En resumen, representa la forma de permitir que la comunidad, en el ejercicio de sus opciones, esté suficientemente informada. En consecuencia, puede decirse que una sociedad que no está bien informada no es verdaderamente libre.*[17]

24. El artículo 13 de la Convención engloba dos dimensiones: la dimensión individual que se realiza a través del derecho de expresar pensamientos e ideas y el derecho de recibirlas, y la dimensión social que se manifiesta como "medio para el intercambio de ideas e información y para la comunicación masiva entre los seres humanos".[18] En ese contexto, la Honorable Corte ha identificado ciertos principios básicos relativos a la libertad de expresión y de información dentro de una sociedad democrática, que han sido expresados y reiterados en su acervo jurisprudencial. En lo que se refiere a la dimensión individual y la dimensión social de la libertad de expresión, la cual

> *...requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno.*[19]

25. En ejercicio de su jurisdicción contenciosa, la Corte ha reiterado los conceptos sobre las dos dimensiones de la libertad de expresión, tal como lo había hecho antes en sede consultiva:

> *Sobre la primera dimensión del derecho consagrado en el artículo mencionado, la individual, la libertad de expresión no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios. En este sentido,* ***la expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente.***
>
> *Con respecto a la segunda dimensión del derecho consagrado en el artículo 13 de la Convención, la social, es menester señalar que la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones entre las personas; comprende su derecho a tratar de comunicar a otras sus puntos de vista, pero*

---

[17] Corte I.D.H., *La colegiación obligatoria de periodistas*. Opinión Consultiva, OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, Serie A Nº 5. Párr. 70.

[18] *Ibídem*. Párr.32.

[19] *Ibid.*, párr. 29

> *implica también el derecho a todas de conocer opiniones, relatos y noticias.* ***Para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros como el derecho a difundir la propia.***[20] (Énfasis añadidos).

26. La Honorable Corte consideró, además, que las dos dimensiones de la libertad de expresión deben garantizarse simultáneamente.[21] ***Los artículos de Mauricio Herrera Ulloa abarcaron ambas dimensiones de la libertad de expresión.***

27. En otro caso contencioso, la Corte ha agregado que la libertad de expresión

> *...requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno*[22]

28. Sin embargo, a pesar de su incuestionable relevancia e importancia en una sociedad democrática, la libertad de expresión se encuentra sujeta a ciertos límites legítimos. En efecto, el artículo 13 de la Convención enumera en sus párrafos 4 y 5 limitaciones a este derecho, las cuales, como tales, deben ser consideradas como excepciones sujetas a una interpretación estricta. El carácter excepcional de estas restricciones queda evidenciado en el párrafo 2 del artículo 13, que establece que las expresiones no pueden estar sujetas a censura previa sino a responsabilidades posteriores, "fijadas expresamente por la ley y que sean necesarias para asegurar: el respeto a los derechos o la reputación de los demás o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública". Asimismo, el párrafo 3 prohíbe la restricción de este derecho por vías o medios indirectos y enumera, en forma no taxativa, algunos de ellos, todo lo cual deja en evidencia el carácter excepcional de las restricciones legítimas de este derecho fundamental.

29. Al interpretar el significado de la palabra "necesaria", utilizada en el párrafo 2 del artículo 13 de la Convención Americana, la Honorable Corte sostuvo que aunque no significa "indispensable", implica la existencia de una

---

[20] Corte I.D.H., *Caso "La Última Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y otros vs. Chile)* Sentencia del 5 de febrero de 2001. Serie C Nº 73, párrs. 65 y 66. Conceptos similares habían sido vertidos antes por la Corte: *cfr. La colegiación obligatoria de periodistas...* cit., párrs. 31 y 32

[21] *La colegiación obligatoria...* cit., párr. 33.

[22] Corte I.D.H., *Caso Ivcher Bronstein*, Sentencia de 6 de febrero de 1997, Serie A Nº 74, párr. 146.

"necesidad social imperiosa" y que para que una restricción sea "necesaria" no es suficiente demostrar que sea "útil", "razonable" u "oportuna". En tal sentido señaló que "la legalidad de las restricciones a la libertad de expresión fundadas sobre el artículo 13.2, dependerá de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo debe escogerse aquella que restrinja en menor escala el derecho protegido. (...) Es decir, la restricción debe ser proporcionada al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo".[23]

30. En tal sentido, las limitaciones a la libertad de expresión, así como a los derechos humanos en general, incluso cuando se fundan sobre el orden público o el bien común, no pueden degenerar hasta convertirse en un instrumento para vaciarlos de contenido. Esa Honorable Corte ha dicho sobre este particular:

> *...que de ninguna manera podrían invocarse el "orden público" o el "bien común" como medios para suprimir un derecho garantizado por la Convención o para desnaturalizarlo o privarlo de contenido real (ver el art. 29.a) de la Convención). Esos conceptos, en cuanto se invoquen como fundamento de limitaciones a los derechos humanos, deben ser objeto de una interpretación estrictamente ceñida a las "justas exigencias" de "una sociedad democrática" que tenga en cuenta el equilibrio entre los distintos intereses en juego y la necesidad de preservar el objeto y fin de la Convención.*[24]

31. Esta apreciación de la Honorable Corte Interamericana, a propósito del orden público y el bien común, es tanto más válida frente a un interés meramente individual que, basado en el artículo 152 del Código Penal costarricense, pretenda impedir la circulación y difusión de información del dominio público proveniente del exterior, so pretexto de que contienen ofensas proferidas por otro, es decir, un tercero ajeno al periodista que hace la publicación de la noticia extranjera.

32. No se nos escapa que *"hay un conflicto clásico entre la libertad de expresión y la protección de la personalidad. ...Sin embargo, el principio de proporcionalidad debe ser estrictamente observado en esta área, pues de otro modo existe el peligro de que la libertad de expresión sea minada."*[25] Así lo ha entendido con toda claridad la Honorable Corte, así como la Corte Europea de Derechos Humanos. La Corte Interamericana ha destacado:

---

[23] *La colegiación obligatoria...* cit., párr 46. *Ver también* Corte E.D.H., *Caso "Sunday Times"* sentencia de 26 Abril de 1979, Serie A N° 30, párr. 59

[24] *La colegiación obligatoria...*, cit., párr. 67.

[25] *Cfr.* Manfred NOWAK: *"U.N. Covenant on Civil and Political Rights. CCPRR Commentary"* N.P. Engel, Publisher. Kehl, Strasbourg, Arlington, 1993, p. 353.

> *Dicha libertad no sólo debe garantizarse en lo que respecta a la difusión de información o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también en lo que toca a las que ofenden, resultan ingratas o perturban al estado o a cualquier sector de la población.*[26]

33. En esa misma dirección, la Corte Europea de Derechos Humanos ya había observado que la protección de la libertad de expresión debe extenderse no sólo a la información o a las ideas favorables, sino también a aquellas que *"ofenden, resultan chocantes o perturban."*[27]

34. La CIDH no ha sido menos enfática a este respecto:

> *...la Comisión no puede aceptar el punto de vista de Chile en el sentido de que el derecho al honor tendría una jerarquía superior que la que tiene el derecho a la libertad de expresión.*[28]

35. Al interpretar las diferentes formas en que una trasgresión al Artículo 13 de la Convención Americana produce una ofensa radical a la libertad de expresión, la Honorable Corte incluyó en general:

> *...todos aquellos procedimientos que condicionan la expresión o la difusión de información al control gubernamental. En tal hipótesis, hay una violación radical tanto del derecho de cada persona a expresarse como el derecho de todos a estar bien informados de modo que se afecta una de las condiciones básicas de una sociedad democrática.*[29]

36. La Honorable Corte ha interpretado adicionalmente que *"la libertad de expresión se inserta en el orden público primario y radical de la democracia, que no es concebible sin el debate libre y sin que la disidencia tenga pleno derecho de manifestarse."*[30]

37. También la Ilustre Comisión ha establecido que el derecho a la libertad de expresión e información es uno de los principales mecanismos que tiene la sociedad para ejercer un control democrático sobre las personas que tienen a su cargo asuntos de interés público. Por consiguiente, cuando se impide o limita el control de la ciudadanía sobre las actividades desempeñadas por agentes del Estado en el ejercicio de sus funciones o de personas privadas involucradas en asuntos públicos, se transforma la democracia en un sistema donde el autoritarismo encuentra un terreno fértil para imponerse sobre la voluntad de la

---

[26] *Caso Ivcher Bronstein*, cit., párr. 152.
[27] Corte E.D.H., *Caso Castells v. España*, Sentencia de 23 de abril de 1992, Serie A, Nº 236, párr. 20.
[28] CIDH, Informe Nº 11/96. Caso 11.230. Chile (*Martorell*), párr. 70.
[29] *La colegiación obligatoria...*, cit., párr. 54.
[30] *Ibídem*, párr. 69.

sociedad, pudiendo a su vez producir una suspensión radical a la libertad de expresión.[31]

B. El Estado de Costa Rica violó el artículo 13 de la Convención Americana al haber sentenciado penalmente y declarado a Mauricio Herrera Ulloa autor responsable de cuatro delitos de publicación de ofensas en la gama de difamación

- **La libertad de expresión, la difusión de noticias de terceras fuentes y la prueba de la verdad [CADH, art. 13.1]).**

38. El Estado costarricense, al imponer sanciones penales con el pretexto de proteger la honra y reputación del diplomático honorario Przedborski, provocó un efecto amedrentador sobre la libertad de expresión y sobre la emisión de información referente a asuntos de interés público que involucran a funcionarios públicos en directa contravención con los principios Convencionales.

39. Como se señalara con anterioridad, el periodista Mauricio Herrera Ulloa escribió una serie de artículos publicados por el diario "La Nación" relacionados con el diplomático Félix Przedborski, representante *ad honorem* de Costa Rica ante la Organización Internacional de Energía Atómica, con sede en Austria. En dichos artículos se hacía referencia a varios reportajes de la prensa escrita belga que atribuían al diplomático costarricense vínculos con hechos ilícitos graves como narcotráfico, defraudación fiscal y quiebra fraudulenta, entre otros. Los artículos lo vinculaban igualmente con políticos costarricenses y cuestionaban su idoneidad como funcionario público.

40. La condena penal del periodista Mauricio Herrera Ulloa se fundamentó en las disposiciones de los artículos 152 y 149 del Código Penal (Anexo "A")[32], que establecen:

> ***Artículo 152:*** *Será reprimido como autor de las mismas, el que publicare o reprodujere, por cualquier medio ofensas al honor inferidas por otro.*
>
> ***Artículo 149:*** *El autor de injuria o de difamación no es punible, si la imputación consiste en una afirmación verdadera y ésta no ha sido hecha por puro deseo de ofender o por espíritu*

---

[31] CIDH, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay, párr. 35.

[32] *Véase*, Código Penal, Libro Segundo: De los Delitos; Título II: Delitos contra el honor, Sección única: Injuria, calumnia, difamación. Editorial Investigaciones Jurídicas. Revisada y actualizada, por Ulises Zúñiga Morales. 2003. Anexo "A"

> *de maledicencia. Sin embargo, el acusado sólo podrá probar la verdad de la imputación: 1) Si la imputación se hallare vinculada con la defensa de un interés público actual; y 2) Si el querellante pidiera la prueba de la imputación contra él dirigida siempre que tal prueba no afecte derechos o secretos de terceras personas...*

41. El resultado de aplicar los de por sí ilegítimos artículos 152 y 149 del Código Penal costarricense fue condenar criminalmente y considerar como delincuente al periodista Herrera Ulloa. Las sentencias condenatorias contra Herrera Ulloa afirman que éste incurrió en hecho punible porque: 1) difundió noticias emanadas de prensa extranjera (por prestigiosa que ésta fuera) que señalaban al Sr. Félix Przedborski como persona vinculada con actividades turbias; y 2) porque sólo había demostrado la verdad de la existencia de tales publicaciones extranjeras, pero no la exactitud de su contenido.

42. La sentencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia del 7 de mayo de 1999, que anuló el primer fallo del 29 de mayo de 1998 del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José (el cual absolvió en primera instancia a Mauricio Herrera Ulloa), fundamenta su decisión en lo que interpreta como una errada aplicación del concepto de *dolo* y de la *exceptio veritatis* por el tribunal *a quo*. En efecto, el fallo absolutorio del 29 de mayo de 1998, concluyó que le periodista Mauricio Herrera Ulloa no había incurrido en delito, pues no había quedado comprobado que había actuado con dolo, es decir, ***"por espíritu de maledicencia o por el puro deseo de ofender, sino únicamente el deber de informar*** *sobre los cuestionamientos que se hacían en el exterior sobre un funcionario público costarricense...*(omissis), *máxime cuando en esos cuestionamientos se repetía el nombre de COSTA RICA, al grado que se decía por parte de los medios informativos aludidos que* ***el querellante utilizaba su status diplomático para protegerse.***"[33] (Las mayúsculas son del original, los énfasis son añadidos).

43. En cuanto a la *exceptio veritatis*, la misma sentencia concluyó que, en ese caso, la misma *"****no versaba sobre la verdad o falsedad de las afirmaciones hechas por los matutinos europeos, ya que esa cuestión no competía al querellado****, por no haber hecho las afirmaciones a título personal ni con ánimo de ofender, sino simplemente informar sobre los mismos.*"[34] (Énfasis añadido).

44. Esta doctrina, que se adapta perfectamente a los estándares internacionales de la *actual malice* en los delitos contra el honor en los que están envueltas personas de relevancia pública, así como a la Declaración de

---

[33] Anexo 7 de la demanda de la CIDH, p. 84.

[34] *Ibid.*, p. 151.

Principios sobre Libertad de Expresión aprobada por la CIDH, fue, sin embargo, censurada por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, al resolver el recurso de casación que se interpuso contra dicha sentencia absolutoria.

45. En el fallo del 7 de mayo de 1999 (Anexo "G"), por el cual se anuló la anterior sentencia absolutoria, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia censuró al tribunal *a quo* porque *"prácticamente identificó el dolo de la* ***Difamación*** *(art. 146) o de la* ***Publicación de ofensas*** *(art. 152) con el «puro deseo de ofender» y el «espíritu de maledicencia» a que se refiere el artículo 149* ...(omissis), *cuya inexistencia sólo tiene por efecto excluir la punibilidad* ***cuando se prueba la verdad del hecho imputado****, pero ninguna de las finalidades o motivos pueden identificarse con el dolo que suponen los artículos 146 y 152, ya que estos últimos ordinales no contemplan esa clase de elementos subjetivos como sí lo hacen ciertos tipos subjetivos complejos, llamados 'delitos de intención' porque requieren una especial dirección de la voluntad hacia un determinado objetivo o resultado."*[35] (Énfasis del original, subrayadas añadidos).

46. En relación con la prueba de la verdad, dicha sentencia acoge el argumento -del abogado del querellante Przedborski, según el cual el artículo 152 *"tiene la finalidad de evitar que puedan quedar impunes determinadas ofensas al honor, por la sola circunstancia de quien las profiere, alegue que él no fue autor original del agravio."* Acogió igualmente la Sala Tercera la doctrina según la cual la prueba de la verdad *"versa únicamente sobre la realidad de la imputación agraviante que se ha formado el sujeto pasivo".*[36]

47. Por su parte, la Sentencia del 12 de noviembre de 1999 que condenó al periodista Herrera Ulloa y al diario "La Nación" se fundamentó expresamente en este doble concepto de la ya de por sí obsoleta institución de la *exceptio veritatis*. Dice el fallo:

> *"**VII. – Respecto de la exceptio veritatis opuesta por el querellado.** Mediante esta excepción el querellado se compromete a probar la veracidad de las imputaciones hechas por él, de lograrlo se extingue la pretensión punitiva estatal, es decir queda exento de pena, si se acepta mediante ella, que se es el autor de las ofensas lesivas al honor, pero que lo ha hecho amparado en la veracidad de las imputaciones. Por tal motivo, es necesario entrar a determinar si en la especie el querellado, logró a través de los elementos probatorios aportados al debate demostrar la veracidad de sus imputaciones. Tenemos que si*

---

[35] La copia de la que disponemos de esta sentencia no está "paginada". Por lo tanto, las citas se encuentran resaltadas en amarillo.

[36] *Ibid.*

> *bien es cierto, la querella versa sobre cuatro publicaciones referentes a asuntos relacionados con el señor Przedborski, de ellas es posible extraer las siguientes imputaciones: 1.- La participación del querellante en el caso Augusta–Cools 2.- Fue condenado por defraudación fiscal 3.- Participó en una negociación ilícita en perjuicio de la aerolínea Lufthansa 4.- Fue declarado en quiebra junto a dos de sus empresas. 5.- Forma parte de una red de tráfico de drogas, armas, monedas, cigarrillos. Como ha quedado ampliamente demostrado, no se pudo acreditar la veracidad de estos hechos imputados, pues más bien el Tribunal contó con un sinnúmero de elementos probatorios que desdicen los hechos narrados en los artículos querellados* ***de tal forma que el querellado, lo único que logró demostrar fue que el querellante fue cuestionado a nivel periodístico por varios periódicos europeos, los que no contaban con elementos probatorios fehacientes, más bien se basaban en meros rumores, así que lo procedente es declarar sin lugar la excepción planteada, por cuanto más bien se logró acreditar la falsedad de las afirmaciones hechas.***[37] (Énfasis añadido).

48. Este concepto fue plenamente ratificado por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, cuya decisión definitiva del 21 de enero de 2001[38] agotó los recursos internos para la defensa de la libertad de expresión en el caso denunciado. Expresó la Sala Tercera:

> *Tal como expuso el Tribunal (cfr. Folios 1.061 y 1.062), la excepción de verdad se rechazaba, porque no se demostró la verdad de los hechos atribuidos al querellante. Esto es correcto, ya que* ***la exceptio veritatis se refería a las imputaciones concretas y no a la existencia de otras publicaciones que aludieran al tema.***[39] (Énfasis añadido).

49. Este concepto de *exceptio veritatis*, (artículo 149 del Código Penal) está profundamente vinculado con el delito tipificado en el artículo 152. Ambas disposiciones, por sí mismas, pero en especial cuando se las invoca para proteger a quienes ejercen funciones públicas, violan la Convención. Su aplicación atenta contra la libertad de expresión protegida por el artículo 13 del Pacto de San José; y contra la presunción de inocencia, garantizada por el artículo 8.2 del mismo instrumento.

50. **La *exceptio veritatis*, en el contexto del presente caso, viola la libertad de expresión (art. 13 CADH).** No escapará a esa

---

[37] Anexo 8 de la demanda de la CIDH. págs. 344 y 345

[38] *Véase*, Anexo 12 de la demanda de la CIDH, segunda parte.

[39] *Ibíd.*, pág. 22.

Honorable Corte que la doctrina relativa a la *exceptio veritatis* adoptada por los tribunales costarricenses en el presente caso, así como la aplicación al mismo del artículo 152 del Código Penal de ese país, contradicen de manera flagrante el contenido esencial del derecho humano a la libertad de expresión, tal como ha sido recogido en los instrumentos interamericanos sobre derechos humanos y ha sido interpretado por los órganos del sistema.

51. En efecto, de acuerdo con el artículo 13 de la Convención, el derecho a la libertad de expresión comprende *"la libertad* ***de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole****, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección."* En una sociedad democrática, el derecho a "buscar" información debe ser entendido en el más amplio sentido. Cabe recordar a este respecto que en los *travaux préparatoires* del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo artículo 19 inspiró parcialmente el artículo 13 del Pacto de San José, a proposición de la India se trató de suavizar el verbo "buscar" ("*seek*") por "recolectar" ("*gather*"), y que esa posición fue derrotada[40]. Evidentemente, en el marco de la libertad de expresión, no se "busca" información para "recolectarla" o para configurar un banco de datos, sino para difundirla por cualquier medio. Nada más normal, dentro de la comunicación social, que los diferentes medios se hagan eco de lo publicado por otros; y mucho más aún, que el medio de comunicación de un país determinado, busque, halle y difunda lo que en la prensa extranjera se publica sobre temas relacionados con ese país, tanto más si involucran a funcionarios públicos.

52. Esa Honorable Corte tuvo la ocasión de resaltar este papel vital de los medios de comunicación social como vehículo indispensable para el ejercicio de la libertad de expresión. Al referirse a la libertad de expresión, la Corte concluyó:

> *La importancia de este derecho destaca aún más al analizar el papel que juegan los medios de comunicación en una sociedad democrática, cuando son verdaderos instrumentos de la libertad de expresión y no vehículos para restringirla, razón por la cual es indispensable que recojan las más diversas informaciones y opiniones.*[41]

53. ¿Cómo podía cumplirse con el cometido recoger "las más diversas informaciones y opiniones" si se acoge el concepto de *exceptio veritatis* expuesto en las sentencias por las que se condena al periodista Herrera Ulloa y a "La Nación"? ¿Cómo podría una sociedad estar bien informada si, aplicando el

---

[40] *Cfr* NOWAK: *U.N. Covenant on Civil and Political*.... cit.. p. 343.

[41] Corte I.D.H., *Caso Ivcher Bronstein*... cit., párr. 149.

artículo 152 del Código penal de Costa Rica, es delito reproducir en la prensa nacional lo que se publicó en la prensa extranjera y que pudiera molestar a un funcionario público, a menos que se pueda probar que la publicación extranjera decía la verdad? Según esto, si un periodista reseña una noticia extranjera que atañe a Costa Rica, la cual, por la seriedad reconocida de sus fuentes no podía ser descartada como inverosímil, especialmente cuando emana de diversas fuentes concordantes, se convierte en un criminal si esos hechos (que no han sido inventados por quien los publicó en Costa Rica, sino simplemente difundidos por ser públicos en el exterior) no se corresponden con la verdad. Esta doctrina es una verdadera aberración que privaría de todo contenido o al menos menoscabaría más allá de lo que la Convención puede tolerar, la libertad de expresión y al derecho a la información, restringiendo la capacidad de los medios de comunicación para "recoger las más diversas informaciones y opiniones." Lo mismo podría decirse respecto del derecho de toda persona de *"**buscar**, recibir y **difundir información** e ideas **de toda índole, sin consideración de fronteras**..."*

54. Por otra parte, semejante régimen legal comporta necesariamente que, para evitar ser condenado penalmente, un periodista postergue la reproducción de una información difundida por un medio extranjero o una agencia internacional, incluso cuando hay un evidente interés de la sociedad en recibirla, hasta cerciorarse completamente sobre la veracidad de hechos presuntamente ofensivos, incluso contra un funcionario público de su país, que esa publicación se corresponde con la verdad. En el mundo que vivimos, caracterizado por sus altos niveles de intercomunicación, semejante postergación se traduciría normalmente en la cancelación definitiva de la información, lo que equivaldría, en la práctica, a una forma de ***autocensura***, incompatible con el concepto de libertad de expresión y, claro está, con la Convención.

55. La aludida doctrina sobre la *exceptio veritatis* también vulnera la doctrina expuesta por la Corte en cuanto a la función de los periodistas:

> *Asimismo es fundamental que los periodistas que laboran en dichos medios gocen de **la protección** y de la independencia necesarias para realizar sus funciones a cabalidad, ya que son **ellos los que mantienen informada a la sociedad, requisito indispensable para que ésta goce de una plena libertad**.*[42] (Énfasis añadidos).

56. No está en discusión la legitimidad del establecimiento de ciertas responsabilidades civiles ulteriores al ejercicio de la libertad de expresión,

---

[42] *Ibíd.*, párr 150.

siempre que se cumplan con los requisitos que para tales limitaciones establece la Convención, en los términos en que la misma ha sido interpretada por la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, particularmente en lo que toca a que dichas limitaciones deben ser ***necesarias en una sociedad democrática***. Pero ello no puede conducir a la criminalización de la difusión de información proveniente de terceros, especialmente sin haber demostrado que el periodista ha actuado con dolo, esto es, con intención de dañar y a conciencia de que reproducía información falsa. Esa criminalización de la información, absolutamente impropia en una sociedad democrática, es la que resulta de la aplicación del texto de los artículos 149 y 152 del Código Penal de Costa Rica, tal como lo ha hecho la sentencia 1320-99 del 12 de noviembre de 1999, confirmada por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia el 24 de enero de 2001.

57. ¿Cómo es posible difundir libremente noticias o informaciones provenientes de medios de comunicación extranjeros o de agencias internacionales de prensa, si previamente tiene que hacerse una investigación sobre la verdad de lo que tales medios o agencias publican? ¿Cómo puede criminalizarse la reproducción o difusión de una noticia proveniente de varios prestigiosos medios del exterior y que son del interés de la opinión pública costarricense, por el sólo hecho de que pudiera incurrir en ***"ofensas al honor" provenientes de un tercero*** y porque el periodista que escribió dichos reportajes a pesar de haber investigado razonablemente sobre la veracidad del fondo de tan nutridos y concordantes noticias de periódicos europeos, sin arribar a resultados concluyentes; y así lo hizo saber en sus reportajes? ¿Con qué pretexto se puede conculcar el derecho de estar informado, por los medios de comunicación nacionales, sobre los cuestionamientos que se hacen en el exterior a los funcionarios diplomáticos de su país?

58. En conclusión, denunciamos como violatorio al artículo 13.1 de la Convención que el ordenamiento jurídico de Costa Rica tipifique como delito que un periodista difunda en Costa Rica noticias que tienen por fuente otros medios de comunicación extranjeros y que contengan presuntas ofensas contra un funcionario público costarricense, a menos que pruebe que los hechos publicados por los medios extranjeros se corresponden con la verdad, y sin que exista prueba de la mala fe de dicho periodista. *A fortiori*, es igualmente contraria a la Convención una sentencia que condene penalmente a un periodista en Costa Rica en aplicación de semejante legislación. ***Por lo tanto, la sentencia del 12 de noviembre de 1999, que condenó a Mauricio Herrera Ulloa y a "La Nación" con base en el artículo 152 de la Convención, así como todos los fallos y resoluciones que han***

confirmado dicha sentencia o proveído a su ejecución, violan el artículo 13.1 de la Convención.

- **Medida de la legitimidad de las limitaciones a la libertad de expresión con base en el respeto a la reputación de los demás, cuando se trata de información atinente a la conducta de funcionarios públicos [CADH, art. 13.2]).**

59. Compartimos plenamente, por lo demás, el razonamiento de la demanda de la Ilustre Comisión en cuanto a que la condena dictada por los tribunales costarricenses en contra del señor Mauricio Herrera Ulloa constituye una violación a su libertad de expresión, además, porque no se encuentra en concordancia con los límites establecidos en el artículo 13.2 de la Convención Americana. Asimismo, no obedece a la protección de derechos amparados por la Convención de legítima restricción al derecho a la libertad de expresión en aras de la protección de la reputación y la honra, reconocidos asimismo en el artículo 11 del citado instrumento internacional.

60. Las disposiciones penales sobre difamación, calumnias e injurias, por las que se condenó a Mauricio Herrera Ulloa, se encuentran expresamente contempladas en la legislación costarricense relativa a la protección de la honra, la reputación y la dignidad de las personas[43]. Ahora bien, como ya lo hemos dicho antes en este mismo escrito, a la luz de los artículos 11 y 13 de la Convención Americana, la aplicación de las leyes de privacidad dentro del derecho interno deben ajustarse a los estándares internacionales que exigen un adecuado balance entre la protección de la privacidad y la honra y el resguardo de la libertad de expresión. Dicho balance debe atender que al imponer una restricción a la libertad de expresión ésta debe demostrar ser "necesaria" para la vigencia de una sociedad democrática.[44] En este sentido, los Estados tienen la obligación de proteger el derecho a la honra y la privacidad de las personas sin limitar indebidamente el derecho a la libertad de expresión en el marco de una sociedad democrática.

61. En general, las conductas que se tipifican en los delitos de calumnia, injuria y difamación, consisten en la falsa imputación de delitos a una persona o en expresiones de palabra o de hecho que afectan su honor o su dignidad, o la propagación de información tendiente a afectar su reputación. Puede afirmarse, sin duda, que estos tipos penales tienden a proteger derechos garantizados por la propia Convención. El bien jurídico honor está consagrado en el artículo 11 de la

---

[43] *Véase*, Código Penal, Libro Segundo: De los Delitos; Título II: Delitos contra el Honor, Sección única: Injuria, calumnia, difamación, Arts. 145 (Injurias), 146 (Difamación), 147 (Calumnia) y 152 (Publicación de Ofensas). Editorial Investigaciones Jurídicas. (Versión Revisada y actualizada, 2001). Anexo "A".

[44] *La colegiación obligatoria...* cit., párr. 46. *Ver también* Corte E.D.H., sentencia *"The Sunday Times"*, Serie A Nº 30, párr. 59.

Convención. ***Sin embargo, cuando las responsabilidades ulteriores se estipulan mediante la sanción penal en casos como el presente, que involucran expresiones sobre cuestiones de interés público, concordamos totalmente con la demanda de la Comisión en el sentido de que se está ante una vulneración del derecho consagrado en el artículo 13 debido a que no existe un interés social imperativo que justifique la imposición de una sanción penal.*** Existen medios menos restrictivos de la libertada de expresión para la protección de la reputación. ***La utilización de la figura penal es desproporcionada e innecesaria en una sociedad democrática, de manera que constituye una ilegítima restricción indirecta a la libertad de expresión.***

62. La Corte Europea ha manifestado que:

> *...los límites de la crítica admisible son más amplios en relación al gobierno que a un simple particular (...). Además, la posición dominante que ocupa le exige mostrar moderación en el recurso a la vía penal.*[45]

63. El libre discurso y debate político son parte esencial para la consolidación de la vida democrática de las sociedades y que, en general, los mismos revisten un interés social imperativo, lo que deja al Estado un marco aún más ceñido para justificar una limitación a la libertad de expresión.[46] La Comisión reitera que todo Estado democrático reposa en la existencia de un amplio intercambio de información y en el escrutinio público tanto de las funciones encomendadas a sus servidores públicos como de las acciones que éstos realizan en el desempeño de dichas funciones.[47]

64. En una sociedad democrática, el control efectivo por parte de la ciudadanía de actos de interés público llevados a cabo por funcionarios públicos o por particulares involucrados voluntariamente en asuntos públicos, tal como es el caso del diplomático honorario que acusó penalmente a Mauricio Herrera Ulloa, no sólo requiere que el Estado se abstenga de censurar la información difundida sino que requiere la acción positiva de proporcionar dicha información a los ciudadanos con el objeto de robustecer el debate sobre asuntos de carácter público y promover la transparencia. Sin esta información no puede ejercerse la libertad de expresión como mecanismo efectivo de participación ciudadana y de control democrático de la gestión pública.

---

[45] Corte E.D.H., *Caso "Castells vs. España"*... cit., párr. 46.

[46] *Véase* Corte E.D.H., *Caso* "Feldek v. Slovakia", Sentencia del 12 de julio de 2001, párr. 59.

[47] *Véase* CIDH, *Informe sobre la compatibilidad entre las leyes de desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos*. OAS Doc.9, 88 Período de Sesiones, 17 de febrero de 1995. También *Ver* CIDH, *Informe Anual*, OEA/Ser.L/V/II.88.Doc.9.rev. 17 de febrero de 1995, p. 218. Corte E.D.H., *Caso "Lingens v. Austria*, Series A, Nº 103, 1986; *"Castells v. España"*... cit.

65. En general, los funcionarios públicos, por la naturaleza de sus funciones, están sujetos al escrutinio de la ciudadanía. Por lo tanto, deben demostrar mayor tolerancia a la crítica, lo cual implica de hecho una protección de la privacidad y la reputación diferente que la que se le otorga a un simple particular.[48] La controversia desatada en la prensa belga en torno al diplomático Przedborski, figura pública supuestamente conectada a actos de corrupción, no podía ser recibida con indiferencia por los periodistas y los medios de comunicación costarricenses. Por el contrario, era más bien un deber profesional el de informar a la opinión pública sobre un debate abierto en Europa, como consecuencias de actuaciones turbias que la prensa belga atribuía a alguien que, por su investidura, ostentaba la representación oficial de Costa Rica.

66. Los artículos sobre ese asunto, que fueron criminalizadas por los tribunales costarricenses, escritos por Mauricio Herrera Ulloa y aparecidos en el diario de los artículos en el diario "La Nación", insertaron en sus páginas un tema de interés público, generando el debate y escrutinio de la sociedad costarricense sobre las acciones de uno de sus representantes en el exterior. Es decir que, Mauricio Herrera Ulloa como periodista y La Nación como periódico fomentaron el debate público acerca de un funcionario público, lo que representa un interés social imperativo dentro de una sociedad democrática. Por ende, las responsabilidades ulteriores que el Estado indebidamente imputó al periodista que redactó dichos artículos, no podían legítimamente contravenir dicho interés social imperativo de promover el debate público, sin desvirtuar la legitimidad de las limitaciones a la libertad de expresión autorizadas por el artículo 13.2 de la Convención Americana.

67. Al analizar el tema de la protección de la reputación y la honra en el presente caso, es pertinente distinguir entre la persona privada y la pública. En una sociedad democrática es necesario que la ciudadanía pueda tener un control completo y eficaz de la forma en que se conducen los asuntos públicos. Ello requiere que la protección que se otorga a quienes manejan dichos asuntos sea diferente a la que se le brinda a un particular que no está involucrado en asuntos de interés público. El honor de los funcionarios públicos es un bien que debe ser jurídicamente protegido, pero también es cierto que la naturaleza pública de las funciones que desempeñan exige que la magnitud de la lesión inferida a su honor, por las críticas o señalamientos que se les hacen y que se relacionan con su investidura, sea mayor que la que se requiere cuando el destinatario de la crítica es un particular, a los efectos de acarrear la responsabilidad de quien profiere tales críticas o señalamientos.[49] No cabe duda

---

[48] *Ibíd.*, CIDH, Informe sobre la compatibilidad entre las leyes de desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, OEA/Ser.L /V/ II.88, doc. 9 rev., 17 de febrero de 1995.

[49] Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su 108° período ordinario de sesiones del 19 de octubre de 2000. Principio número 11. También véase

ni discusión que un diplomático es un funcionario público y que en el caso específico del diplomático Przedborski por sus diversas actividades es una figura pública en Costa Rica.

68. La Honorable Corte ha sostenido que en la arena del debate político o temas de alto interés público, el Sistema Interamericano no sólo protege el discurso o expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública sino también aquella que ofende o perturba al Estado o a parte de la población.[50] La Corte puntualizó además, lo siguiente:

> *El honor de los individuos debe ser protegido sin perjudicar el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de recibir información, Además el artículo 14 de la Convención prevé que toda persona afectada por información inexacta o agraviante emitidas en su perjuicio tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta.*[51]

69. Con respecto a la necesidad de fomentar el debate dentro de una sociedad democrática, la Ilustre Comisión ha señalado específicamente que:

> *[E]n la arena política en particular, el umbral para la intervención del Estado con respecto a la libertad de expresión es necesariamente más alto debido a la función crítica del diálogo político en una sociedad democrática. La Convención requiere que este umbral se incremente más aún cuando el Estado impone el poder coactivo del sistema de la justicia penal para restringir la libertad de expresión (...).*
>
> *La Comisión considera que la obligación del Estado de proteger los derechos de los demás se cumple estableciendo una protección estatutaria contra los ataques intencionales al honor y a la reputación mediante acciones civiles y promulgando leyes que garanticen el derecho de rectificación o respuesta. En este sentido, el Estado garantiza la protección de la vida privada de todos los individuos sin hacer un uso abusivo de sus poderes coactivos para reprimir la libertad individual de formarse opinión y expresarla.*[52]

Anexo 20: Artículo del diario La Nación Digital donde se hace referencia a la calidad de funcionario público del señor Félix Przedborski, fecha 24 de abril de 2002.

[50] *Véase*, Corte I.D.H., *Caso "La Última Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y Otros vs. Chile)*. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C Nº 73, párr. 69.

[51] *Ibid.*, párr.61 (i).

[52] *La colegiación obligatoria...*, cit., párr. 54. *Véase también* Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH que se refiere a los delitos contra la reputación y el honor:

> ***Principio 10.***
>
> *Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las*

70. La Comisión se ha pronunciado en varias ocasiones y circunstancias la ocasión de pronunciarse contra el delito de ***desacato*** que privilegia a los funcionarios públicos, así como contra la sanción de los delitos de calumnia, injuria o difamación cuando están involucrados funcionarios públicos, salvo cuando están inspirados en la real malicia o intención de dañar, que pueden dar derecho a reparación. La razón de fondo para combatir esas figuras es la necesidad social y política, dentro del juego democrático, de no desalentar la crítica de quienes ejercen funciones públicas y están sujetos, por esa razón, a un mayor escrutinio de la sociedad, dentro del sistema de principios y valores propio de la democracia representativa y de la rendición de cuentas que los funcionarios le deben al pueblo a cuyo servicio están.

71. Así, la Comisión ha expresado:

> ***La aplicación de leyes para proteger el honor de los funcionarios públicos que actúan en carácter oficial les otorga injustificadamente un derecho a la protección de la que no disponen los demás integrantes de la sociedad.*** *Esta distinción invierte indirectamente el principio fundamental de un sistema democrático que hace al gobierno objeto de controles, entre ellos, el escrutinio de la ciudadanía, para prevenir o controlar el abuso de su poder coactivo. Si se considera que los funcionarios públicos que actúan en carácter oficial son, a todos los efectos, el gobierno, es precisamente el derecho de los individuos y de la ciudadanía criticar y estructurar las acciones y actitudes de esos funcionarios en lo que atañe a la función pública.*

Y agregó:

> *Es más, la Comisión observa que contrariamente a la estructura que establecen las leyes de desacato en una sociedad democrática, las personalidades políticas y públicas deben estar más expuestas –y no menos expuestas- al escrutinio y la crítica del público. La necesidad de que exista un debate abierto y amplio, crucial para una sociedad democrática, debe abarcar necesariamente a las personas que participan en la formulación y la aplicación de la política pública. Dado que estas personas están en el centro del debate público y se exponen a sabiendas al escrutinio de la ciudadanía deben demostrar mayor tolerancia a la crítica.*[53]

---

noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas.

[53] Citado en el Informe Anual del Relator Especial para la Libertad de expresión, 1999; Capítulo II.B.1.

72. Por su parte, el párrafo 11 de la *Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión* aprobado por esa CIDH en su 108º período de sesiones, determina:

> ***Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad***. *Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como "leyes de desacato", atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información.*

73. Obviamente, el derecho a buscar información se refiere a por lo menos a *toda información generalmente accesible*, tanto más cuando ella misma es del dominio público en cuanto ha sido objeto de amplia difusión a través de conocidos medios de comunicación social.

74. Es obvio que todos estos principios que inspiran el contenido de la libertad de expresión, tal como la misma ha sido concebida en la interpretación de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, han quedado radicalmente vulnerados con la sentencia contra el periodista Mauricio Herrera Ulloa y, solidariamente, contra el diario "La Nación".

75. Por todo lo anterior, las manifestaciones o información emitida o distribuida en relación con asuntos de interés público que involucran a figuras públicas, (como presuntos actos de corrupción de funcionarios públicos) no deben ser considerados hechos punibles. Por ello, la sanción penal impuesta a Mauricio Herrera Ulloa por los tribunales costarricenses es contraria a la Convención Americana.

76. Asimismo, suscribimos el parecer de la Comisión en su demanda, cuando sostiene que de la aplicación de la sanción penal impuesta a Mauricio Herrera para proteger el honor de un funcionario público costarricense acusado de actos de corrupción necesariamente deviene un efecto amedrentador que inhibe el pleno ejercicio de la libertad de expresión. En el Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la Convención Americana, la Comisión abundó sobre este concepto al señalar:

> *[S]i se consideran las consecuencias de las sanciones penales y el efecto inevitablemente inhibidor que tienen para la libertad de expresión, la penalización sólo puede aplicarse en circunstancias excepcionales en las que exista una amenaza evidente y directa de violencia anárquica (...) las leyes que traen consigo la amenaza de cárcel o multas para quienes insultan u ofenden a un funcionario público, necesariamente desalientan a los ciudadanos a expresar sus opiniones sobre*

problemas de interés público por lo que restringe indirectamente la libertad de expresión.[54]

77. A los efectos de la sanción penal, lo verdaderamente relevante es la imputación de un hecho punible al periodista que ejerce su profesión en el contexto antes descrito, pues la atribución de la responsabilidad penal comporta, además de la sanción principal, sanciones accesorias de distinta naturaleza (inscripción como delincuente, orden de publicar la sentencia, diversas sanciones de orden civil) y, además, consecuencias indelebles desde el punto de vista social, moral y profesional. Por lo tanto, no hay diferencia sustancial cuando la ***sanción penal*** se traduce en una multa equivalente a días de cárcel, aunque no comporte necesariamente la privación de libertad personal. El efecto de la sanción penal impuesta al periodista Herrera Ulloa por la difusión de información de interés público y relacionado con la actividad de un funcionario del Estado resulta, como tal condena penal, en sí misma, violatoria del artículo 13 de la Convención.

78. La sanción penal impuesta a Mauricio Herrera lo inhibe para difundir libremente información sobre actos de funcionarios públicos ante el riesgo de verse enfrentado a nuevas condenas criminales y ser tratado como un delincuente.

79. En este orden de ideas, las disposiciones penales sobre difamación, injurias y calumnias costarricenses fueron utilizadas por el Estado con el propósito o efecto práctico de inhibir la crítica dirigida hacia un funcionario público, así como para censurar la publicación de artículos relacionados con presuntas actividades ilícitas desarrolladas por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, el efecto de la sanción impuesta es, *per se*, equivalente en su esencia a aquéllas impuestas conforme a las leyes de desacato y, por lo tanto, violan la Convención.

80. Puede concluirse entonces con certeza que la sanción penal impuesta al periodista Herrera Ulloa por "publicación de ofensas" en la gama de difamación constituyó un medio excesivo para proteger el honor de un funcionario público. Existían medidas menos restrictivas para proteger la privacidad y la reputación del diplomático honorario de Costa Rica, tales como el derecho de rectificación o respuesta. Además, la importancia que tiene el libre y amplio debate de los asuntos de interés público es incompatible con restricciones que comporten la criminalización de la difusión de información como la relativa a los presuntos actos ilícitos atribuidos al diplomático

---

54 CIDH, Informe sobre la compatibilidad entre las leyes de desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en Informe Anual de la CIDH, Volumen III: Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión, OAS/Ser.L/II.102 Doc. 6 rev. 16 de abril 1999, pág. 38. Véase también Anexo 21: Artículo del Nacional Digital "No nos dejan decir", fecha 6 de mayo de 2001.

honorario de Costa Rica en artículos de la prensa europea. El conocimiento de esos cuestionamientos a un funcionario diplomático en el extranjero es de alto interés público tanto en Costa Rica como en la comunidad internacional dada la importancia en combatir actos de corrupción y promover la transparencia de los actos de gobierno y sus funcionarios.[55] Cabe recordar que toda sociedad deposita en sus representantes la confianza de que las acciones de todo funcionario público se rijan bajo estándares de ética y transparencia.[56] La condena penal contra Herrera Ulloa por diseminar información producida anteriormente por terceras fuentes europeas necesariamente inhibe la difusión y reproducción de información sobre temas de interés público, desalentando el debate público sobre asuntos que afectan el debate democrático en la sociedad costarricense.[57]

81. Aduce el Estado[58] que el periodista Herrera Ulloa fue condenado en virtud de lo dispuesto en el artículo 152 del Código Penal, que tipifica el delito de publicación e ofensas, que es de carácter doloso y, por lo tanto, requiere que el autor haya actuado a sabiendas de que lo publicado o reproducido constituía una ofensa para el honor de otra persona. Señala que es indispensable mencionar que el sistema jurídico costarricense protege el honor objetivo y no el subjetivo de la persona, razón por la cual se sanciona a quien, a pesar de entender lo ofensivo de lo que publica o reproduce, no tiene el cuidado debido de abstenerse en caso de tener dudas de su certeza.[59]

82. Dicha afirmación del Estado, en primer lugar, no es exacta. Como se ha descrito anteriormente (*supra*, párrs. 43-58), el querellante, señor Przedborski, no tuvo que probar el dolo del periodista Mauricio Herrera Ulloa. Por obra de la aberrante aplicación de la *exceptio veritatis* por los tribunales costarricenses en el presente caso, se invirtió la carga de la prueba y era el periodista quien tenía que probar la exactitud de lo publicado ¡por la prensa belga! para hacerse acreedor a una causa excepcional de absolución basada en la prueba de la verdad.

83. Por el contrario, el estándar aplicado por el Estado al presente caso obstaculiza gravemente el libre intercambio de ideas y opiniones, cercena el debate público y además es contrario a la jurisprudencia internacional en la

---

[55] La Corte Interamericana ha sostenido que antes de imponer una restricción a la libertad de expresión es necesario establecer cuál es el medio menos restrictivo para alcanzar dicho objetivo. La Corte requiere que la interpretación que se haga de esta relación esté orientada por la necesidad de preservar las instituciones democráticas. Corte I.D.H., *La colegiación obligatoria...* cit., párrs. 41 y 42.

[56] *Véase*, Corte E.D.H, *Caso "Janowski v. Polonia"*, sentencia de 21 de enero de 1999, párr. 33.

[57] *Véase*, "Jersild v. Dinamarca", sentencia del 23 de septiembre de 1994, Serie A, Nº 298, párr. 54.

[58] Véase Anexo 14: Comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República de Costa Rica dirigida a la CIDH con fecha de 10 de agosto de 2001, que contiene las Observaciones sobre la petición original y su adición en el caso Nº 12.367 Mauricio Herrera Ulloa – Costa Rica; págs. 19 y 20.

[59] *Véase*, Anexo 1: CIDH, Artículo 50, Posición de las Partes: B. El Estado, párr.38.

materia. Por añadidura a lo que en este escrito ya se ha expresado sobre el resultado perverso contra la libertad de expresión de la aplicación conjunta de los artículos 152 y 149 del Código Penal, cabe ahora formular ciertas consideraciones específicas respecto a la publicidad y el grado de corroboración que debe ejercer la prensa al informar sobre asuntos de interés público que involucran a personas públicas.

84. La Corte Europea planteó claramente que no es necesario dentro de una sociedad democrática que los periodistas prueben la verdad de sus opiniones o juicios de valor relacionados con figuras políticas.[60] Asimismo, dicho órgano interpretó que el rol fiscalizador público que se le otorga a la

---

[60] Corte E.D.H., *Caso "Oberschlick v. Austria"*, sentencia de 23 de mayo de 1991, Serie A., Nº 204. párrafos: 57, 58, 61, 62, 63 y 64 respectivamente señalaron:

The Court recalls that freedom of expression, as secured in paragraph 1 of Article 10 (art. 10-1), constitutes one of the essential foundations of a democratic society and one of the basic conditions for its progress and for each individual's self-fulfilment. Subject to paragraph 2 (art. 5-2). it is applicable not only to "information" or "ideas" that are favourably received or regarded as inoffensive or as a matter of indifference, but also to those that offend, shock or disturb; such are the demands of that pluralism, tolerance and broadmindedness without which there is no "democratic society" (see, inter alia, the Handyside judgement of 7 December 1976, Series A Nº 24, p. 23, para. 49, and the Lingens judgement of 8 July 1986, Series A Nº 103, p. 26, para. 41). Article 10 (art. 10) protects not only the substance of the ideas and information expressed, but also the form in which they are conveyed.

58. These principles are of particular importance with regard to the press. Whilst it must not overstep the bounds set, inter alia, for "the protection of the reputation of others", its task is nevertheless to impart information and ideas on political issues and on other matters of general interest (see, mutatis mutandis, the Sunday Times judgment of 26 April 1979, Series A Nº 30, p. 40, para. 65, and the above-mentioned Lingens judgment, loc. cit.). Freedom of the press affords the public one of the best means of discovering and forming an opinion of the ideas and attitudes of political leaders. This is underlined by the wording of Article 10 (art. 10) where the public's right to receive information and ideas is expressly mentioned. More generally, freedom of political debate is at the very core of the concept of a democratic society which prevails throughout the Convention (see the above-mentioned Lingens judgment, Series A Nº 103, p. 26, para. 42).

61. [...] Mr Oberschlick's criticisms, as the Commission pointed out, sought to draw the public's attention in a provocative manner to a proposal made by a politician which was likely to shock many people. A politician who expresses himself in such terms exposes himself to a strong reaction on the part of journalists and the public.

62. In its judgment of 11 May 1984 the Regional Court found that the article in question, "despite its designation as a criminal information, gives the impression of being intended to condemn" the character of the politician. It therefore held that Mr Oberschlick's allegations against him came under the general rule (Article 111 para. 3 of the Criminal Code - see paragraph 25 above) that a person making a defamatory statement through the media incurs criminal liability unless he proves that it is true.

63. The Court, however, cannot subscribe to them. The information, as published by Mr Oberschlick, began by reciting the facts under the heading "Sachverhalt", that is reporting Mr Grabher-Meyer's statements. It is undisputed that this part of the information was factually correct. What followed was an analysis of these statements, on the basis of which the authors of the information concluded that this politician had knowingly expressed ideas that corresponded to those professed by the Nazis. The Court can regard the latter part of the information only as a value-judgment, expressing the opinion of the authors as to the proposal made by this politician, which opinion was clearly presented as derived solely from a comparison of this proposal with texts from the National Socialist Party Manifesto. It follows that Mr Oberschlick had published a true statement of facts followed by a value-judgment as to those facts. The Austrian courts held, however, that he had to prove the truth of his allegations. As regards value-judgments this requirement is impossible of fulfillment and is itself an infringement of freedom of opinion (see the above-mentioned Lingens judgement, Series A Nº 103, p. 28, para. 46). As to the form of the publication, the Court accepts the assessment made by the Austrian courts. It notes that they did not establish that "the presentation of the article in the form of a criminal information" was misleading in the sense that, as a consequence thereof, a significant number of the readers were led to believe that a public prosecution had been instituted against Mr Grabher-Meyer or even that he had already been convicted. The Austrian courts said no more than that this particular form of presentation was intended to ensure that what in their eyes was an accusation as to his character would have "a particularly telling effect on the average reader". In the opinion of the Court, however, in view of the importance of the issue at stake (see paragraph 61 above), Mr Oberschlick cannot be said to have exceeded the limits of freedom of expression by choosing this particular form.

64. It follows from the foregoing that the interference with Mr. Oberschlick's exercise of his freedom of expression was not "necessary in a democratic society ... for the protection of the reputation ... of others". There has, accordingly, been a violation of Article 10 (art. 10) of the Convention.

prensa permite que, dentro de sus responsabilidades y obligaciones, la profesión periodística también *recurra a ciertos grados de exageración o inclusive provocación*, en la emisión de información de temas relacionados al interés público.[61] En tal sentido este Tribunal internacional señaló que:

> *[...]En un sistema democrático las acciones u omisiones del gobierno deben estar sujetas a exámenes rigurosos, no sólo por las autoridades legislativas y judiciales, sino también por la opinión pública. La libertad de expresión e información debe extenderse no sólo a la información e ideas favorables sino también a aquellas que ofendan, resultan chocantes o perturban.*[62] *El castigar a un periodista por asistir en la diseminación de aseveraciones realizadas por otra persona amenazaría seriamente la contribución de la prensa en la discusión de temas de interés público.*[63]

85. Mauricio Herrera Ulloa y la sociedad costarricense tienen el derecho a participar en debates activos, firmes y desafiantes relacionados con todos los aspectos vinculados al funcionamiento normal y armónico de la sociedad. El tipo de debate a que da lugar el derecho a la libertad de expresión genera inevitablemente ciertos discursos críticos, que pueden ser más o menos imprecisos o, incluso, ser percibidos como ofensivos para quienes ocupan cargos públicos o están notoriamente vinculados con la formulación de la política pública o con otras actividades de carácter público e interés general. De ello se concluye que una ley, como los artículo 149 y 152 del Código Penal costarricense; o una acción estatal, como las sentencias condenatorias aquí atacadas, al sancionar penalmente el discurso que se considera crítico de un personero de la administración pública en la persona de Mauricio Herrera, autor de esa expresión, afecta la esencia y al contenido de la libertad de expresión. Dichas limitaciones a la libertad de expresión afectan no sólo a quienes se silencia directamente, sino también al conjunto de la sociedad.[64]

86. La libertad de expresión es una de las formas más eficaces para denunciar y corroborar, a través del debate e intercambio amplio de información e ideas, presuntos actos de corrupción atribuibles a los entes y funcionarios del Estado en el ejercicio de sus funciones. En este sentido, la regla general aplicable en estos casos debe ser la publicidad de información que se refiera a actos de corrupción de la Administración Pública o de sus funcionarios. El uso del poder punitivo del Estado para limitar, a través de la imposición de sanciones penales, la expresión de ideas o la difusión de noticias,

---

[61] Corte E.D.H., *Caso "Thoma v. Luxemburg"*, sentencia de 29 de marzo de 2001, párr. 46. También, Corte E.D.H., "Prager and Oberschlick v. Austria", sentencia de 26 de abril de 1995, Serie A Nº 313, p.19, párr. 38.

[62] *"Castells v. España"*... cit., párr. 20.

[63] Corte E.D.H., *Caso "Thoma v. Luxemburgo"*... cit., párr. 62.

[64] Informe sobre la compatibilidad de las leyes de desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, *supra*, pie de página No. 33, pág.8.

se presta al abuso, ya que al acallar ideas, opiniones o noticias adversas, desagradables o críticas se restringe un debate que es fundamental para el funcionamiento eficaz de las instituciones democráticas.[65]

87. En síntesis, debe concluirse que la sanción y penalización por delito de publicación de ofensas en la gama de difamación impuesta a Mauricio Herrera Ulloa por la publicación de artículos de interés público representan restricción de su libertad de expresión, que no es compatible con las necesidades de una sociedad democrática y no responde a una necesidad social imperiosa. Los artículos publicados por Mauricio Herrera Ulloa fueron parte del escrutinio público sobre la gestión de un funcionario del Estado costarricense en el exterior, claramente de interés público. Estaban, además, relacionados con la idoneidad de este funcionario y con presuntos actos delictivos. Por lo tanto, la condena penal impuesta al periodista Mauricio Herrera Ulloa, así como la civil que le es accesoria, por la publicación de tales artículos, es una violación de la libertad de expresión, tanto en su dimensión individual como en su dimensión social.

C. El Estado costarricense violó el derecho a la libertad de expresión de Mauricio Herrera Ulloa al incluirlo en el Registro de Delincuentes

88. En virtud de las medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana, el 16 de agosto el Estado presentó a la Corte un informe referente a la naturaleza y alcances del Registro Judicial de Delincuentes,[66] el cual fue trasladado por la Corte a la Comisión con fecha 17 de agosto de 2001.[67] Mediante dicho informe el Estado de Costa Rica indicó que *"si bien actualmente existe en el Registro Judicial de Delincuentes una inscripción de la sentencia condenatoria dictada contra Mauricio Herrera, cabe destacar que en dicha inscripción se hace referencia a la suspensión de la ejecución de la sentencia ordenada por esa Distinguida Corte Interamericana."* Asimismo, en dicho informe el Estado indica que de acuerdo con lo establecido por el artículo 12 de la Ley de Registro y Archivos Judiciales, sólo podría evitarse o remediar la inscripción en el Registro de Delincuentes de la sentencia dictada contra

---

[65] *Ibidem*, Conclusión: párrafo final. También véase comentario sobre la sentencia en "Jersild", páginas 25-26, párr. 35 en Corte E.D.H., "Thoma v. Luxemburg", sentencia de 29 de marzo de 2001, párr. 58, donde la Corte Europea señala la necesidad de que las Cortes domésticas ejerzan prudencia al tomar medidas o sanciones que avalen acciones estatales que disuadan a la prensa de participar en la discusión de temas relacionados con el interés público.

[66] Véase Anexo 18 de la demanda de la CIDH, Certificaciones expedidas por el Poder Judicial, el 14 de agosto de 2001 y el 29 de noviembre de 2001, relativas a la inscripción de Mauricio Herrera Ulloa en el Registro Judicial de Delincuentes.

[67] *Véase* Anexo 19 de la demanda de la CIDH. Informe del Estado sobre la legislación de Costa Rica en materia de la inscripción en el Registro Judicial de Delincuentes, 16 de agosto de 2001.

Herrera Ulloa, si, entre otros, el Tribunal sentenciador lo dictamina, o si lo ordena un recurso de revisión.[68]

89. Según la información suministrada por el Gobierno "*la inscripción de la sentencia condenatoria no es ordenada por la resolución judicial que condena, ni en el caso que nos ocupa ni en ningún otro. La inscripción es una consecuencia legal así dispuesta por la Ley N° 6723 del 10 de marzo de 1982, que es el cuerpo normativo que crea el Registro Judicial de Delincuentes*". De esa afirmación cabe extraer, por lo menos, dos conclusiones. La primera es que en la jurisdicción interna costarricense, la existencia de una sentencia condenatoria es una condición necesaria y suficiente para la inscripción *ipso jure* del condenado al Registro de Delincuentes. En otras palabras, ***sin sentencia condenatoria no hay inscripción, pero una vez dictado el fallo ésta es automática y no es necesario que el juez la ordene en la sentencia***. La segunda conclusión sería que el Juez de la causa no puede evitar que la inscripción sea una consecuencia automática de la ejecución del fallo y que en la legislación costarricense no existe un recurso efectivo para impedir la inscripción en el referido prontuario de una persona condenada penalmente (fuera de las soluciones que provee el Derecho internacional de los derechos humanos incorporadas al derecho interno).[69]

90. La inscripción del periodista Mauricio Herrera Ulloa, en el Registro Judicial de Delincuentes conlleva graves efectos jurídicos restrictivos en el ejercicio de sus derechos fundamentales al menos en las siguientes siete materias: 1. Ingreso al servicio civil; 2. Obtención de licencias para conducir automotores; 3. Solicitud de examen de grado e incorporación; 4. Otorgamiento de pólizas como conductor; 5. Otorgamiento de Pensiones; 6. Adopción de menores; y 7. Fines laborales en Costa Rica como en el exterior.[70]

91. Mauricio Herrera Ulloa, periodista y víctima en el presente caso, teniendo ahora gracias al vigente régimen procesal aprobado por esa Honorable Corte, la oportunidad de dirigirse a ella a través del presente escrito, que lleva su firma, por nuestro intermedio, expresa ante Ustedes, Señor Presidente y Señores Jueces que, los perjuicios en le ha acarreado su inscripción como delincuente en el Registro Judicial de Delincuentes no se agotan en las restricciones legales que tal inscripción le impuso, sino que, como profesional

---

[68] *Véase*, Anexo 13 de la demanda de la CIDH: Ley de Registro y Archivos Judiciales N° 6723, artículo 12:
Los asientos del Registro serán anulados o modificados únicamente en los siguientes casos:
1.Por orden emanada del Tribunal sentenciador.
2.Cuando así lo ordene la sentencia recaída en un recurso de revisión.
3.De acuerdo con resolución pronunciada por el Tribunal sentenciador o, en su caso, por el Juzgado de Ejecución de la Pena, en la que se modifique, se haga cesar una medida de seguridad, o bien se cambie por otra.

[69] *Véase*, Anexo 11 de la demanda de la CIDH Observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Informe del Estado de Costa Rica de 16 de Agosto de 2001.

[70] *Ibíd.*

joven y conocedor del valor de la ética para alcanzar la plena realización de su proyecto de vida y ser un periodista respetado y digno de la credibilidad de la sociedad a la que van dirigidos sus trabajos periodísticos, se le causó también un grave daño moral en su reputación como periodista y como ser humano. Esa inscripción trae consigo serios efectos sociales sobre su nombre, honor y reputación, ante su familia, ante sus colegas y ante la sociedad costarricense.

92. Ello se agrava por el hecho de las diversas entidades públicas y privadas que tienen acceso a este Registro, lo cual evidencia que no es un Registro secreto ni reservado sino público debido a la amplitud de instituciones y personas habilitadas para solicitarle información. En efecto, tienen acceso a este archivo –conforme al Informe del Estado- : 1. los jueces; 2. los Notarios; 3. los funcionarios del Ministerio Público; 4. el Organismo de Investigación Judicial; 5. la Dirección General de Adaptación Social; 6. la Dirección Nacional de Servicio Civil; 7. el Jefe del Departamento de Migración y Extranjería; 8. el Departamento de Personal del Ministerio de Seguridad Pública, y de Gobernación y Policía; 9. la Oficina del Ministerio de Transportes que extiende licencias para conducir automotores; 10. la Oficina de Opciones y Naturalizaciones del Registro Civil; 11. las Universidades y Colegios Profesionales; 12. el Patronato Nacional de la Infancia; 13. el Instituto Nacional de Seguros; 14. el Departamento Nacional de Pensiones del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social; 15. los Gobernadores o Delegados cantonales de la Guardia de Asistencia Rural; 16. los costarricenses en el extranjero por medio de los consulados o embajadas; 17. (indirectamente) los empleadores costarricenses y extranjeros; y 18. otras autoridades. En el caso bajo análisis, como consta de los anexos consignados por el Estado costarricense en su Informe, incluso una funcionaria de la Procuraduría General de la República (Jefe Sección de Servicios Generales), alegando pura y simplemente *"a efecto de dar cumplimiento a solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos..."*, obtuvo una certificación del registro de la inscripción del señor Herrera Ulloa en el Registro de Delincuentes.[71] El carácter público que, en la práctica, tiene dicho Registro, agrava el perjuicio que le ha causado la inscripción de su nombre en el mismo.

93. Por consiguiente, la inclusión de Mauricio Herrera Ulloa en el Registro de Delincuentes como consecuencia de la sentencia condenatoria por delito de publicación de ofensas en la gama de difamación, aunque ésta haga referencia a la orden de suspensión requerida por la Honorable Corte, constituye una forma indirecta de restricción a la libertad de expresión en clara vulneración del artículo 13 de la Convención Americana. El artículo 13.3 de la Convención Americana expresamente prohíbe la restricción a la libertad de

[71] Véase Anexo 11 de la demanda de la CIDH: *Observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Informe del Estado de Costa Rica de 16 de Agosto de 2001.*

expresión por vías o medios indirectos encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

94. La Honorable Corte Interamericana ha señalado la relación entre el ejercicio de la profesión periodística y la libertad de expresión al decir:

> *El ejercicio del periodismo profesional no puede ser diferenciado de la libertad de expresión; por lo contrario, ambas cosas están evidentemente imbricadas, pues el periodista profesional es una persona que ha decidido ejercer la libertad de expresión de modo continuo, estable y remunerado.*[72]

95. Tal como lo ha sostenido la Ilustre Comisión en la demanda, *"la inclusión de Herrera Ulloa en el Registro de Delincuentes como consecuencia de la condena penal expone al acusado a un juicio de desaprobación pública que afecta seriamente su reputación. Los efectos estigmatizantes de dicha inscripción, por más breve que ésta haya sido,*[73] *se extienden al derecho del señor Herrera Ulloa de ejercer su profesión libremente, ya que la inclusión de su nombre en el mencionado registro vulnera directamente su credibilidad. La credibilidad de un periodista es una herramienta esencial para que éste pueda desarrollar su profesión libremente en la búsqueda de información. La falta de credibilidad en un periodista puede producir un efecto inhibitorio sobre las fuentes que proveen a éste de la información necesaria para producir una noticia, afectando en forma directa su función como periodista. Los efectos estigmatizantes de dicha inscripción, asimismo, puede tener un efecto devastador tanto en su vida personal como en su futuro laboral y económico."*

96. Sobre el efecto que produce la referida inscripción en el Registro Judicial de Delincuentes, la Honorable Corte remarcó:

> *Que la inscripción en el Registro Judicial de Delincuentes causa un daño irreparable al periodista Herrera Ulloa, puesto que afecta su ejercicio profesional del periodismo y genera la inminencia de un daño irreparable a su honor. El hecho de que en este asunto se trate de un periodista, cuyo desempeño depende de su credibilidad, y que el delito imputado se relacione con el ejercicio de su profesión, lleva a la Corte a considerar que dicha inscripción debe dejarse sin efecto hasta que el caso sea resuelto en definitiva por los órganos del sistema interamericano de derechos humanos, para prevenir con ello daños que no puedan ser reparados, a diferencia de aquellos otros, de carácter esencialmente monetarios.*[74]

---

[72] Corte I.D.H.: *La colegiación obligatoria...*, cit., párr. 74.

[73] *Véase*, Certificación del Director del Registro Judicial: Fecha 1º de marzo de 2001 al 26 de abril de 2001.

[74] Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 de septiembre de 2001, *Solicitud de Medidas Provisionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la República de Costa Rica, Caso del Periódico "La Nación"*, Considerando, párr. 10. Igualmente, párrafo resolutivo Nº 11.

97. Asimismo, en este caso, como en cualquier otro en el que un periodista sea estigmatizado públicamente a través de su inscripción en un registro de delincuentes por supuestos delitos contra el honor de un funcionario público con ocasión del ejercicio de sus funciones, tal inscripción tiende a producir, tanto en el afectado como en el gremio periodístico en su conjunto, un efecto inhibitorio y de autocensura en su rol de informar a la sociedad sobre asuntos de interés público o sobre las actividades de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, todo lo cual redunda en un medio indirecto de restricción a la libertad de expresión.

98. Por lo tanto, la inclusión del señor Mauricio Herrera Ulloa en el Registro de Delincuentes constituye también un mecanismo ilegítimo de restricción a la libertad de expresión que viola el artículo 13 de la Convención Americana.

D. La sanción patrimonial resarcitoria impuesta *in solidum* al periodista Mauricio Herrera Ulloa y al Periódico "La Nación", representado por el señor Fernán Vargas Rohrmoser, como consecuencia civil de la condena penal por delito de publicación de ofensas en la gama de difamación, es violatoria de la Convención Americana

99. En los términos de la sentencia penal impuesta por los tribunales de Costa Rica contra Mauricio Herrera Ulloa, se declaró con lugar la acción civil resarcitoria por supuestos daños morales ocasionados al señor Félix Przedborski, por lo cual se condenó a *"MAURICIO HERRERA ULLOA y al PERIÓDICO LA NACION S.A., representada por Fernán Vargas Rohrmoser, presidente de la compañía, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, como demandados civiles yu* (sic) *en carácter de responsables civiles solidarios, al pago de* ***SESENTA MILLONES DE COLONES***... (El énfasis es del original; el subrayado es añadido). Asimismo, como condena pecuniaria accesoria, se *"condena a los demandados civiles al pago de las costas personales en la suma de* ***TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL COLONES***. *Son las costas del proceso a cargo del sentenciado."* (El énfasis es del original; el subrayado es añadido).

100. Estas condenas civiles fueron aplicadas con base en el Título VII del Libro Primero del Código Penal (*"Consecuencias civiles del hecho punible"*), en el cual se enuncia un principio general expresado en el artículo 103 del mismo Código[75]:

---

[75] Mencionado entre los fundamentos legales del fallo del 12 de noviembre de 1999. *Véase*, Anexo Nº 8 de la demanda de la CIDH, pág. 35, segunda línea del POR TANTO. En dicha sentencia también se alude a los artículos 122 y 125 de la *"Reglas Vigentes sobre Responsabilidad Civil"* del Código Penal de 1941. Dichas normas aluden, en

> *Todo hecho punible tiene como consecuencia la reparación civil, que será determinada en la sentencia condenatoria. Esta ordenará:*
>
> ... (Omissis)
> *2) La reparación de todo daño; y la indemnización de los perjuicios causados tanto al ofendido como a terceros...*

101. Por lo tanto, las penas pecuniarias impuestas por la sentencia, tienen carácter accesorio respecto de la condena penal. Se trata de una responsabilidad civil derivada del delito, de tal modo que, de no haber quedado establecida la imputabilidad del hecho punible a Mauricio Herrera Ulloa, no habría sustento para que dicha sentencia penal pronunciara una condenatoria en materia civil. Esto es válido tanto por lo que toca a la "reparación de todo daño", que se deduce del citado párrafo segundo del artículo 103 del Código Penal; como por lo que respecta a la condenatoria en costas, en relación con la cual la sentencia señala expresamente que *"son las costas del proceso* ***a cargo del sentenciado.***" En ambos casos, pues, se trata de sanciones pecuniarias indisolublemente vinculadas con la condena penal, en relación de accesorio a principal.

102. Más adelante en este mismo escrito, nos referiremos a las consecuencias que tiene esta relación de accesorio a principal entre la responsabilidad civil y la penal. En este punto nos referiremos sustancialmente al hecho fundante de la responsabilidad civil ***atribuida solidariamente a Mauricio Herrera Ulloa y al periódico "La Nación", representado por Fernán Vargas Rohrmoser***.

- **La condena civil derivada del delito viola el derecho de libertad de expresión de las víctimas.**

103. La condena civil impuesta solidariamente a Mauricio Herrera Ulloa y al periódico "La Nación" representada por Fernán Vargas Rohrmoser ***solidariamente***, se fundamente en que el primero de los nombrados fue encontrado culpable de haber cometido el delito tipificado en el antes citado artículo 152 del Código Penal. Dicho delito se habría configurado por las publicaciones de los artículos del reo en el periódico "La Nación" los días 19, 20,

---

primer término (art. 122) a la resarcibilidad, entre otros, del daño moral; y, en segundo lugar, a la forma de determinar el monto de la indemnización para reparar el daño moral (la fijará el juez "prudencialmente") *"en* ***las infracciones contra la honra, la dignidad, la honestidad*** *o en otros casos de daño a intereses de orden moral." Véase*, Código Penal ("A", págs. 217 y 218. Estas normas en nada desnaturalizan la responsabilidad civil a la que se condenó a Mauricio Herrera Ulloa y al Periódico La Nación, representado por Fernán Vargas Rohrmoser, como una responsabilidad civil ***derivada de un hecho punible y no de un hecho ilícito civil autónomo del delito***.

21 de mayo y 13 de diciembre de 1995[76]. El delito así cometido habría causado daños morales al querellante evaluados en sesenta millones de colones y, adicionalmente, habría impuesto una carga patrimonial de costas personales y procesales al señor Przedborski por un total de tres millones ochocientos once mil colones, suma que también debían indemnizar solidariamente Mauricio Herrera Ulloa y el Periódico "La Nación" S.A., representado por Fernán Vargas Rohrmoser.

104. El Estado de Costa Rica argumenta que la información reproducida en el diario "La Nación" de Costa Rica sobre el señor Przedborski fue emitida con dolo, dado que ni el periodista ni el diario tomaron las precauciones necesarias para corroborar la veracidad de la información publicada, lo que supondría un acto negligente. Asimismo, aduce el Estado que el Tribunal sentenciador resolvió que la *exceptio veritatis*, contemplado en el artículo 149 del Código Penal costarricense, no era aplicable al caso puesto que el imputado no había demostrado la veracidad de la información difundida por él.

105. Si se analiza el caso en su conjunto, en el inicio del proceso contra Mauricio Herrera Ulloa y el diario "La Nación", se produjo una decisión del señor Félix Przedborski, al pretenderse agraviado en su honor por los reportajes de Mauricio Herrera Ulloa en el periódico "La Nación", que marca el proceso como un todo. El sedicente agraviado tenía la opción entre demandar el resarcimiento por daños y perjuicios en la jurisdicción civil; o de acudir a la instancia penal, para acusar al periodista de haber cometido en su perjuicio uno o más de los *"delitos contra el honor"*, tipificados en el Título II del Libro Segundo del Código Penal costarricense. En el primer caso, su pretensión procesal principal habría sido la de obtener un resarcimiento por los daños y perjuicios morales supuestamente infligidos a su reputación por las publicaciones firmadas por el periodista. En el segundo caso, su pretensión principal habría sido, como en efecto lo fue, que éste fuera condenado como un criminal y, ***de resultas de su crimen***, como civilmente responsable, *in solidum* con "La Nación", por los daños morales *causados por el delito*. Al optar por esta segunda vía, el señor Przedborski ató por voluntad propia y de manera indisoluble la suerte de la reparación civil a la condenatoria de Mauricio Herrera Ulloa como autor de un delito.

106. La opción ejercida por el señor Félix Przedborski al acudir a la jurisdicción penal no fue superflua. Por una parte, a través de esa vía podía ensañarse de una manera más violenta contra el periodista, estigmatizándolo como ***"criminal"*** e imponiendo limitaciones de orden jurídico y moral para su

---

[76] *Véase* Anexo 6 de la demanda de la CIDH: "Diplomático Nacional Cuestionado en Bélgica" del 19 de mayo de 1995; "Autoridades de Bélgica Exonerarían a Pzerdborski" de 20 de mayo de 1995; "Nexo Tico en Escándalo Belga", del 21 de mayo de 1995 y "Polémico Diplomático en la Mira" del 13 de diciembre de 1995.

desempeño profesional a lo largo de la vida. Además, la vía penal ofrecía al querellante todas las ventajas de la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del acusado por delitos contra el honor que se deducen de la llamada *exceptio veritatis*.

107. En efecto, la prueba del hecho ilícito civil exige la prueba del dolo (intención) o de la culpa (negligencia, imprudencia o impericia) del presunto autor del hecho ilícito[77]. En el caso de la culpa, habría correspondido al demandante comprobar que la conducta del demandado se apartó, dentro de las circunstancias del caso, del patrón ideal de comportamiento de la persona medianamente diligente y prudente (*bonus paterfamilias*). Ahora bien, el estándar de conducta de un periodista medianamente diligente y prudente no puede definirse, para los Estados partes en la Convención, haciendo abstracción del contenido del artículo 13 de ésta ni de la interpretación que esa Honorable Corte y la Comisión han dado a dicha disposición, lo que incluye el contenido de la libertad de expresión, la función de los periodistas dentro de una sociedad democrática, el derecho de la sociedad de estar bien informada (dimensión social de la libertad de expresión), el particular escrutinio al que pueden estar sometidos ante la opinión pública los funcionarios públicos, etc. Paradójicamente, pues, la obtención de una condena civil autónoma habría supuesto una dificultad probatoria mucho mayor para el demandante que la condena del periodista como un criminal en la jurisdicción penal, obteniendo así, por vía de consecuencia y como accesorio prácticamente automático de la decisión sobre lo principal (la imputación del delito), una indemnización por daños, a título de *"consecuencia civil del hecho punible"*.

108. Esta conclusión coincide, en la práctica, con los de la Comisión, cuando ésta expresa su posición según la cual las acciones judiciales por difamación, calumnias e injurias, interpuestas por funcionarios públicos, no deben tramitarse en la vía penal sino en la civil,[78] aplicando el estándar de la "real malicia".[79] Bajo dicho estándar la carga de la prueba no se invierte en contra del periodista, sino que recobra su normal distribución, según la cual cada parte tiene el *onus* de probar lo que afirma o alega. Por lo tanto, recae sobre el supuesto afectado el deber de demostrar que el comunicador tuvo intención de infligir daño o actuó con pleno conocimiento de que se estaban

---

[77] El artículo 1045. del Código Civil costarricense sanciona el hecho ilícito civil en los siguientes términos: *Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia, causa a otro un daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios.*

[78] *Véase*, Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. *Caso Ricardo Canese*, Paraguay, también véase Principio 10 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, octubre 2000 y, Corte E.D.H., *"Colombani and others v. France New"*, Caso Nº 51279/99, Sentencia del 25 de junio de 2002;

[79] *Véase*, *"New York Times v. Sullivan"*, 376 US 255, 84 S.Ct. 710 (1964) donde se establece que la doctrina de la real malicia se refiere a que "las garantías constitucionales requieren una norma federal que prohíba a un funcionario público a ser indemnizado por razón de una manifestación inexacta y difamatoria referente a su conducta, como tal, a menos que pruebe que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo la intención de infringir daño o tuvo pleno conocimiento de que se estaban difundiendo noticias que eran falsas o que actuó con una gran despreocupación acerca de la verdad o falsedad".

difundiendo noticias falsas.[80] Por lo tanto, no debió ser el periodista Herrera Ulloa quien tuviera la carga de demostrar que actuó sin dolo o grave negligencia, o probar la veracidad de sus afirmaciones, sino que debió ser el diplomático honorario querellante quien tuviera a su cargo demostrar que las mismas eran falsas y que, además, Ulloa tenía pleno conocimiento de la falsedad y actuó con malicia al difundirlas.

109. Coincidimos con la Ilustre Comisión en que la importancia de la libertad de expresión e información en la formación de la opinión publica y el debate dentro de una sociedad democrática, implica que la aplicación de criterios fundados en la mera negligencia o un supuesto dolo objetivo para proteger el honor de funcionarios públicos o personas públicas involucradas voluntariamente en asuntos de interés público, aun limitándose a sanciones meramente civiles, provocan una restricción ilegítima de la libertad de expresión e información en contravención con la Convención Americana. La importancia de la recta distribución de la carga de la prueba que supone la doctrina de la "real malicia", que exige por parte del presunto afectado la prueba de dolo en la información difundida, consiste en evitar la autocensura, es decir evitar que el autor de la publicación se vea inhibido de difundir temas de interés público por temor a no poder probar la plena veracidad de la información en los tribunales.

110. Sin embargo, lo que debe destacarse sobre todo es que el hecho fundante de la responsabilidad civil de Mauricio Herrera Ulloa y del periódico "La Nación" representado por Fernán Vargas Rohrmoser, es ***un hecho punible cuya autoría se atribuyó al primero de los nombrados y no un hecho ilícito civil autónomo***. Para establecer la responsabilidad civil ordinaria, con base en un simple ilícito civil, el demandante no puede valerse de las perversas ventajas que le proporciona la *exceptio veritatis* en el ámbito penal. En cambio, establecida la responsabilidad penal con el auxilio de la mencionada *exceptio veritatis*, la responsabilidad civil ***derivada del delito*** surge, en los términos del artículo 103 del Código Penal, como una *"consecuencia civil del hecho punible"*. En tal virtud, las sanciones civiles son indisociables de las penales y producen, en este caso, los mismos efectos contra la libertad de expresión que la condena penal. Lo expresado en los párrafos 59 al 87 de este escrito, es igualmente aplicable a las sanciones civiles derivadas de la penal.

111. Más aún, como lo subraya la CIDH en su demanda, el Estado de Costa Rica, en la audiencia celebrada ante la Comisión en mayo de 2001, reconoció la importancia del estándar de la "real malicia" y la conveniencia de

---

[80] CIDH, Informe sobre la compatibilidad entre las leyes de desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. *supra. nota de pie de página No. 33.*

enmendar su legislación con base en el mismo, cuando expresó: *"pretender que la verdad coincida con la necesidad de verificar y probar que se trata de una verdad absoluta, podría implicar la exclusión del derecho de informar cuando no exista la posibilidad de probar la verdad de los hechos".*[81]

112. Este razonamiento nos lleva a sostener que la difusión de información relacionada con las actividades de un funcionario público sobre temas de interés público sólo podría acarrear responsabilidad civil, fundada sobre un hecho ilícito civil y no sobre la comisión de un "delito contra el honor" en caso de existir dolo manifiesto en aplicación de la mencionada doctrina de la real malicia.[82] Los trabajos publicados en el diario "La Nación", sancionados por la sentencia de 12 de noviembre de 1999, reprodujeron sintéticamente artículos publicados en la prensa belga con el objeto de informar a la opinión pública costarricense sobre actos ilícitos presuntamente cometidos por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones en el exterior.[83] Esta conducta se encuadra dentro del ámbito razonable del ejercicio del periodismo, dado que se trataba de información de potencial interés para la opinión pública costarricense, que tenía por objeto aportar al debate y servir como medio fiscalizador de un funcionario público costarricense cuestionado en el exterior por diversos medios de comunicación de la prensa escrita internacional.[84] Sancionar penalmente esas publicaciones, o atribuir responsabilidad civil derivada de ese delito al periodista o al diario donde tales publicaciones aparecieron, es una violación de las dos dimensiones de la libertad de expresión, tal como han sido definidas por esa Honorable Corte

113. El Estado costarricense no ha demostrado, en ningún modo, la existencia de dolo del periodista ni del periódico "La Nación" en la publicación de los cuatro artículos condenados en la sentencia del 12 de noviembre de 1999. Por lo tanto, la imposición de sanciones civiles, al periodista, al Periódico "La Nación" o su representante legal, por haber escrito y publicado los artículos querellados, es un acto ilegítimo del poder público, porque viola el artículo 13 de la Convención en cuanto garantiza el ejercicio de la libertad de expresión en una sociedad democrática; Tanto más aún, en cuanto tales sanciones civiles son accesorias de un delito.

114. Por lo tanto, la sanción civil resarcitoria ordenada en la sentencia del 12 de noviembre de 1999 por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José en su sentencia del 12 de noviembre de 1999, como consecuencia de la

---

[81] *Véase*, Anexo 10 de la demanda de la CIDH: Audiencia celebrada en la CIDH en mayo de 2001.

[82] *Véase* "Gertz v. Welch, Inc.", 418 U.S. 323 (1973), párr. 342.

[83] *Véase* Corte E.D.H., *Lingens v. Austria*. Sentencia de 8 de julio de 1986, Serie A N° 103; 8 EHHR 103 (1986) y Corte E.D.H., *Oberschlick v. Austria*. sentencia de 23 de mayo de 1991, Serie A., N° 204.

[84] *Véase* Corte E.D.H., *Bladet Tromso and Stensaas v. Norway*. sentencia del 20 de mayo de 1999, párrs. 66 y 68.

acción penal es igualmente violatoria el artículo 13 de la Convención Americana.

- **La condena civil *in solidum* contra el Periódico "La Nación" viola el artículo 13 de la Convención.**

115. Los argumentos precedentes son suficientes para demostrar que la condena civil solidaria contra Mauricio Herrera Ulloa y el periódico "La Nación" violan la libertad de expresión. Además, como ya se ha dicho y se expresará con mayor detenimiento *infra* (párrs. 236 al 245) en este escrito), dicha sanción civil debe desaparecer por ser el efecto de una sentencia ilegítima y violatoria de la Convención; y, además, porque a todo evento ella es accesoria de un hecho punible que fue ilegítimamente imputado a Mauricio Herrera Ulloa, de modo que, por aplicación de la regla general de derecho según la cual lo accesorio sigue la suerte de lo principal, la condena civil sigue la suerte de la penal y se desvanece con ésta por obra de la sentencia que en su oportunidad dictará esa Honorable Corte.

116. Sin embargo, en vista de la práctica de la Ilustre Comisión en lo que se refiere a las violaciones a la Convención que involucran a personas morales, como es el caso del Periódico La Nación, S.A.; y, además, de ciertas consideraciones aclaratorias que se formulan en la demanda y con las que no concordamos, consideramos necesario formular ciertas alegaciones particulares en lo que atañe a la violación de la libertad de expresión garantizada por el artículo 13 de la Convención, en virtud de las sanciones que la sentencia del 12 de noviembre de 1999 impone a este medio de comunicación como tal.

117. Asimismo, consideramos que no debe soslayarse el hecho de que el ilustrado Gobierno de Costa Rica haya alegado ante la CIDH que el presente caso resultaba inadmisible *ratione personæ*, sobre la base de que el Periódico La Nación, S.A., es una persona moral[85]. Asimismo, la demanda introducida por la Ilustre Comisión indica expresamente que

> *La Comisión deja en claro que, sin perjuicio de lo anterior,* ***no considera victima al Sr. Vargas Rohrmoser por su calidad de representante del periódico "La Nación"****, sino en cuanto a la intimación personal de la que fue sujeto. En este sentido, la Comisión sostiene que al Sr. Vargas se le ha violado su derecho a la libertad de expresión en tanto y en cuanto se lo obliga a cumplir bajo pena de cárcel o multa con una sentencia violatoria del artículo 13 de la Convención.*[86]

---

[85] *Véase*: Expediente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tomo I, págs. 237-243

[86] Demanda de la CIDH, párr. 109.

118. En tal virtud, consideramos pertinente agregar a las consideraciones ya expresadas, *gratia arguendi*, que la circunstancia de que el periódico "La Nación" sea propiedad de una persona jurídica no representa obstáculo alguno para que tenga absoluta pertinencia la recomendación contenida en el Informe de la Comisión basado en el artículo 50 de la Convención, en el sentido de *"dejar sin efecto la sentencia condenatoria contra el señor Mauricio Herrera Ulloa y el Diario «La Nación», representado por Fernán Vargas Rohrmoser."*[87]

119. En efecto, no es óbice para las anteriores conclusiones la circunstancia de que el periódico "La Nación" sea propiedad de una persona jurídica ("PERIÓDICO LA NACION, SOCIEDAD ANÓNIMA"). En primer lugar porque, de suyo, la condena civil, como sanción accesoria, sigue *in toto* la suerte de la condena penal, que es el acto jurídico *principal*. En segundo lugar, porque como ya lo ha establecido esa honorable Corte, *"en general, los derechos y las obligaciones atribuidos a las personas morales se resuelven en derechos y obligaciones de las personas físicas que las constituyen o que actúan en su nombre o representación."*[88]

120. En cambio, la jurisprudencia de la Ilustre Comisión ha sido más bien reiterativa en el sentido que, en virtud de que el artículo 1.2 de la Convención dispone que *"para los propósitos de esta Convención, 'persona' significa todo ser humano"*, el sistema de protección de los derechos humanos en este hemisferio se limita a la protección de personas naturales y no incluye personas jurídicas, de modo que toda petición o denuncia de violación de derechos de personas morales debe declararse inadmisible.[89] En tal sentido se ha afirmado:

> *...la Comisión considera que la Convención otorga su protección a las personas físicas o naturales, excluyendo de su ámbito de aplicación a las personas jurídicas o ideales, por cuanto éstas son ficciones jurídicas sin existencia real en el orden material.*[90]

121. El artículo 1.2 de la Convención, en efecto, prescribe que *"para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano."* ***Ese texto no expresa directa ni literalmente que las personas morales están siempre y necesariamente excluidas del ámbito de aplicación de la***

---

[87] Informe de la Comisión; párr. 97.1. (Anexo 1 de la demanda de la CIDH).

[88] Corte I.D.H.: *Caso Cantos vs. Argentina. Excepciones Preliminares*. Sentencia de 7 de septiembre de 2001. Serie C Nº 85; párr. 27.

[89] *Véase, Caso Banco de Lima* (Perú) Informe Nº 10/91 de 22 de febrero de 1991; *Caso Tabacalera Boquerón, S.A.* (Paraguay). Informe Nº 47/97 de 16 de octubre de 1997; *Caso MEVOPAL, S.A.* (Argentina). Informe Nº 39/99 de 11 de marzo de 1999; *Caso Bernard Merens y familia* (Argentina) Informe Nº 103/99 de 27 de septiembre de 1999; *Caso BENDECK-COHDINSA* (Honduras Informe Nº 106/99) de 27 de septiembre de 1999.

[90] *Caso MEVOPAL, S.A.*, párr. 17.

Convención. En nuestro concepto, la lectura del artículo 1.2 no comporta necesariamente una inflexible interpretación *a contrario* según la cual, bajo ninguna circunstancia, los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos están habilitados para conocer y decidir casos en los cuales estén envueltos derechos de personas morales. En cada situación será necesario examinar el contexto dentro del cual el asunto se presenta y determinar, de acuerdo con el objeto y fin de la Convención, ***si el interés principal en juego involucra los derechos del "ser humano" reconocidos por ésta***.

122. En efecto, la interpretación del artículo 1.2 de la Convención, incluida, claro está, su interpretación *a contrario sensu*, debe hacerse *"de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin"*, conforme a la tantas veces invocada regla de Derecho consuetudinario codificada en el artículo 31.1 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. El "sentido corriente" de los términos empleados en el artículo 1.2 revela que ***la Convención está destinada a proteger los derechos inherentes al ser humano***, reconocidos como tales en el mismo tratado. De allí a concluir de ese texto que, siempre y necesariamente, la Convención es inaplicable a todo evento en que su violación afecte, incluso de manera directa, a una persona jurídica, hay un paso muy largo, que se aparta de la interpretación gramatical del artículo 1.2 y, además, ignora que, en determinadas situaciones, la violación de los derechos reconocidos por la Convención comporta la lesión de derechos de personas morales o, incluso, sólo es posible, mediante la violación de los derechos de ciertas personas morales.

123. Por ejemplo, la Convención protege derechos cuyo ejercicio conduce normalmente a la formación de personas morales o que normalmente se ejerce a través de personas morales. Un ejemplo notorio es la libertad de asociación estipulada en el artículo 16 de la Convención, cuyo objeto normal conduce a la conformación de una persona jurídica, que no persigue necesariamente fines mercantiles.[91] Si, por ejemplo, un Estado determinado decidiera ilegalizar arbitrariamente uno o varios sindicatos, no está en duda que se estaría violando la libertad de asociación de todos sus afiliados. Un remedio formal para este supuesto, dentro del concepto estrecho que niega todo espacio a las personas morales en el sistema de la Convención, sería que, en tales supuestos, actuaran los asociados, cuyo derecho individual a la asociación estaría siendo vulnerado. Sin embargo, la realidad es que, en el ejemplo de marras, se estaría violentando algo más que un derecho individual o que la suma de varios derechos individuales, porque éstos sólo son ejercitables en

[91] La misma consideración es válida respecto a la libertad religiosa y las iglesias; o respecto al derecho a la participación política y los partidos políticos, por ejemplo.

colectivo, de manera que el objeto de conculcación es el resultado del ejercicio del derecho de asociación, es decir, el sindicato (persona moral) que es el fruto del ejercicio del derecho. En ese marco, el texto del artículo 1.2 no suministra ningún argumento que impida actuar a la persona moral misma, puesto que el objeto principal de la violación ha sido el derecho de los "seres humanos" que concurrieron a conformar esa persona moral. ***En la interpretación del derecho internacional de los derechos humanos no deben prevalecer criterios formalistas que conduzcan a soluciones artificiosas*** sólo para sustentar una interpretación *a contrario* del artículo 1.2 de la Convención, que no toma en cuenta, al menos en casos como este, el "sentido corriente" de los términos de la Convención, ni su objeto y fin en los diversos contextos en los que le corresponde aplicarse.

124. La cuestión se ha planteado en la jurisprudencia internacional, en la cual se ha reconocido que la persona moral es una *"entidad que permite especialmente actuar en casos que desbordan la capacidad normal de los individuos"*[92]; y que, en el caso de las sociedades anónimas, el derecho interno permite el "levantamiento del velo" que separa a la sociedad de los accionistas, normalmente en provecho de terceros que tratan con la sociedad. Sin embargo, tal como ocurre en ámbito doméstico, *"en el orden internacional igualmente puede haber, en principio, situaciones especiales que justifiquen el levantamiento del velo en interés de los accionistas."*[93]

125. Esa Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha tenido ocasión de censurar una interpretación formalista del artículo 1.2 de la Convención, que puede conducir a resultados manifiestamente absurdos, reñidos con el objeto y fin de la Convención.[94]

126. Nos permitimos, pues, invocar a este respecto lo decidido por esa Honorable Corte, en el sentido de que, *"en general, los derechos y las obligaciones atribuidos a las personas morales se resuelven en derechos y obligaciones de las personas físicas que las constituyen* ***o que actúan en su nombre o representación.***[95]

---

[92] Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, ICJ Reports 1970, p. 3; párr. 39.

[93] *Ibíd.*, párr. 58.

[94] En su sentencia antes citada en el *Caso Cantos vs. Argentina. Excepciones preliminares*, la Corte ilustró la materia en los siguientes términos:

Según la interpretación que la Argentina sugiere y ***que la Comisión parece compartir****, si un hacendado adquiere una máquina cosechadora para trabajar su campo y el gobierno se la confisca, tendrá el amparo del artículo 21. Pero, si en lugar de un hacendado, se trata de dos agricultores de escasos recursos que forman una sociedad para comprar la misma cosechadora, y el gobierno se la confisca, ellos no podrán invocar la Convención Americana porque la cosechadora en cuestión sería propiedad de una sociedad. Ahora bien, si los agricultores del ejemplo, en vez de constituir una sociedad, compraran la cosechadora en copropiedad, la Convención podría ampararlos porque según un principio que se remonta al derecho romano, la copropiedad no constituye nunca una persona ideal.* (Párr. 25; énfasis añadido).

[95] *Ibíd.*, párr. 27.

127. De allí que, en esa misma sentencia, la Corte haya concluido que no hay nada en el Pacto de San José que restrinja la posibilidad que bajo determinados supuestos el individuo pueda acudir al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos para hacer valer sus derechos fundamentales, aun cuando los mismos estén cubiertos por una figura o ficción jurídica creada por el mismo sistema del Derecho. Obviamente es preciso hacer una distinción en cada caso para establecer cuáles de esas situaciones pueden ser objeto de consideración por la Corte.[96]

128. En ese contexto, capítulo especial merece el ejercicio de la libertad de expresión[97]. Como lo ha expresado la Corte, *"son los medios de comunicación social los que sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresión, de tal modo que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad."*[98] La experiencia muestra cómo, en el mundo actual, los medios de comunicación se organizan normalmente en personas morales[99]. Así lo ha entendido la propia Convención en su artículo 14. 3, en cuyos términos:

> *Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o* ***empresa periodística****, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial.* (Énfasis añadido).

129. Sería difícil declarar inadmisible, por el sólo hecho de provenir de una persona moral, una petición de un medio de comunicación social que denuncie ante los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos la violación, en su perjuicio, de lo estipulado en el artículo 13.3 de la Convención, que prohíbe la restricción del *derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.*

---

[96] *Ibíd.*, párr. 29.

[97] De hecho, quizás el único caso en que la Comisión ha concluido que se había producido una violación de los derechos humanos en perjuicio de una persona moral, se refería, precisamente, a un caso de violación de la libertad de expresión contra un medio de comunicación impreso. *Cfr. Caso "Diario ABC Color"* [Caso 9250] (Paraguay) Resolución Nº 6/84 de 17 de mayo de 1984. Se trataba, sin embargo, de un caso de aplicación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y no de la Convención Americana.

[98] Corte I.D.H.: *La colegiación obligatoria de periodistas...* cit., párr. 34.

[99] De hecho, en el caso *Ivcher Bronstein*, la violación del derecho a la libertad de expresión de la víctima fue practicada, en parte, mediante la agresión a la persona moral de la que el Sr. Ivcher Bronstein era accionista mayoritario y Director Principal.

130. Si una persona moral es despojada arbitrariamente de la concesión o licencia para transmisiones radioeléctricas o si se cierra un diario de su propiedad, es ella la víctima directa. ***Lo esencial en estos casos es que el interés principal en juego no es un mero interés mercantil o patrimonial de la persona moral, sino un derecho inherente a la persona humana***: se estaría violando la libertad de expresión de todos los que la ejercen a través del medio afectado y la libertad de información de la sociedad en su conjunto. Cuando una persona moral es afectada por una violación de la Convención, lo sustancial es determinar si están también en juego derechos de "todo ser humano", y no intereses puramente mercantiles. El objeto y fin de la Convención es la protección de los derechos humanos y, si su integridad está en causa, no debería ser obstáculo para que ella sea invocada legítimamente la mera circunstancia de que la violación o amenaza a los mismos comporte también los derechos de una persona moral.

131. A la luz de la jurisprudencia en el aludido caso *Cantos vs. Argentina. Excepciones preliminares*, la Corte ha expresado que las personas morales son creaciones intelectuales que pueden ser usadas por las personas naturales para diversos fines lícitos. Algunos de ellos son puramente mercantiles, o se refieren a relaciones jurídicas comerciales entre personas jurídicas. Pero en otros casos el objeto social de la persona moral puede estar indisolublemente vinculado con el ejercicio de los derechos humanos de los asociados, pudiendo incluso ser el único vehículo para tal ejercicio. En estos supuestos no es exagerado afirmar, la persona moral encarna los derechos humanos de tales asociados.

132. Además, cuando se produce una violación de los derechos humanos, en nuestro concepto no es relevante si dicha violación fue el producto de una acción u omisión directa sobre un ser humano o si la misma tuvo lugar a través de una ficción jurídica, como lo es una persona moral. Lo esencial es determinar la condición de la víctima y del bien protegido.

133. En el caso del periódico "La Nación", el tribunal de la causa en su sentencia condenatoria, aplicó expresamente un artículo del Código Penal costarricense, en virtud del cual la razón y único fundamento por el cual el diario es condenado *in solidum* con Mauricio Herrera Ulloa a pagar una indemnización al señor Félix Przedborski y las costas procesales, viene dada porque fue en "La Nación" donde se publicaron los artículos condenados en dicha sentencia. En efecto, en los términos de dicho fallo, la demanda resarcitoria en lo civil contra el periodista y contra "La Nación" se acoge por ser este diario el *"**medio informativo en que se publicaron los artículos difamantes** y Mauricio Herrera Ulloa como redactor de los mencionados artículos y **empleado de dicho diario**, ello de conformidad con el artículo*

106 inciso 3 del Código Penal."[100] (Énfasis añadidos). A su vez, el artículo aludido establece:

> ***Artículo 106:*** *Es solidaria la acción de los partícipes de un hecho punible, en cuanto a la reparación civil.*
>
> *Están igualmente obligados solidariamente con los autores del hecho punible, al pago de daños y perjuicios:*
>
> .....
> *Omissis*
> *3) Las personas* ***naturales y jurídicas*** *dueñas de un establecimiento de cualquier naturaleza,* ***en que se cometiere un hecho punible*** *por parte de sus administradores, dependientes, y* ***demás trabajadores a su servicio****.*
>
> .....
> *Omissis*
> (Énfasis añadidos).

134. Por lo tanto, la ***única razón*** por la cual el Periódico La Nación S.A. fue condenado solidariamente con Mauricio Herrera Ulloa a pagar una indemnización al señor Félix Przedborski, fue porque esa empresa es la propietaria del diario a través del cual el señalado periodista, que es un trabajador de "La Nación", ejerció su profesión, se expresó libremente ajustándose de un todo al artículo 13 de la Convención y, de esta forma, satisfizo también el derecho de la sociedad en su conjunto a estar informada libremente. En definitiva, la sanción pecuniaria contra "La Nación" es una consecuencia directa e inmediata de la violación del derecho a la libertad de expresión de Mauricio Herrera Ulloa, conculcado por una sentencia penal ilegítima que criminalizó indebidamente su derecho a buscar y difundir información e ideas sin consideración de fronteras, por cualquier medio de su elección. El medio elegido fue en este caso el periódico "La Nación", el cual sirvió en este caso para el fin para el cual son útiles los medios de comunicación social: la libre búsqueda y difusión de información e ideas. Por ello la ilegitimidad de la pena impuesta a Mauricio Herrera Ulloa y de las sanciones civiles accesorias es la misma ilegitimidad que tacha la condena civil contra "La Nación", condena que constituye también una violación de la libertad de expresión.

135. Por consiguiente y en síntesis, reiteramos que el carácter accesorio de las condenas civiles pecuniarias implica que al dejarse sin efecto la condena penal contra Mauricio Herrera Ulloa por ser violatoria del artículo 13 de la Convención, se desvanecen y quedan sin efecto *ipso jure* todas las consecuencias del hecho ilegítimamente calificado como punible por el

---

[100] Véase, Anexo Nº 8 de la demanda de la CIDH; pág. 348.

Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, particularmente la condena civil solidaria pronunciada contra Mauricio Herrera Ulloa y el periódico "La Nación", sin que la circunstancia de que este medio de comunicación sea propiedad de una persona jurídica pueda influir sobre la ilegitimidad de origen que irremediablemente afecta a dicha condena civil, producto como es de un acto contrario al orden público que emana de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

136. Por lo demás, las únicas sanciones impuestas al diario "La Nación" no fueron de naturaleza pecuniaria. Hubo además otras, relacionadas con la difusión de noticias emanadas de ese medio a través de "Internet", que fueron igualmente objeto de la sentencia del 12 de noviembre de 1999; y que constituyen otras tantas violaciones a la Convención en las que incurrió el referido fallo, que esta vez tocan directamente a la censura.

E. El Estado costarricense violó el artículo 13 de la Convención Americana al ordenar retirar el enlace existente en "La Nación Digital" que se encuentra en Internet, entre el apellido Przedborski y los artículos escritos por Mauricio Herrera Ulloa y al establecer un vínculo entre dichos artículos y la parte dispositiva de la sentencia condenatoria

137. La orden judicial de retirar el enlace existente en "La Nación Digital" que se encuentra en Internet, entre el apellido Przedborski y los artículos escritos por Mauricio Herrera, constituye una intromisión y una censura previa de la información por parte del Estado costarricense, que viola el artículo 13 de la Convención Americana. Por otra parte, dicha orden judicial, en lo que se refiere al establecimiento de un enlace entre los artículos publicados y la parte dispositiva de la sentencia condenatoria en contra de Mauricio Herrera, constituye una restricción a la libertad de expresión por cuanto impone el contenido de la información, lo que también cae fuera del marco de las limitaciones permitidas por el artículo 13 de la Convención.

138. La decisión del Tribunal tiene como efecto directo la censura previa puesto que coarta a Mauricio Herrera difundir "informaciones e ideas de toda índole", incluidos sus artículos sobre el diplomático honorario, y por cualquier medio de su elección. El derecho a la libertad de expresión en los términos consagrados por el artículo 13 de la Convención Americana protege de igual manera tanto a los medios de comunicación tradicionales como a la expresión difundida a través de Internet.

139. El artículo 13.2 de la Convención explícitamente prohíbe la censura previa, incluso si se trata supuestamente de prevenir por ese medio un abuso eventual de la libertad de expresión.[101] La censura previa supone el control y veto de la información antes de que ésta sea difundida, impidiendo tanto al individuo, cuya expresión ha sido censurada, como a la totalidad de la sociedad, ejercer su derecho a la libertad de expresión e información. La Honorable Corte ha sostenido en este sentido que el deber de no interferir con el goce del derecho de acceso a la información se extiende a la libre circulación de información de ideas y la difusión de información que puedan o no contar con la aprobación de las autoridades estatales.[102]

140. La orden judicial en tanto un acto de censura previa, afecta adversamente al periodista Mauricio Herrera Ulloa en su derecho y en su deber de difundir información sobre temas de legítimo interés público que se encontrara disponible en la prensa extranjera.[103] La Corte ha señalado que la censura previa produce *"una suspensión radical de la libertad de expresión al impedirse la libre circulación de información, ideas, opiniones, o noticias"*.[104] Esto constituye una violación tanto del derecho de cada persona a expresarse como del derecho de todos a estar bien informados, de modo que se afecta una de las condiciones básicas de una sociedad democrática.

141. El Estado de Costa Rica argumenta que la orden de retirar el enlace existente en "La Nación Digital" que se encuentra en Internet, entre el apellido Przedborski y los artículos querellados y el establecimiento de un vínculo entre dichos artículos y la parte dispositiva de la sentencia condenatoria se hizo con fines de proteger y restablecer la reputación del señor Przedborski. La prohibición de la censura previa es absoluta y no encuentra justificación alguna bajo las excepciones emanadas del artículo 13 de la Convención Americana, muchísimo menos por el hecho de que dicha censura pretenda proteger el honor de un funcionario público.

142. Por otra parte, la imposición de publicar información a través de la orden que obliga el establecimiento de un vínculo entre los artículos escritos por Mauricio Herrera y la parte dispositiva de la sentencia que lo condena es un medio de restricción a la libertad de expresión por afectar el derecho de Mauricio Herrera Ulloa de decidir el contenido y tipo de información a publicar.

---

[101] En el *Caso la "Última Tentación de Cristo"*, la Corte afirmó: *"Es importante mencionar que el artículo 13.4 de la Convención establece una excepción a la censura previa, ya que la permite en el caso de los espectáculos públicos pero únicamente con el fin de regular el acceso a ellos, para la protección moral de la infancia y la adolescencia. En todos los demás casos, cualquier medida preventiva implica el menoscabo a la libertad de pensamiento y de expresión."* Cit., párr. 70.

[102] *Caso "La Última Tentación de Cristo"...*, cit., párr. 61 (c).

[103] *Véase, "Observer and Guardian v. UK"*, sentencia del 26 de noviembre de 1991, Serie A, Nº 216: EHIIR 152 (1992), p. 196. Opinión separada del Juez De Meyer). Traducción libre.

[104] *La colegiación obligatoria...* cit., párr. 54.

143. La Honorable Corte ha expresado que:

> *Es fundamental que los periodistas [...] gocen de la protección y de la independencia necesaria para realizar sus funciones a cabalidad, ya que son ellos los que mantienen informada a la sociedad, requisito indispensable para que ésta goce de una plena libertad.*[105]

144. En el presente caso, los hechos probados concurren a demostrar la determinación del Estado de Costa Rica de restringir en forma directa la libertad de expresión de Mauricio Herrera Ulloa a través de una acción que implica censura previa; y de la imposición de difundir información, todo ello en clara contradicción con el artículo 13 de la Convención.[106] Tampoco existe justificación alguna, bajo el mismo instrumento internacional, para invocar una suerte de protección preventiva del señor Przedborski como fundamento de una medida de restricción a la libertad de expresión, que se traduce en censura previa.[107]

F. Sobre la condición de víctima del señor Fernán Vargas Rohrmoser por estar directamente afectado por la ejecución forzosa de la sentencia judicial

145. El Estado costarricense incurrió en violación de la Convención al intimar al señor Fernán Vargas Rohrmoser, mediante Resolución Judicial, expedida en fecha del 3 de abril de 2001 por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, a dar cumplimiento a la sentencia condenatoria, bajo expresa advertencia sobre la posibilidad de incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad, establecido en el artículo 307 del Código Penal Costarricense,[108] lo que implicaría la imposición de una pena de privación de libertad en caso de incumplimiento.

---

[105] Corte I.D.H., *Caso Ivcher Bronstein*. Sentencia de 6 de febrero de 2001, párr. 150. En el caso particular Ivcher Bronstein, la Corte señaló que *"la resolución que dejó sin efecto legal el título de nacionalidad del señor Ivcher constituyó un medio indirecto para restringir su libertad de expresión, así como la de los periodistas que laboran e investigan para el programa Contrapunto del Canal 2 de la televisión peruana."* (Párr. 162). Asimismo, la Corte interpretó que *"al separar al señor Ivcher del control del Canal 2, y excluir a los periodistas del programa Contrapunto, el Estado no sólo restringió el derecho de éstos a circular noticias, ideas y opiniones, sino que afectó también el derecho de todos los peruanos a recibir información, limitando así su libertad para ejercer opiniones políticas y desarrollarse plenamente en una sociedad democrática."* (Párr.163).

[106] *Véase*. Principio 5 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH en Documentos Básicos en Materia de Derechos Humanos en el Sistema Interamericano, OEA/Ser.L/V/I.4 rev.8 22 de mayo de 2001, *supra. pie de página 35*, que señala:

La censura previa. interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como asi también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.

[107] *Véase*. CIDH, Informe Nº 11/96, Caso 11.230, Chile, de 3 de mayo de 1996, párr. 58.

[108] El artículo 307 del Código Penal costarricense establece: *"Se impondrá* ***prisión*** *de quince días a un año al que desobedeciere la orden impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, salvo que se trate de la propia detención"*. (Énfasis añadido).

146. La Orden de Ejecución y Prevención emanada del Tribunal Penal de Juicios del Primer Circuito de San José el 21 de febrero del 2001, por la que se le ordenaba cumplir y acreditar el cumplimiento de la condena impuesta al mencionado periódico en la sentencia del 12 de noviembre de 1999 tenía como destinatario a Fernán Vargas Rohrmoser. Asimismo, mediante la posterior resolución del día 3 de abril de 2001, emitida por el mismo Tribunal, nuevamente se le requirió el cumplimiento de dicha sentencia, con la advertencia de que en caso de incumplimiento sería pasible de la sanción correspondiente al delito de desobediencia. En tal virtud, además de en su condición de representante de "La Nación" cuando los artículos querellados fueron publicados, el señor Fernán Vargas Rohrmoser es víctima a título personal de la sentencia del 12 de noviembre de 1999 y se encuentra directamente afectado en su interés jurídico, y subraya la calidad de víctima en el presente caso.

147. El Estado alegó[109] que tal sanción de prisión no llegaría a hacerse efectiva aun en caso de que éste incumpliera la Orden de Ejecución de la sentencia, ya que el ordenamiento penal costarricense tiene la figura de ejecución condicional de la pena, la cual establece dos requisitos: que sea un delito primario y que la pena impuesta sea menor de tres años. En consecuencia, el Estado manifiesta que en el caso en que el señor Fernán Vargas Rohrmoser no tuviera antecedentes penales, la pena de prisión no hubiera llegado nunca a ejecutarse porque la pena aplicable en los delitos de desobediencia a la autoridad es menor de tres años.

148. Esta circunstancia es irrelevante para la determinación de la condición de víctima en el presente caso. En primer lugar, porque la circunstancia de que la aplicación de la pena pudiera no concretarse en la práctica es una cuestión de hecho que no modifica la situación jurídica de quien está bajo la amenaza explícita de una pena privativa de libertad establecida por la legislación penal para el delito de desobediencia a la autoridad.[110] En segundo lugar, es necesario realizar una diferenciación respecto de la naturaleza jurídica de la figura de la aplicación condicional de la pena a efectos de establecer si se trata de un beneficio o de un derecho en el ámbito de la jurisdicción penal. En tal sentido, la legislación costarricense prevé una pena privativa de libertad para el delito de desobediencia a la autoridad y corresponde al juez decidir la aplicación o no de la referida sanción punitiva. Es decir, la falta de aplicación de la pena en determinados supuestos en los que se presentan los requisitos legales, como lo sería el presente caso, según lo alegado por el Estado, constituye una potestad del magistrado, por una parte, y por ello un beneficio

---

[109] *Véase, Expediente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos*, tomo II, folio 295.

[110] *Véase* Corte E.D.H., *Caso "Dudgeon c/ United Kingdom"*, Sentencia de octubre de 1981, párr.41.

para el imputado la aplicación condicional de la pena, pero no un derecho que pueda ser exigido por aquel a efectos de su aplicación.

149. Finalmente, la intimación efectuada, mediante la referida Resolución de fecha 3 de abril de 2001, coloca al mismo en una alternativa insoslayable que necesariamente determina su condición de victima. En tal sentido, los intimados o bien cumplen con una sentencia contraria y violatoria de la Convención Americana; o se niegan a cumplirla y por ende se hacen sujetos de la aplicación de una eventual sanción penal. En cualquiera de ambos supuestos se presentan los requerimientos convencionales para determinar el carácter de victima ante el Sistema Interamericano.

2. Las violaciones a las Garantías Judiciales (CADH, art. 8)

150. A continuación exponemos ante esa Honorable Corte los fundamentos de nuestra denuncia de las violaciones a las garantías judiciales en el proceso y condena de Mauricio Herrera Ulloa y del periódico "La Nación". Esas denuncias no fueron expresadas directamente en la demanda introducida por la Ilustre Comisión, pero se deducen directamente de los hechos narrados por ésta en dicha demanda y que n han sido objeto de controversia en el trámite del presente caso ante la misma CIDH. Comenzaremos, entonces, por expresar nuestros argumentos sobre la admisibilidad de esta denuncia en el presente escrito, y abordaremos luego los puntos concretos en que fueron violadas las garantías judiciales previstas en el artículo 8 del Pacto de San José.

A. Admisibilidad de la denuncia de violaciones al artículo 8 de la Convención

151. En el *"ALCANCE"* de nuestra petición, recibido en la Comisión el día 30 de marzo de 2001[111], presentamos la denuncia de otras violaciones a la Convención en perjuicio de Mauricio Herrera Ulloa y Fernán Vargas Rohrmoser, particularmente en lo que toca al derecho al debido proceso conforme al artículo 8 de la misma. La Comisión no se pronunció sobre estas denuncias en su Informe N° 84/02; y tampoco incluyó expresamente esas pretensiones en la demanda.

152. Sin embargo, dichas denuncias y pretensiones se deducen **de los hechos mismos** sometidos a la decisión de esa Honorable Corte en la demanda introducida por la Comisión. Como se verá en los planteamientos que se harán a continuación, ***no intentamos presentar nuevos hechos a la atención de la Corte***, sino a solicitar respetuosamente ante ella que valore jurídicamente y a la luz de las disposiciones de la Convención, hechos que

[111] Ver "Expediente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", Tomo I, folios 114-169.

constan, están probados y no han sido controvertidos en el expediente del caso ante la Comisión; y que, además, han sido referidos y narrados en la demanda. Ello no obstante, la Ilustre Comisión no ha calificado jurídicamente tales hechos, a pesar de que a nuestro parecer, como víctimas y peticionarios, configuran nuevas violaciones a la Convención, que oportunamente denunciamos ante la misma CIDH. En nuestro concepto, esa Honorable Corte, adecuándose a los criterios que han orientado el ejercicio de su competencia, dispone de elementos de hecho suficientes en la demanda de la CIDH y sus anexos, para atender este reclamo de las víctimas, como última y definitiva instancia que es dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

153. En tal sentido, solicitamos a esa Honorable Corte que examine los planteamientos que a continuación formamos y que, en aplicación de la regla *iura novit curia*, declare que el Estado ha violado el derecho al debido proceso por las razones y argumentos que a continuación se delinearán.

154. Antes es conveniente recordar que en la jurisprudencia de la Corte figuran numerosos precedentes en los cuales ella ha hecho valer la aludida regla *iura novit curia* para aplicar determinados artículos de la Convención que no habían sido invocados expresamente por las partes. La Corte ha reconocido que este es un principio *"del cual se ha valido reiteradamente la jurisprudencia internacional [entendiéndolo] en el sentido de que el juzgador posee la facultad e inclusive el deber de aplicar las disposiciones jurídicas pertinentes en una causa, aun cuando las partes no las invoquen expresamente"*[112].

155. Del expediente y del escrito de la demanda introducida por la Comisión, en efecto, constan hechos que no han sido analizados por ésta a la luz de lo dispuesto en la Convención, a pesar de que, en uno de los casos, se trata de una materia sensible, que ha sido sometida a la misma CIDH en varias denuncias anteriormente y que estuvo planteada en la Opinión Consultiva OC-12/91 de 6 de diciembre de 1991, solicitada por el Gobierno de Costa Rica y que la Corte rechazó responder, por las consideraciones que en su oportunidad expresó[113].

156. En primer término, tanto la demanda de la Comisión como el expediente del caso ante la misma muestran un primer hecho: Mauricio

---

[112] *Caso Velásquez Rodríguez.* Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C Nº 4, párr. 163; *Caso Godínez Cruz.* Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C Nº 5, párr. 172. En el mismo sentido: *Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros*, Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C Nº 94, párr. 107; *Caso Durand y Ugarte.* Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C Nº 68, párr. 76; *Caso Castillo Petruzzi y otros.* Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C Nº 52, párr. 166; *Caso Cantos. Fondo* Sentencia de 28 de noviembre de 2002, Serie C Nº 97, párr 58.

[113] Corte I.D.H., *Compatibilidad de un proyecto de ley con el artículo 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.* Opinión Consultiva OC-12/91 de 6 de diciembre de 1991. Solicitada por el Gobierno de Costa Rica.

Herrera Ulloa fue juzgado en un tribunal de primera instancia y, frente a la sentencia adversa, sólo pudo intentar un recurso, que es el recurso de casación, único medio procesal a la disposición del reo para impugnar un fallo condenatorio de primera instancia[114]. Ahora bien, dadas las limitaciones del recurso de casación, especialmente por las otras irregularidades que caracterizaron su ejercicio en este caso, no cumple con el artículo 8.2.h de la Convención, pues no satisface el *"derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior."*

157. En segundo término, hay otro hecho que destacar en el proceso seguido contra Mauricio Herrera Ulloa. El periodista querellado fue absuelto por sentencia de 29 de mayo de 1998 del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, contra el cual el querellante interpuso recurso de casación. La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, por sentencia de 7 de mayo de 1999, anuló el anterior fallo y dispuso el reenvío del expediente al Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, el cual conoció del asunto, ***pero integrado por jueces distintos*** a los que fallaron en 1998. Dicho tribunal condenó a al periodista Mauricio Herrera Ulloa y, solidariamente, al periódico "La Nación", mediante sentencia de 12 de noviembre de 1999, que es el fallo definitivamente firme, constitutivo del acto lesivo de los derechos humanos de Mauricio Herrera Ulloa. Éste ejerció el único recurso a su disposición, es decir, el de casación, que fue desestimada por ***la misma Sala Tercera*** de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de 24 de enero de 2001, firmada por ***los mismos Magistrados que anularon la sentencia absolutoria de 29 de mayo de 1998***. El recurso de casación, en este caso, no solamente era un recurso insuficiente para llenar los requerimientos del artículo 8.2.h de la Convención, sino que era además ***ilusorio***, pues había de ser decidido por Magistrados que ya habían emitido opinión sobre el mismo caso, con lo cual también se lesionó el derecho del periodista Mauricio Herrera Ulloa a ser oído por *"un juez o tribunal competente, independiente e* **imparcial***"*, tal como lo ordena el artículo 8.1 de la Convención.

158. Por último, como ya se ha aludido al tocar antes en este mismo escrito el tema de la *exceptio veritatis* (*supra*, párrafos 43 al 58), dicho instituto jurídico penal constituyó, en el presente caso, una violación de la presunción de inocencia de ka que debió gozar Mauricio Herrera Ulloa conforme al artículo 8.2 de la Convención.

---

[114] Véase párrafo Nº 40 de la demanda de la CIDH.

B. El derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior

159. En el presente caso, la sentencia condenatoria contra Mauricio Herrera Ulloa y el diario "La Nación", dictada en primera instancia por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, Grupo tres, el 12 de noviembre de 1999, únicamente pudo ser impugnada mediante el recurso extraordinario de casación ante la Sala Tercera (Casación Penal) de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. El recurso de casación, único medio actual para recurrir de un fallo condenatorio de primera instancia en Costa Rica, no es un recurso pleno, que no autoriza la revisión completa del caso en los hechos ni en el derecho, sino que se resuelve en diversos y complicados formalismos. Por ello además de las infracciones denunciadas, la sentencia condenatoria resulta violatoria del derecho a recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior, que se halla reconocido en el artículo 8.2.h del Pacto de San José.

160. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el Código Procesal Penal de Costa Rica (Ley N° 7594 de 28-3-96 actualizada. Anexo "B"), tal como ha sido subrayado en la demanda de la CIDH (párrafo N° 40), el único recurso disponible contra las sentencias de primera instancia en lo penal es el recurso de casación. En este sentido, el artículo 443 *eiusdem* dispone:

> El recurso de casación procederá cuando la resolución inobservó o aplicó erróneamente un precepto legal.
>
> Cuando el precepto legal que se invoque como inobservado o erróneamente aplicado constituya un defecto del procedimiento, el recurso solo será admisible si el interesado ha reclamado oportunamente su saneamiento o ha hecho protesta de recurrir en casación, salvo en los casos de defectos absolutos y los producidos después de clausurado el debate.

161. A su vez, el artículo 369 del mismo Código enumera taxativamente los vicios de la sentencia que justifican la casación, en los siguientes términos:

> *a) Que el imputado no esté suficientemente individualizado.*
> *b) Que le falte la determinación circunstanciada del hecho que el tribunal estimó acreditado.*
> *c) Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por lectura con violación de las normas establecidas en este Código.*
> *d) Que falte, sea insuficiente o contradictoria la fundamentación de la mayoría del tribunal o no se hubieran observado en ella las reglas de la sana crítica, con respecto a medios o elementos probatorios de valor decisivo.*
> *e) Que falte en sus elementos esenciales la parte dispositiva.*

f) Que falte la fecha del acto y no sea posible fijarla o falte la firma e alguno de los jueces y no se pueda determinar si ha participado en la deliberación, salvo los casos de excepción previstos legalmente.
g) La inobservancia de las reglas previstas para la deliberación y redacción de la sentencia.
h) La inobservancia de las reglas relativas a la correlación entre la sentencia y la acusación
i) La inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva.

162. El recurso de casación es, como lo evidencia la lectura de las disposiciones precedentes, un recurso ***extraordinario***, que no autoriza a una revisión plena del fallo de primera instancia, que se limita las solemnidades de los actos procesales, a la lógica interna del fallo recurrido o a la aplicación de la ley sustantiva. No permite la reapertura del caso a pruebas, ni una nueva valoración de las ya producidas, ni ningún otro medio de defensa que no esté comprendido en la taxativa enumeración del artículo 369 del Código Procesal Penal.

163. Esto es tan cierto, que la Sala Cuarta (constitucional) de la Corte Suprema de Costa Rica, en sentencia vinculante Nº 719 del 26 de junio de 1990, consideró que este recurso extraordinario de casación sólo satisface los requisitos del Pacto de San José, siempre y cuando **no se regule, interprete o aplique con rigor formalista**, lo que no ha sido acatado en el presente caso por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en el caso de Mauricio Herrera Ulloa y "La Nación". Bien puede comprobarse con la sola lectura del fallo que rechazó los recursos de casación.

164. Cabe recordar que, como ya ha tenido la ocasión de conocerlo esa honorable Corte, que para el momento en que se dictó la aludida sentencia de la Sala Cuarta, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había recibido nueve casos de denuncia de violación del derecho a la segunda instancia (referidas a penas menores de dos años); y que, en 1986, la Comisión había dictado su resolución Nº 26/86, mediante la cual resolvió que Costa Rica había violado el artículo 8.2.h de la Convención y que, de no cumplirse con sus recomendaciones, remitiría el asunto a la Corte. Después de sucesivas prórrogas solicitadas por el Estado, se produjo, casi cinco años más tarde, la referida sentencia de la Sala Cuarta, la cual, por una parte, permitía la interposición del recurso de casación para aquellos delitos o faltas que no lo admitían, por considerar que la Convención era aplicable directamente por los jueces nacionales (*self-executing*), de modo que podía oírse el recurso de casación aun si la ley adjetiva no lo autorizaba.[115]

---

[115] *Cfr.* Corte I.D.H.: *Compatibilidad de un proyecto de ley con el artículo 8.2.h. de la Convención*... cit., párrs. 24 y 25.

165. Por otra parte, el mismo fallo de la Sala Cuarta ordenó que el recurso de casación no se interpretara o aplicara con rigor formalista, como requisito para cumplir con el artículo 8.2.h del Pacto de San José. Tal cosa no ocurrió en las sentencias de casación contra Mauricio Herrera Ulloa. La rigurosa estrechez formalista del recurso de casación en la sensible vía penal en el presente caso, la notarán los Honorables Jueces con la lectura de la sentencia Nº 2001-00084 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de fecha 24 de enero de 2001[116], pues con evasivas formalistas soslaya la revisión plena de la sentencia de primera instancia, como debería ocurrir con una amplia y plena apelación.

166. Entre otros muchos párrafos similares, merece destacar el siguiente, que es suficientemente demostrativo de la limitación de la que adolece el recurso de casación, como medio de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior, el cual no permite *inter alia* revisar los hechos ***establecidos como ciertos en la sentencia*** de primera instancia. Expresa la Sala Tercera en su sentencia confirmatoria de la condena contra Mauricio Herrera Ulloa:

> *El reclamo no es atendible: La propuesta de aplicar una ley sustantiva diversa, se asienta exclusivamente en la apreciación de los recurrentes, mediante la cual* ***se trata de desconocer los sucesos establecidos como ciertos en sentencia****. Con tal labor,* ***inobservan el principio de intangibilidad de los hechos probados y pretenden de manera impropia, que la Sala valore la adecuación típica realizada a partir de lo que sería un recurso de casación por violación indirecta de ley sustantiva,*** *la cual no tiene cabida en el sistema de impugnación vigente, pues ello permitiría suplantar tanto la valoración probatoria, como las consecuencias de orden sustantivo establecidas.*[117](Énfasis añadidos).

167. Peor aún, el Estado de Costa Rica adoptó una iniciativa para reformar de su ley adjetiva penal, entre otras cosas para adaptarla a los requerimientos de la Convención Americana en esta materia. Dentro de este proceso, sometió a esa Honorable Corte una opinión consultiva sobre la compatibilidad entre aquel proyecto de reforma y la Convención. Como es sabido, teniendo presente que existían ante la Comisión varios casos de denuncia de violación del artículo 8.2.h de la Convención, que podían ser sometidos a la Corte, ésta concluyó que *"una respuesta a las preguntas de Costa Rica, que podría traer como resultado una solución de manera encubierta, por la vía de la opinión consultiva, de asuntos litigiosos aún no sometidos a consideración de la Corte, sin que las víctimas tengan*

---

[116] Anexo 12 de la demanda de la CIDH, segunda parte.
[117] *Ibid*.., pág. 10.

oportunidad en el proceso, distorsionaría el sistema de la Convención."[118] Por lo tanto, esa honorable Corte hizo *"uso de su facultad de no responder una consulta."*[119]

168. En todo caso, aquella reforma jamás se aprobó y la ley procesal penal de Costa Rica continúa apartándose de las prescripciones de la Convención Americana.

169. Por otra parte, pese a que la jurisprudencia de la Sala Constitucional ya aludida ordenó evitar formalismos arcaicos en la resolución de recursos de casación, esta doctrina no fue acatada en la sentencia de comentada que rechazó los recursos de casación en el caso de Mauricio Herrero, no obstante que los fallos de la Sala Cuarta son vinculantes en Costa Rica conforme lo ordena, con claridad meridiana, el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (Anexo "C"), según el cual *"la jurisprudencia y los precedentes de la Jurisdicción constitucional son vinculantes erga omnes, salvo para sí misma."*

170. La Sala Tercera, en su aludida sentencia del 24 de enero de 2001, desatendió dicha obligante doctrina y soslayó los efectos de una revisión plena y no formalista de la sentencia condenatoria de Mauricio Herrera Ulloa, razonando como se expresa en el siguiente considerando del fallo:

> *Tal como expuso el Tribunal, (cfr. Folios 1.061 y 1.62), la excepción de la verdad se rechazaba, porque no se demostró la verdad de los hechos atribuidos al querellante. Esto es correcto ya que la exceptio veritatis se refería a las imputaciones concretas y no a la existencia de otras publicaciones que aludieran al tema. Los demás aspectos alegados por el defensor y concernientes a la valoración de la prueba deben rechazarse, pues en ellos no se comprueba un agravio concreto. En otros términos: el gestionante no explica la incidencia de otros de los defectos que denuncia, en la estructura de la sentencia condenatoria ... Al respecto, vale la pena recordar, que esta Sala ha establecido con anterioridad, que: "... en efecto, bajo estas consideraciones y sobre todo para constatar –prima facie- la existencia de un perjuicio concreto, el gestionante debe individualizar y fundamentar cada uno de los motivos de su inconformidad, pues únicamente en este evento la Sala estaría en condiciones de pronunciarse sobre los puntos alegados."*[120]

---

[118] *Ibíd.*, párr. 28.

[119] *Ibíd.*, párr. 30.

[120] Anexo 12 de la demanda de la CIDH, segunda parte, pág. 22.

171. En lo que se refiere al presente caso, el recurso extraordinario de casación se ejerció en forma amplia; pero, como quedó hace poco evidenciado, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica (Casación Penal), lo resolvió *pro forma,* desechándolo de manera formalista y con criterio restrictivo, violando con ello el derecho de las víctimas a recurrir del fallo condenatorio a través de su ***revisión plena*** ante un juez o tribunal superior.

172. El derecho a recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior, se halla reconocido en el artículo 8.2.h del Pacto de San José. Es importante destacar, que el Pacto no establece excepción ni limitación alguna al derecho a recurrir del fallo ante un tribunal superior. Por lo tanto, las limitaciones irrazonables del alcance del recurso que establezca el orden jurídico interno, resultan contrarias a la Convención.

173. El Estado, en sus comentarios a la petición que dio origen al presente caso, reconoció explícitamente las limitaciones propias del recurso de casación:

> *...efectivamente el recurso de casación se ha considerado* ***una vía extraordinaria*** *por ser una* ***impugnación limitada****. Las limitaciones* ***constriñen*** *al Tribunal de Casación, que se constituye como un tribunal* ***de carácter técnico, mas no de mérito****. Para el Tribunal de Casación* ***se encuentra vedada la revisión de las conclusiones de hecho y prueba contenidas en la resolución impugnada,*** *de manera que la función de aquél* ***se circunscribe al controlador jurídico del fallo****.*[121] (Énfasis añadidos).

174. En el ordenamiento jurídico costarricense el único régimen procesal que carece de recurso de apelación es, precisamente, el correspondiente a la jurisdicción penal. De allí que la violación apuntada a una apelación plena que garantice la revisión completa de las sentencias judiciales en la sensible materia del Derecho Penal, resalta si se hace una comparación del derecho interno, notando que, en la vía civil, luego de la sentencia unipersonal de primera instancia, existe una apelación amplia ante un Tribunal Superior Civil integrado por tres jueces y, contra ese fallo de segunda instancia, hay oportunidad de entablar un recurso de casación siguiendo los lineamientos de esa institución en Francia. Este sistema está regulado en el Libro II, Título V (Impugnación de las resoluciones judiciales) del Código Procesal Civil (Anexo "D"). Por su parte, la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (Anexo "E"), también establecen dos instancias –sentencia de un juez unipersonal con apelación plena ante un tribunal superior contencioso administrativo formado por tres jueces, y de allí hay oportunidad de un recurso de casación ante la Sala

[121] *Véase,* Anexo Nº 14 de la demanda de la CIDH, págs. 22 y 23.

Primera de la Corte Suprema de Justicia, según los artículos de esa ley que transcribimos:

> **Artículo 70.-** Salvo lo dispuesto por esta ley, los recursos se regirán por la legislación procesal civil."
> **Artículo 74.-** Además del recurso por los motivos de forma y fondo señalados en el Código de Procedimientos Civiles, se dará el de casación por la forma contra la sentencia que declare la inadmisibilidad de la acción, según la cuantía o si esta fuere inestimable".

175. En el proceso penal, empero, no existen la primera y la segunda instancia conforme se ha expuesto, con las violaciones apuntadas. La sentencia condenatoria de primera instancia carece de recurso de apelación, a diferencia de lo que ocurre en la jurisdicción civil y en la contencioso administrativa. Es verdaderamente inexplicable que, tratándose de una materia que tiene toda la gravedad del derecho penal, tanto para la defensa de la sociedad, como para el debido proceso y la libertad personal del reo, el derecho costarricense permanezca divorciado de la Convención Americana, en franca violación de los artículos 8.2.h y 2 de la misma. Este hecho es particularmente significativo a la luz de la resolución ya adoptada por la Comisión sobre una denuncia respecto de estas infracciones al Pacto de San José; y de la negativa de esa Honorable Corte de responder una opinión consultiva que le fue sometida por el Estado porque en la misma podrían estar envueltos asuntos litigiosos, que eventualmente podrían ser sometidos a su jurisdicción contenciosa (*supra*, párr. 167).

176. El derecho a recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior, puede concebirse ciertamente como la expresión del derecho a contar con un *recurso judicial efectivo*, y no limitado al mero rigor de las formas o de la aplicación de la ley, frente a los actos que violen los derechos fundamentales consagrados en la Convención, en la Constitución o en la ley (art. 25.1, CADH). En ese sentido, considerando que en este caso el acto lesivo de los derechos humanos de las víctimas fue una sentencia, la inexistencia de un recurso pleno contra ese fallo no violenta solamente el artículo 8.2.h de la Convención, sino que constituye además, una infracción del mencionado artículo 25.1. Por las mismas razones, se infringe el artículo 25.2.b, mediante el cual los Estados partes se obligan *"a desarrollar las posibilidades de recurso judicial."*

177. Esa Honorable Corte ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la violación de este derecho (art. 8.2.h de la Convención), en el sentido de que el mismo no se satisface con la mera existencia de un tribunal superior que

revise el fallo de primera instancia, si la persona no ha sido juzgada por sus jueces naturales. En otras palabras, el recurso ante un juez superior que no es el juez natural, no satisface el derecho a recurrir el fallo ante un juez superior. La Corte ya ha establecido la siguiente doctrina:

> *El derecho de recurrir del fallo, consagrado por la Convención,* ***no se satisface con la mera existencia de un órgano de grado superior al que juzgó y condenó al inculpado, ante el que éste tenga o pueda tener acceso****. Para que haya una verdadera revisión de la sentencia, en el sentido requerido por la Convención, es preciso que el tribunal superior reúna las características jurisdiccionales que lo legitiman para conocer del caso concreto. Conviene subrayar que el proceso penal es uno solo a través de sus diversas etapas, tanto la correspondiente a la primera instancia como las relativas a instancias ulteriores. En consecuencia, el concepto del juez natural y el principio del debido proceso legal rigen a lo largo de esas etapas y se proyectan sobre las diversas instancias procesales.*[122] (Énfasis añadido)

178. El voto concurrente en dicho fallo de la Corte Interamericana formulado por el juez Carlos Vicente de Roux, profundiza la tesis jurisprudencial, al plantear que concuerda con la conclusión de que en dicho caso se violó el derecho de las víctimas a una segunda instancia, pero propone un análisis con base en los requisitos que ésta debe cumplir, referidos a los *"tribunales que reexaminaron la totalidad de los hechos de la causa ponderaran el valor del acervo probatorio, recaudaran las pruebas adicionales que fueran menester, produjeran, de nuevo, una calificación jurídica de los hechos en cuestión a la luz de las normas penales internas y fundamentaran argumentativamente esa calificación".*

179. Por otro lado, la Ilustre Comisión ha establecido que el derecho a recurrir del fallo consagrado en el artículo 8.2.h de la Convención, tiene por objeto controlar el fallo de primera instancia y lograr su revisión:

> *El recurso contra la sentencia definitiva tiene como objeto otorgar la posibilidad a la persona afectada por un fallo desfavorable de impugnar la sentencia y lograr un nuevo examen de la cuestión. Esta revisión en sí tiene como objeto el control del fallo como resultado racional de un juicio justo, conforme a la ley y a los preceptos de garantía, y de la aplicación correcta de la ley penal.*[123]

---

[122] Corte I.D.H.: *Caso Castillo Petruzzi y otros*... cit., párr. 161.

[123] CIDH: Informe Nº 55/97 (*Caso Abella y otros contra Argentina*), párr 259. Informe Anual 1998.

180. En la misma resolución, la CIDH desarrolló lo que, a su juicio, deben ser las características de la apelación como mecanismo de revisión de sentencias. Estas características son las siguientes: *1º Formal*: debe proceder contra toda sentencia de primera instancia, para examinar la aplicación indebida de la ley, y la falta o errónea aplicación de normas del derecho, que determinen la parte resolutiva de la sentencia. *2º Material*: debe proceder cuando se haya producido una nulidad insalvable, indefensión, o la violación a normas sobre la valoración de la prueba, siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación de las mismas. Con base en ello, la Comisión ha concluido que si el recurso contra el fallo es limitado en cuanto a las características formales o materiales, no satisface las exigencias de ser un recurso efectivo.

181. En el caso concreto sometido a la Honorable Corte, la sentencia condenatoria contra Mauricio Herrera Ulloa dictada en primera instancia por el Tribunal Penal del Primer Circuito de San José, el 12 de noviembre de 1999, únicamente pudo ser impugnada mediante el recurso extraordinario de casación ante la Sala de Casación Penal (Sala Tercera) de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, la cual además lo resolvió de manera formalista y, por lo tanto, incompleta. Por ello, el proceso que resultó condenatorio del periodista configura una violación del derecho a recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior, reconocido en el artículo 8.2.h del Pacto de San José.

C. El derecho a ser juzgado por jueces imparciales (CADH, art. 8.1)

182. El derecho a ser juzgado por jueces imparciales, se encuentra reconocido en el Pacto de San José en los siguientes términos (art. 8):

> *Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e* ***imparcial****, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter*. (Énfasis añadido).

183. En el presente caso, la Sala Tercera (Casación Penal) de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, integrada por los jueces Daniel González A., Mario Houed V., Alfonso Chaves R. Rodrigo Castro M. y Carlos Redondo G., decidió en fecha 7 de mayo de 1999 anular el fallo absolutorio de 29 de mayo de 1998 (Anexo G), dictado por el Tribunal Penal del Primer Circuito de San José, en virtud de lo cual debía procederse a su nuevo enjuiciamiento y consecuente

condena de los acusados absueltos. En efecto, en ejecución del referido fallo de la Sala de Casación Penal, el Tribunal Penal del Primer Circuito de San José, ***integrado por jueces distintos a los que habían emitido el primer fallo absolutorio***, en fecha 12 de noviembre de 1999 dictó el fallo condenatorio de al que se refiere el presente caso. Una vez ejercido de nuevo el recurso de casación, esta vez en defensa del reo, la ***misma*** Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (Casación Penal) integrada exactamente por los ***mismos Magistrados***: Daniel González, Mario Houed V., Alfonso Chaves R. Rodrigo Castro M. y Carlos Redondo G. (este último suplente en ambas sentencias), decidió, por sentencia del 24 de enero de 2001 (Anexo 12 de la demanda de la Comisión) condenar a las ***mismas*** personas acusadas. ¿Cuál era el campo para la imparcialidad judicial, cuando los Magistrados que habían de emitir la sentencia final ya habían adelantado su opinión sobre el mismo caso menos de dos años antes del último fallo?

184. El Estado, al intentar refutar esta denuncia, no ha hecho más que reconocerla, ratificando, de paso, la infracción al artículo 8.2.h de la Convención:

> *El Tribunal de Casación conoce sólo sobre violaciones que contenga la sentencia dictada por un tribunal de primera instancia, situación que hace que en un aso como el que nos ocupa, en el cual* ***la Sala Tercera conoció y ordenó la anulación de la sentencia por razones de forma, dicho tribunal no haya tenido la oportunidad de que*** (sic) ***conocer sobre los hechos acusados***.
> *Es por ello que en el caso concreto, no podría considerarse que los jueces del tribunal de casación, en el momento de conocer de la sentencia de primera instancia* ***que sustituye a la anulada****, hayan emitido criterio sobre los hechos, y que por lo tanto, no puedan* (sic) *ser considerados como jueces imparciales.*[124] (Énfasis añadidos).

185. No escapará esa Honorable Corte que ***la controversia que se ventilaba ante los tribunales costarricenses en el presente caso, versaba sobre la interpretación del derecho y no sobre los hechos, que no estaban en discusión***. La sentencia absolutoria de Mauricio Herrera Ulloa, del 29 de mayo de 1998 (Nº 61/98)[125], se fundamentó sustancialmente en que el periodista se había limitado a ejercer rectamente su derecho a la libertad de expresión. Esta interpretación jurídica de los hechos fue censurada y anulada por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Como ocurre en general con la hermenéutica jurídica, privan criterios subjetivos del intérprete, que en este caso fueron dispares entre el fallo absolutorio y la sentencia de casación

---

[124] *Véase*, Anexo Nº 14 de la demanda de la CIDH, pág. 24.
[125] *Véase*, Anexo Nº 7 de la demanda de la CIDH.

que lo anuló. La nueva sentencia de primera instancia esta vez condenatoria, se ciñó al criterio pautado por la Sala Tercera, de modo que, los mismos Magistrados, al conocer por segunda vez en casación, se limitaron a controlar que ***su propio criterio ya expresado sobre los mismos hechos en el mismo caso***, se hubiera efectivamente aplicado. Vale decir, se controlaron a sí mismos. Este proceder de los Magistrados de la Sala Tercera violó la garantía de la imparcialidad de los jueces y el artículo 8.1 del Pacto de San José.

D. La violación de la presunción de inocencia (CADH, art. 8.2)

186. Los tribunales costarricenses, en las diversas sentencias que finalmente condujeron a la condena penal del periodista Mauricio Herrera Ulloa, sostienen que, en el caso del delito de *publicación de ofensas* (art. 152 del Código Penal), al igual que en la difamación o en la injuria, ***no es necesario probar el dolo del reo***, es decir la intención de atentar contra el honor.

187. Como antes se ha expresado (*supra* párr. 45), en el fallo del 7 de mayo de 1999 (Anexo "G"), por el cual se anuló la anterior sentencia absolutoria, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia afirmó que, en los delitos contra el honor, y en particular en los artículos 146 y 152 del Código Penal costarricense, ***no es necesario comprobar el deseo de ofender o el espíritu de maledicencia***, pues dichos artículos *"**no contemplan esa clase de elementos subjetivos** como sí lo hacen ciertos tipos subjetivos complejos, llamados 'delitos de intención' porque requieren una especial dirección de la voluntad hacia un determinado objetivo o resultado."*

188. No correspondía, pues, al querellante comprobar el dolo del periodista, sino a éste demostrar la verdad de lo publicado por la prensa europea sobre el diplomático costarricense. Por lo tanto, esta doctrina sobre la *exceptio veritatis* establece una suerte de presunción de culpabilidad, o al menos una inversión en la carga de la prueba, en contra del periodista pese a que la Convención Americana establece en su artículo 8.2 la norma fundamental de la presunción de inocencia. Esa reprobable excepción, propia de tiempos medioevales, obliga al periodista a probar la veracidad de su información y no al acusado a demostrar su falsedad o, al menos, el *animus nocendi* del acusado; la circunscribe a asuntos actuales, de momento, y legisla al extremo inaudito que, no obstante acreditar el obvio interés público como en el caso que motiva esta demanda, el periodista debe demostrar además que actuó con buena fe, sin dolo y sin afán de ofender cuando, al contrario, debería ser el acusador el encargado de fundamentar la mala fe o el dolo del periodista y no el periodista los ***hechos negativos*** de su falta de dolo.

189. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 8.2 de la Convención Americana,*"toda persona inculpada de delito* ***tiene derecho a que se presuma su inocencia*** *mientras no se establezca legalmente su culpabilidad."* Es decir, toda persona tiene derecho a ser sometida a investigación y a un proceso penal en el que se presuma su inocencia mientras no se establezca su responsabilidad mediante una sentencia firme. En el proceso penal la parte acusadora tendrá, por lo tanto, ***la carga de demostrar la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable***, a fin de que el juez determine finalmente en su sentencia, si tal situación ha quedado suficientemente acreditada mediante un debido proceso. En el presente caso, no se requirió a la parte acusadora probar la conducta culposa del periodista, sino a éste la de ***probar la exactitud de lo publicado por terceros en otro continente como único medio de ser absuelto***. Se le impuso así una verdadera *"diabolica probatio"*, que privó de todo contenido y efecto útil a la presunción de inocencia.

190. En consecuencia, por los motivos aquí expuestos, queda evidenciado que, en el procesamiento y la condena de Mauricio Herrera Ulloa y de "La Nación" por los tribunales costarricenses con base en la aplicación de esta doctrina de la *exceptio veritatis,* quedó también violado el artículo 8.2 de la Convención.

3. La violación al artículo 50 de la Convención

191. El Informe de la Comisión[126] concluyó que, en virtud de los hechos antes expuestos en este caso, el Estado había violado en perjuicio de los señores Mauricio Herrera Ulloa y Fernán Vargas Rohrmoser, en su calidad de representante del Diario "La Nación", *"el derecho a la libertad de expresión, consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana..."* A los fines de reparar dichas violaciones a los derechos humanos de las susodichas víctimas, la Comisión formuló al Estado de Costa Rica las siguientes ***recomendaciones***:

> a. ***Dejar sin efecto la sentencia condenatoria contra el señor Mauricio Herrera Ulloa y el Diario "La Nación",*** *representado por Fernán Vargas Rohrmoser.*
>
> *1.a Retirar la inscripción del señor Mauricio Herrera Ulloa en el registro Judicial de Delincuentes.*
>
> *1.b Dejar si efecto la orden de retirar el enlace existente en "La Nación" Digital que se encuentra en Internet, entre el apellido Przedborski y los artículos querellados y el establecimiento de*

[126] Número 64/02 (caso 12.367, Costa Rica), 10 de octubre de 2002. *Véase*, Anexo 1 de la demanda de la CIDH.

un vínculo entre dichos artículos y la parte dispositiva de la sentencia.

1.c Reparar el perjuicio causado al señor Mauricio herrera Ulloa mediante el pago de la correspondiente indemnización.

1.d Adoptar las medidas necesarias para prevenir que estos hechos se repitan en el futuro.[127]
(Énfasis añadido)

192. Al transmitir dicho Informe al Estado, la Comisión le otorgó un plazo de dos meses para "dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas"[128]. En su respuesta a dicho Informe, el Gobierno manifestó que no podía dar cumplimiento a las citadas recomendaciones de la CIDH, por cuanto en virtud de la separación de poderes imperante en Costa Rica, el Poder Ejecutivo no puede interferir en decisiones del Poder Legislativo o del Poder Judicial.[129]. La nota de respuesta del Ilustrado Canciller de Costa Rica, acompaño como anexo *inter alia*, el acuerdo tomado por la Corte Suprema de Justicia de ese país, en Corte Plena, en su sesión Nº 57-02, celebrada el 16 de diciembre de 2002, cuya parte resolutiva expresa lo siguiente:

> ***Se acordó**: Comunicar al señor Procurador General de la República, que esta Corte no puede aceptar ninguna de las recomendaciones que sugiere la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en virtud de que esas medidas provienen de una sentencia condenatoria de un Tribunal de la República, que debe ser respetada mientras mantenga su validez. **Se declara firme este acuerdo**.*[130](El énfasis es del original; los subrayados son añadidos).

193. Explícitamente, pues, el Estado se ha rehusado a adoptar las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas por la CIDH, con base en el artículo 50 de la Convención. En efecto, el Estado no ha dejado sin efecto la sentencia condenatoria contra los señores Mauricio Herrera Ulloa y el Diario "La Nación"; no ha retirado de manera permanente y definitiva la inscripción de Mauricio Herrera Ulloa del Registro Judicial de Delincuentes; no ha dejado sin efecto la orden de retirar existente en "La Nación" Digital que se encuentra en Internet, entre el apellido Przedborski y los artículos querellados y de establecer un vínculo entre dichos artículos y la parte dispositiva de la sentencia condenatoria; no se ha reparado el perjuicio

---

[127] *Ibíd.*, párr. 97.

[128] *Ibíd.*, párr. 98.

[129] *Véase*, "Expediente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", Tomo 2 *in fine*: Nota del Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Señor Roberto Tovar Faja, al Secretario Ejecutivo de la CIDH, fechada el 20 de diciembre de 2002 y recibida por la CIDH el 30 del mismo mes y año. (El Expediente no está foliado en este sector)

[130] *Ibíd.*

causado a Mauricio Herrera Ulloa mediante el pago de la correspondiente indemnización; ni se han adoptado las medidas necesarias para prevenir que estos hechos se repitan en el futuro.

194. Al respecto, cabe destacar que la responsabilidad internacional del Estado puede ser comprometida por cualquiera de sus órganos y que, dada la exigencia de agotar previamente los recursos de la jurisdicción interna antes de invocar la protección internacional que ofrece el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, no es extraño que la violación de éstos emane, en última instancia, del poder judicial. En tal sentido, carece de relevancia la alegación del ilustrado Gobierno de Costa Rica, en el sentido de que, a causa de la independencia entre los poderes existente en ese país, no es posible poner en práctica las recomendaciones formuladas por esa honorable Comisión con base en el artículo 50 de la Convención. **El resultado es el mismo: el Estado de Costa Rica no ha dado -y anuncia que no dará- cumplimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe de la CIDH**.

195. Este incumplimiento por parte del Estado de Costa Rica a las recomendaciones que le formulara la CIDH en su aludido Informe en el presente caso, configura *per se* un incumplimiento por parte de dicho Estado a sus obligaciones internacionales derivadas del artículo 50 de la Convención Americana.

196. En el caso de los Informes de la Comisión, la "obligatoriedad" de sus *recomendaciones* ha sido establecida por la propia Corte Interamericana, sobre la base de la buena fe en el cumplimiento de los compromisos internacionales libremente adquiridos, en los siguientes términos. En efecto, tal como lo ha puesto de relieve la honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos entre otros, en el caso Loayza Tamayo:

> ...en virtud del principio de buena fe, consagrado en el mismo artículo 31.1 de la Convención de Viena, ***si un Estado suscribe y ratifica un tratado internacional, especialmente si trata de derechos humanos, como es el caso de la Convención Americana, tiene la obligación de realizar sus mejores esfuerzos para aplicar las recomendaciones de un órgano de protección como la Comisión Interamericana*** que es, además, uno de los órganos principales de la Organización de los Estados Americanos, que tiene como función "*promover la observancia y la defensa de los derechos humanos*" en el hemisferio (Carta de la OEA, artículos 52 y 111).
>
> Asimismo, el artículo 33 de la Convención Americana dispone que la Comisión Interamericana es un órgano competente junto con la Corte «*para conocer de los asuntos relacionados con el*

> *cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados Partes»*, por lo que, ***al ratificar dicha Convención, los Estados Partes se comprometen a atender las recomendaciones que la Comisión aprueba en sus informes***. [131] (Las cursivas son de la Corte; los énfasis son añadidos).

197. La respuesta del Gobierno al Informe de la Comisión, también fue acompañada de varios proyectos de reforma legislativa, algunos de los cuales retirarían la tipificación como delito a la actividad por la que fue condenado criminalmente Mauricio Herrera Ulloa, en los términos ya descritos en el presente caso. Sin embargo, como ya lo ha establecido la Honorable Corte, la existencia de un proyecto de reforma legislativa no basta para cumplir con las obligaciones del Estado de adoptar su derecho interno a la Convención, según los prescribe el artículo 2 de la misma.[132] (*Véase, infra*, párrs. 209 al 220 de este escrito). *A fortiori*, la existencia de proyectos legislativos, por lo demás heterogéneos, dista de colmar la obligación de dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando ésta emite su Informe en un caso, con base en el artículo 50 de la Convención.

198. En consecuencia, al no haber adoptado las medidas necesarias para dar cumplimiento de buena fe a las recomendaciones formuladas por la Comisión en su informe de fondo[133] y al haber comunicado a la Comisión que no adoptaría dichas medidas en su derecho interno, el Estado de Costa Rica violó también el artículo 50 de la Convención Americana.

4. <u>Las violaciones a los artículos 1.1 y 2 de la Convención</u>

199. El Estado de Costa Rica violó los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana respectivamente al no haber adoptado las disposiciones de derecho interno para garantizar el respeto a los derechos consagrados en dicho instrumento internacional.

200. Costa Rica ha violado los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana, en conexión con el artículo 13 de la misma, que establecen la obligación de los Estados parte de garantizar el *"libre y pleno ejercicio"* de los derechos humanos reconocidos en dicho tratado *"a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción"*; y requieren que los Estados partes adopten *"las*

---

[131] Corte IDH: *Caso Loayza Tamayo*. Sentencia del 17 de septiembre de 1997. Serie C, No. 33; párrs. 80 y 81.

[132] Corte I.D.H., *Caso "La Última Tentación de Cristo"*... cit., párr. 89

[133] Número 64/02 (caso 12.367. Costa Rica), 10 de octubre de 2002. *Véase*, Anexo 1 de la demanda de la CIDH.

medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades (reconocidos en la Convención)". En consecuencia, Costa Rica, Estado parte en la Convención, tiene la obligación de asegurar los derechos por ella protegidos y que sean fielmente recogidos por su ordenamiento jurídico interno y aplicados adecuada y efectivamente por los órganos y autoridades competentes.

201. El artículo 1.1 de la Convención Americana dispone que:

> *los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.*

202. Está disposición, junto con el artículo 2, constituye la piedra angular de la Convención. Como lo ha señalado la Corte, *"dicho artículo pone a cargo de los Estados Partes los deberes fundamentales de respeto y de garantía, de tal modo que todo menoscabo a los derechos humanos reconocidos en la Convención que pueda ser atribuido, según las reglas del Derecho internacional, a la acción u omisión de cualquier autoridad pública, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad en los términos previstos por la misma Convención."*[134]

203. Respecto de la obligación de respetar los derechos humanos, la Honorable Corte ha puntualizado:

> *La primera obligación asumida por los Estados Partes, en los términos del citado artículo, es la de "respetar los derechos y libertades" reconocidos en la Convención. El ejercicio de la función pública tiene unos límites que derivan de que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia, superiores al poder del Estado. Como ya lo ha dicho la Corte en otra ocasión,*
>
> > ... la protección a los derechos humanos, en especial a los derechos civiles y políticos recogidos en la Convención, parte de la afirmación de la existencia de ciertos atributos inviolables de la persona humana que no pueden ser legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder público. Se trata de esferas individuales que el Estado no puede vulnerar o en los que sólo puede penetrar limitadamente. Así, en la protección de los derechos humanos, está necesariamente comprendida la noción de la restricción al ejercicio del poder estatal (*La*

[134] *Caso Velásquez Rodríguez...* cit., párr. 164: *Caso Godínez Cruz...* cit., párr 173.

expresión "leyes" en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párr. 21).[135]

204. En el presente caso, como ha quedado evidenciado en el análisis precedente de los hechos y del derecho, la violación de la libertad de expresión de las víctimas es el efecto directo de actuaciones y sentencias del Poder Judicial de Costa Rica y de sus órganos auxiliares. Se trata, en consecuencia, de un caso de irrespeto a los derechos humanos de las víctimas, imputable al Estado. En efecto, la violación al artículo 13 de la Convención es consecuencia directa de actuaciones cumplidas por órganos del Estado que han traspasado ilegítimamente en perjuicio de las víctimas los límites infranqueables definidos por los atributos inherentes a la dignidad humana, protegidos por la Convención. Por tratarse de actuaciones del Poder Judicial, está fuera de discusión su imputabilidad a Costa Rica, como Estado parte en la Convención. Lo mismo cabe afirmar respecto de las violaciones al artículo 8 de la misma Convención.

205. Con respecto al deber de garantía, esa Honorable Corte ha señalado, además, que *"la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que comporta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.[...] Esta obligación implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental, y en general todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos"*.[136]

206. Esa *"conducta gubernamental"*, en el presente caso, se apartó de los estándares propios de una sociedad democrática en lo que concierne a la legitimidad de los límites de la libertad de expresión. Asimismo, el aparato del Estado carece de la organización adecuada para asegurar la plenitud de las garantías judiciales, particularmente por lo que hace al derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior, especialmente en materia penal, tal como lo pauta el artículo 8.2.h de la Convención.

207. En suma, el Estado violó el artículo 1.1 de la Convención, en conexión con los artículos 13 y 8 de la misma, en perjuicio de Mauricio Herrera Ulloa y Fernán Vargas Rohrmoser, por lo que dicho Estado ha incumplido el deber general de respetar los derechos y libertades reconocidos en aquélla y de

---

[135] *Ibid*...; párrs. 165 y 174, respectivamente.

[136] *Ibíd*., párrs. 167 y 168; y 176 y 177, respectivamente.

garantizar su libre y pleno ejercicio, como lo estipula el artículo 1.1 de la Convención.

208. Por su parte, el artículo 2 de la Convención establece que:

> *Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.*

209. La Honorable Corte ha establecido, desde su más temprana jurisprudencia en materia consultiva, hasta sus más recientes sentencias contenciosas, el sentido y alcance de la prescripción del artículo 2 del Pacto de San José. La Corte ha afirmado que si el artículo 2 es leído a la luz de lo dispuesto por el artículo 1.1 de la Convención, se concluye, como lo ha hecho la misma Corte Interamericana, que, a través de dichas disposiciones se

> *...recoge una regla básica del derecho internacional, según la cual todo Estado Parte en un tratado tiene el deber jurídico de adoptar las medidas necesarias para cumplir con sus obligaciones conforme al tratado, sean dichas medidas legislativas o de otra índole. En el contexto de la Convención esta conclusión concuerda con el artículo 43 que dice:*
>
> > *Los Estados Partes se obligan a proporcionar a la Comisión las informaciones que ésta les solicite sobre la manera en que su derecho interno asegura la aplicación efectiva de cualesquiera disposiciones de esta Convención.* [137]

210. Ese concepto ha sido precisado y ampliado por la Corte en repetidas ocasiones, de manera que esa jurisprudencia ha venido integrando el artículo 2 de la Convención al concepto más amplio de *garantía*, al que están sujetos los Estados partes en toda convención internacional, particularmente en el caso de la Convención Americana, según su artículo 1.1. Recientemente, esa Honorable Corte acertadamente expresó:

> *... en el derecho de gentes,* ***una norma consuetudinaria*** *prescribe que un Estado que ha ratificado un tratado de derechos humanos* ***debe introducir en su derecho interno las modificaciones necesarias para asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas. La Corte ha señalado en otras oportunidades que esta norma***

[137] Corte I.D.H.: *Exigibilidad del derecho de rectificación o respuesta* (arts. 14.1, 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986. Serie A. Nº 7, párr. 30.

impone a los Estados partes la obligación general de adecuar su derecho interno a las normas de la propia Convención, para garantizar así los derechos consagrados en ésta. *Las disposiciones de derecho interno que se adopten para tales fines han de* ***ser efectivas****. Lo que significa que el Estado tiene la obligación de consagrar y adoptar en su ordenamiento jurídico interno todas las medidas necesarias para que* ***lo establecido en la Convención sea realmente cumplido y puesto en práctica***[138]. (Énfasis añadidos).

211. Mediante una interpretación amplia de esta regla, la jurisprudencia de esa Honorable Corte ha ido delimitando progresivamente su alcance. El artículo 2 no sólo obliga a los Estados partes a adoptar nuevas disposiciones de derecho interno que doten de efectividad a la Convención en el orden doméstico; ***están también obligados a suprimir toda norma o práctica*** que resulte incompatible con los deberes asumidos según la misma Convención:

> *El deber general del artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos implica la adopción de medidas en dos vertientes. Por una parte,* ***la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención****. Por la otra, la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías.*[139] (Énfasis añadido).

212. De la posición del Gobierno en el curso del procedimiento ante la Comisión, se deduce claramente que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo tenían conciencia de la necesidad de reformar la legislación penal costarricense para adecuarla a la Convención y a los estándares internacionales, especialmente en lo relativo a la indebida protección especial a los funcionarios públicos. El 30 de noviembre de 1998 el Presidente Miguel Ángel Rodríguez tomó la iniciativa de remitir a la Asamblea Legislativa un *Proyecto de Ley de Protección a la Libertad de Prensa*[140]. En la Exposición de Motivos de dicho proyecto, puede leerse:

---

[138] Corte I.D.H., *Caso Cantos (fondo)*, Sentencia del 28 de noviembre de 2002, párr 59. Igualmente, *véase:"La Última Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y otros vs Chile).* Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, párr. 87; *Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros*, Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C No. 94, párr. 112.

[139] Corte I.D.H.: *Caso Castillo Petruzzi y otros*. Sentencia del 30 de mayo de 1999. Serie C, N° 52, par. 207; Corte I.D.H.: *Caso Baena Ricardo y otros (270 trabajadores vs. Panamá)... cit.*, párr. 180. En el mismo sentido, sobre un caso concreto de violación del derecho a la libertad personal, *véase*: Corte I.D.H. *Caso Suárez Rosero*. Sentencia del 12 de noviembre de 1997. Serie C N° 35, párr. 99.

[140] *Véase*, Anexo "J" de este escrito. Este proyecto fue alegado como descargo del Estado en el trámite del caso ante la Comisión: *Véase* Anexo 10 de la demanda de la CIDH: *Posición del Gobierno de Costa Rica ante la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con ocasión del caso 12.2367 de Mauricio Herrera y La Nación.*

Es ya paradigmática la posición de la Suprema Corte de los Estados Unidos de América, que en 1964 dictó ***la trascendental sentencia del caso New York Times vs Sullivan*** *(376-US-254) y expresamente reconoció:*

> "Las garantías constitucionales exigen, a nuestro juicio, una norma federal que prohíbe a un servidor público querellarse por daños y perjuicios por una difamación falsa relativa a su comportamiento oficial, a menos que se pruebe que el enunciado se hizo con malicia real –esto es- con conocimiento de que era falso o con manifiesta desconsideración de si era falso o no."[141]
>
> ...(Omissis)
>
> *A la vez, la misma normativa les exige responsabilidad a los periodistas en el caso de abuso en el ejercicio de tales derechos* (la libertad de pensamiento y expresión). *Sin embargo, tales responsabilidades sólo pueden ser ulteriores y no pueden implicar jamás una censura previa. A nuestro juicio,* ***la actual regulación legal****, aunque matizada por alunas interpretaciones de la Sala Constitucional y de Tribunales Penales,* ***constituye una espada de Damocles que pende peligrosamente sobre los periodistas y amenaza su autonomía e integridad para el libre ejercicio de su profesión, constituyendo en realidad un mecanismo de censura previa***. (Énfasis y subrayado añadidos)

213. La Asamblea Legislativa, por su parte, ha tomado una iniciativa destinada a reforma, entre otros, los artículos 149 y 152 del Código Penal, para adecuarlos a la Convención. Así consta del *"Informe de Comisión de Libertad de Prensa"* (propuestas de reformas de los artículos 149, 151 y 152 del Código Penal), que fue remitido por el Gobierno a la CIDH el 20 de diciembre de 2002, junto con otros proyectos de ley que reposan en la misma Asamblea, todo ello en respuesta al Informe Nº 64/02, relativo al presente caso, elaborado por la Ilustre Comisión de conformidad con el artículo 50 de la Convención.[142] Los nuevos artículos 152 y 149 del Código Penal, tal como aparecen redactados en las "propuestas" de la Comisión de libertad de Prensa, tendrían el siguiente texto:

> ***Artículo 152***
> ***Reproducción fiel***
> ***No delinque quien reproduce fielmente informaciones u opiniones emitidas por un tercero****, ni quien sólo facilite al autor el medio necesario para la publicación, difusión o venta de las manifestaciones calificadas como injuriosas,*

---

[141] La traducción es del original del Gobierno.

[142] *Véase*, "Expediente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", Tomo 2 (no está foliado).

calumniosas o difamatorias. ***Sólo será responsable cuando la información es falsa o fue emitida con el deseo de ofender****. En este caso, tanto el medio emisor del mensaje original como el reproductor tendrán la misma responsabilidad.* (Énfasis añadidos).

Artículo 149
Prueba de la verdad
Existe delito contra el honor si la imputación consiste en un imputación falsa y esta (sic) *ha sido hecha para ofender o con la intención de causar un daño*

En asuntos de interés público solo (sic) ***existe delito contra el honor si se demuestra que los hechos divulgados por el querellado son falsos y que esa divulgación se hizo con menosprecio por la verdad o con el ánimo de ofender.***

El autor de calumnia y de difamación calumniosa podrá probar la verdad del hecho imputado, salvo que se trate de delitos de acción o de instancia privada y que estas (sic) *no hayan sido promovidas por su titular.*

214. Del expediente sometido a la Honorable Corte se evidencia, pues, con toda claridad, que las más altas instancias del Poder Público del Estado competentes para adoptar iniciativas de reforma legislativa, tenían conciencia desde hacía largo tiempo que la legislación nacional en materia de delitos contra el honor –incluida la *exceptio veritatis*- no se adecua a la Convención, al punto de ser considerada el mismo Presidente de la República como ***"una espada de Damocles que pende peligrosamente sobre los periodistas y amenaza su autonomía e integridad para el libre ejercicio de su profesión, constituyendo en realidad un mecanismo de censura previa."*** Sin embargo, se trata de iniciativas que ya tienen más de cinco años, en algunos casos, esperando por la sanción legislativa, de manera que se ha excedido a todas luces todo plazo razonable para que Costa Rica adecue efectivamente su derecho interno a la Convención en las materias objeto del presente caso. También desde hace mucho, han debido suprimirse las prácticas y normas incompatibles con el Pacto de San José. Todo ello, a pesar de numerosos debates internos sobre el tema y, en el presente caso, de las diversas medidas tomadas por la Comisión, en particular su Informe 64/02, en el que se advierte sobre la incompatibilidad entre el ordenamiento jurídico interno y las obligaciones contraídas por la Convención, al menos en relación con el artículo 13 de ésta.

215. Como ha sido destacado ya en prestigiosa doctrina, los Estados partes en una convención sobre derechos humanos (como en muchas otra convenciones internacionales de diversa naturaleza), asumen *obligaciones*

legislativas,[143] entre la cuales se encuentra, por ejemplo la de respetar la *reserva legal* en lo que respecta a las restricciones o limitaciones legítimas a los derechos humanos[144]. Dentro de este género de obligaciones está la de adecuar el derecho interno a los tratados en materia de derechos humanos, particularmente para dar cumplimiento a lo explícitamente estipulado en los artículos 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esta es una obligación "positiva", que implica un "hacer" cuyo contenido es el de tomar las providencias legislativas adecuadas para garantizar la efectividad del tratado en el derecho interno, lo cual aunque en cierto sentido admite que su cumplimiento se complete en un plazo razonable, no puede ser postergado indefinidamente. Esto último violentaría el principio de la *buena fe* en la interpretación y ejecución de las convenciones internacionales; y, por lo demás, nunca podría ser invocado como una exoneración por el defecto de garantía legislativa eficaz para los derechos protegidos, toda vez que, de conformidad con la regla consuetudinaria codificada en el artículo 27.1 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, una parte no puede invocar legítimamente su derecho interno como pretendida justificación por el incumplimiento de sus obligaciones convencionales en derecho internacional.

216. Esta obligación no se satisface con la mera existencia de proyectos de reformas legislativas destinados a adecuar el derecho interno a la Convención. Cualquiera sea el estado del trámite interno para sancionarlos definitivamente, un proyecto no cumple con los requerimientos del artículo 2 de la Convención, pues no incorpora al orden interno medios eficaces para asegurar el respeto de los derechos protegidos por este tratado. A este Respecto, en el *Caso "La Última Tentación de Cristo"*, esa Honorable Corte expresó:

> *Esta Corte tiene presente que el 20 de enero de 1997 la Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia en relación con el presente caso, la que fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de Chile el 17 de junio 1997. Por no estar de acuerdo con los fundamentos de estas sentencias, el Gobierno de Chile presentó el 14 de abril de 1997 al Congreso un proyecto de reforma constitucional para eliminar la censura cinematográfica.* ***La Corte valora y destaca la importancia de la iniciativa del Gobierno de proponer la mencionada reforma constitucional, porque puede conducir a adecuar el ordenamiento jurídico interno al contenido de la Convención Americana en materia de libertad de pensamiento y de expresión. El Tribunal constata, sin embargo, que a pesar del tiempo***

---

[143] *Cfr.* CANÇADO TRINDADE, A.A.: *Tratado do Direito Internacional dos Direitos Humanos*. Sergio Antoni Fabris, Editor. Porto Alegre 1999; vol. II. pp. 134-146. en especial. p. 142.

[144] *Cfr. La expresión "leyes" en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos*. Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6.

> ***transcurrido a partir de la presentación del proyecto de reforma al Congreso no se han adoptado aún, conforme a lo previsto en el artículo 2 de la Convención, las medidas necesarias para eliminar la censura*** *cinematográfica y permitir, así, la exhibición de la película "La Última Tentación de Cristo."*[145]

217. Es obvio que, en el presente caso, el Estado costarricense no ha adoptado las medidas legislativas y prácticas necesarias para garantizar y hacer efectivos los derechos y libertades establecidos en la Convención respecto a la libertad de expresión; y que ha sido en virtud de disposiciones de derecho interno que son incompatibles con la misma (en particular los artículos 152 y 149 del Código Penal) que Mauricio Herrera Ulloa y el periódico "La Nación", representado por Fernán Vargas Rohrmoser, fueron condenados ilegítimamente por un hecho punible, por la sentencia del 12 de noviembre de 1999.

218. Por lo tanto, el Estado ha aplicado la normativa de los artículos 149 y 152 del Código Penal costarricense, en violación de las normas expresas y parámetros emanados de la Convención, así como también la jurisprudencia del sistema interamericano, al condenar penalmente a Mauricio Herrera Ulloa; imponer condenas civiles accesorias al mismo reo y al Periódico "La Nación" S.A.; obligar a esta empresa a establecer y eliminar los enlaces (hipervínculos o *"links"*) en Internet de "La Nación Digital"; y al intimar al señor Fernán Vargas Rohrmoser a dar cumplimiento a la sentencia, con la amenaza de ser sancionado con una pena privativa de la libertad aplicable al delito de desobediencia a la autoridad judicial.

219. Las mismas consideraciones son válidas paral violaciones a las garantías judiciales contenidas en el artículo 8 de la Convención y que antes hemos denunciado. Particularmente notorio es el caso del artículo 8.2.h del Pacto de San José, que garantiza el derecho a que el fallo sea revisado por juez o tribunal superior. También en este supuesto hay antecedentes de denuncias contra Costa Rica ante la Comisión. Igualmente, existió un proyecto de ley destinado a adecuar la organización judicial a la existencia de la doble instancia, proyecto que fue sometido a la jurisdicción consultiva de esa Honorable Corte[146], y que la misma se rehusó a responder, para evitar una solución, de manera encubierta, *"de asuntos litigiosos aún no sentidos a la consideración de la Corte, sin que las víctimas tengan oportunidad en el proceso..*.[147] Ese proyecto está aún en espera de ser debatido, como lo demuestra el hecho de que

---

[145] Corte I.D.H., *Caso "La Última Tentación de Cristo"...* cit., párr. 89.

[146] Corte I.D.H.: *Compatibilidad de un proyecto de ley con el artículo 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos...*, cit.

[147] *Ibíd.*, párr. 28.

en el caso de Mauricio Herrera Ulloa, éste sólo tuvo acceso al recurso de casación pero no a un recurso pleno que, en los términos del artículo 8.2.h de la Convención tenga como *efecto útil* la revisión integral del fallo de primera instancia.

220. Como consecuencia del anterior análisis, concluimos que esa Honorable Corte, en sus sentencia sobre el fondo del presente caso, no debe limitarse a ordenar que se prive de todo efecto a la sentencia del 12 de noviembre de 1999; sino que debe además resolver que el Estado, debe proceder sin más dilación a reformar su legislación interna a fin de adaptarla a los requerimientos de los artículos 13 y 8 de la Convención.

IV. CONCLUSIONES

221. Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos, queda manifiestamente claro que el Estado costarricense ha violado en perjuicio de Mauricio Herrera Ulloa y Fernán Vargas Rohrmoser, víctimas en el presente caso, el derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana; así como las garantías judiciales previstas en los artículos 8.1 (derecho a un juez imparcial), 8.2 (presunción de inocencia) y 8.2.h (derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior); todo ello en relación con los artículos 1.1, 2 y 50 del mismo instrumento internacional. El Estado costarricense ha violado la Convención Americana al haber sentenciado penalmente y declarado a Mauricio Herrera Ulloa autor responsable de cuatro delitos de publicación de ofensas en la gama de difamación, con todos los efectos jurídicos y prácticos derivados de la misma por la emisión y reproducción de información de interés público. Dichos efectos incluyen haber incluido la sentencia condenatoria dictada contra Mauricio Herrera Ulloa en el Registro Judicial de Delincuentes, haber ordenado retirar el enlace existente en "La Nación Digital" que se encuentra en Internet, entre el apellido Przedborski y los artículos escritos por Mauricio Herrera Ulloa; haber impuesto una condena civil derivada del delito, condenando solidariamente a Mauricio Herrera Ulloa y al Periódico La Nación S.A. a pagar al querellante, señor Félix Przedborski, la suma de sesenta millones de colones y, además mil colones por concepto de costas procesales y tres millones ochocientos diez mil colones por costas personales; y, finalmente, por haber intimado al señor Fernán Vargas Rohrmoser al cumplimiento de la sentencia con la expresa advertencia sobre la posibilidad de incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad.

V. RESTITUCIÓN, REPARACIONES Y COSTAS

222. Demandamos que, en la medida de lo posible se restituya a los ofendidos en el goce del derecho conculcado, en aplicación del artículo 63.1 de la Convención y como primer componente de la *restitutio in integrum*, que se debe a las víctimas de conformidad con el derecho internacional general, con el particular desarrollo que ha hecho sobre este tema la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos, especialmente la de esa Honorable Corte. Por lo tanto, solicitamos en primer lugar de esa Corte, que ordene como forma de restitución y reparación al Ilustrado Estado costarricense dejar sin efecto la sentencia condenatoria del 12 de noviembre de 1999 (sentencia número 1320-99), con todas sus consecuencias, así como sus fallos confirmatorios y medidas de ejecución; y todos sus efectos y sanciones accesorias; e indemnizar los daños y perjuicios por las violaciones causadas a las víctimas en los términos que más adelante se indican. Asimismo solicitamos a la Honorable Corte que ordene al Estado el pago de las costas originadas tanto en el ámbito interno en el respectivo procedimiento jurisdiccional, como en el internacional en la tramitación del caso ante la Comisión y las que se originen como consecuencia de la tramitación de la presente demanda ante la Honorable Corte.

1. <u>Obligación de Restituir y Reparar</u>

223. De conformidad con los principios fundamentales del derecho internacional, la violación de normas internacionales atribuible a un Estado genera para éste responsabilidad internacional y en consecuencia, el deber de reparar. En este sentido, la Honorable Corte ha sostenido de manera expresa y reiterada[148] en su jurisprudencia "que toda violación de una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente".[149]

224. La extensión de la reparación está bien definida en el artículo 63.1 de la Convención. Esa norma encuentra un antecedente en el derecho internacional general, en la jurisprudencia de la Corte Permanente de Justicia Internacional, la cual, a propósito de la reparación dentro del derecho internacional general determinó lo siguiente:

> *...La reparación debe, hasta donde sea posible, borrar todas las consecuencias del acto ilícito y restablecer la situación que con toda probabilidad hubiera existido si no se hubiera cometido el*

---

[148] Corte I.D.H., *Caso Castillo Páez*. Sentencia de Reparaciones del 27 de noviembre de 1998, párr. 50. Véase también Corte I.D.H., *Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros*, sentencia del 21 de junio de 2002, párr. 201.

[149] Corte I.D.H., *Caso Niños de la Calle*. (Caso Villagrán Morales y otros). Sentencia de Reparaciones del 26 de mayo de 2001, párr. 59.

> *acto. La* ***restitución en especie****, o, de no ser ésta posible, el pago de* ***una cantidad correspondiente al valor que tendría la restitución en especie****, y la concesión, caso de ser necesario, de una* ***indemnización por daños*** *por la pérdida sufrida –si ésta no resulta cubierta por la restitución en especie o por el pago en lugar de ella-* ***esos son los principios que deben servir para determinar el monto de la indemnización debida por un acto contrario al Derecho internacional****.*[150] (Énfasis añadidos).

225. Desde sus primeras sentencias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dejó sentados principios generales que deben dominar esta materia. La reparación comporta normalmente una indemnización y otros aspectos resarcitorios de naturaleza patrimonial. Pero, especialmente en materia de derechos humanos, la obligación de *reparar* debe ir más allá de lo meramente patrimonial y comportar ciertas actuaciones de carácter extrapatrimonial (como una *satisfacción* a la víctima o sus familiares); o legislativo (como la adecuación del Derecho interno a la Convención, en los términos del artículo 2 de la misma); o administrativo (como la destitución de un funcionario); o judicial (como proseguir investigación judicial del hecho lesivo, como puede ocurrir con las desapariciones forzadas de personas); o preventivo (evitar la repetición de hechos semejantes).[151]

226. De una manera invariable, esa Honorable Corte ha enfatizado que el artículo 63.1 expresa, dentro del ámbito específico de los derechos humanos una norma fundamental de la responsabilidad internacional. Al violar una norma jurídica internacional y causar con ello un perjuicio, el Estado infractor debe soportar las consecuencias del hecho ilícito, que consisten, en estos casos, en el deber de reparar las consecuencias lesivas del ilícito internacional y, en su caso, de poner cese de inmediato a la actuación contraria a derecho que le es imputable:

> *Tal como ha indicado la Corte, el artículo 63.1 de la Convención Americana contiene una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los Estados. De acuerdo con ello,* ***al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad de éste por la violación de la norma internacional de que se trata, con el consecuente deber***

---

[150] *Affaire de l'usine de Chorzów, fond*, arrêt nº 13, 1928. C.P.J.I. série A nº 17, p. 47.

[151] *Cfr.* A este respecto, Corte I.D.H.: *Caso Velásquez Rodríguez*, cit., párr. 181; *Caso Godínez Cruz*, cit. párr. 181. Más explícitamente, *Caso Velásquez Rodríguez. Indemnización Compensatoria*. Sentencia de 21 de julio de 1989 (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Serie C, Nº 7; párrs. 32-36; *Caso Godínez Cruz. Indemnización Compensatoria*. Sentencia de 21 de julio de 1989 (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Serie C Nº 8; párrs. 30-34.

> ***de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la mencionada violación.***[152] (Énfasis añadido).

227. En cuanto a la reparación, la Corte ha afirmado el principio generalmente aceptado en el Derecho internacional, que ella debe procurar la *restitutio in integrum* y que el daño moral es indemnizable:

> *La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional consiste en la plena restitución (**restitutio in integrum**), lo que incluye el restablecimiento de la situación anterior y la reparación de las consecuencias que la infracción produjo y el pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales incluyendo el daño moral.*
>
> *En lo que se refiere al daño moral, la Corte declara que éste es resarcible según el Derecho internacional y, en particular, en los casos de violación de los derechos humanos. Su liquidación debe ajustarse a los principios de la equidad.*[153]

228. En jurisprudencia más reciente, la Corte ha subrayado que la reparación no puede separarse del contexto del caso concreto en el cual se ha producido la violación de los derechos humanos y que, por lo tanto, su contenido de la *restitutio in integrum* puede variar de acuerdo con las circunstancias.

229. En ese sentido, la Honorable Corte ha sostenido que *"la reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (**restitutio in integrum**), la cual consiste en el restablecimiento de la situación anterior"*. De no ser esto posible *"cabe al tribunal internacional determinar una serie de medidas para, además de garantizar los derechos conculcados, reparar las consecuencias que las infracciones produjeron, así como establecer el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados"*. Por ello, la Corte ha sostenido que *"los modos específicos de reparar varían según la lesión producida: podrá consistir en la restitutio in integrum de los derechos afectados, en un tratamiento médico para recuperar la salud física de la persona lesionada, en la obligación del Estado de anular ciertas medidas administrativas, en la devolución de la honra o la dignidad que fueron ilegítimamente quitadas, en el pago de una indemnización, etc. (...) La*

---

[152] Corte I.D.H.: *Caso Cantos (fondo)*,...*cit.*, párr. 67. En el mismo sentido: *Caso del Caracazo. Reparaciones* (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 29 de agosto de 2002. Serie C Nº 95, párr. 76; *Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros*. Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C Nº 94, párr. 202; y *Caso Trujillo Oroza. Reparaciones*. (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 27 de febrero de 2002. Serie C Nº 92, párr. 60.

[153] *Caso Velásquez Rodríguez. Indemnización Compensatoria*. Sentencia de 21 de julio de 1989 (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos. Serie C Nº 7, párrs. 26 y 27; *Caso Godínez Cruz. Indemnización Compensatoria*. Sentencia de 21 de julio de 1989 (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos. Serie C Nº 8, párrs. 24 y 25.

reparación puede tener también el carácter de medidas tendientes a evitar la repetición de los hechos lesivos."[154]

230. En síntesis, la Honorable Corte ha señalado expresamente que el artículo 63.1 *"constituye una norma consuetudinaria que es, además, uno de los principios fundamentales del actual derecho internacional".*[155] De esta manera, al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma internacional, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación.[156] Las obligaciones derivadas del artículo 63.1 están regidas por el derecho internacional en todos los aspectos, lo que comporta *inter alia "que no pueden ser modificadas ni suspendidas por el Estado obligado".*[157]

231. En el presente caso, la primera medida concreta de restitución que solicitamos es el cese inmediato de la violación de los derechos humanos de las víctimas, lo que implica que esa Honorable Corte ordene que se prive de todo efecto la sentencia condenatoria del 12 de noviembre de 1999 (sentencia número 1320-99), así como de todos los fallos que la confirman o las actuaciones judiciales dirigidas a su ejecución.

232. Como ya hemos argumentado anteriormente la sentencia del 12 de noviembre de 1999 como tal, en todas sus partes y con todas sus consecuencias no escritas en el fallo (como la inscripción de Mauricio Herrera Ulloa en el Registro Judicial de Delincuentes) es, *in toto*, violatoria del artículo 13 de la Convención. Por tanto, deben dejase si efecto la condena penal a Mauricio Herrera Ulloa, así como todos los otros puntos resolutorios que se derivan directamente de la conclusión de la sentencia referida, según la cual los artículos publicados por Mauricio Herrera Ulloa en "La Nación" configuraron el delito previsto en el artículo 152 del Código Penal.

233. La cesación de los efectos de la condena penal principal, por ser violatoria de la Convención, acarrea *ipso jure*, la ineficacia de las penas

---

[154] Corte I.D.H., *Caso Garrido y Baigorria. Reparaciones.* Sentencia de 27 de agosto de 1998. Serie C Nº 39; párr. 41.

[155] *Véase*, Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones, sentencia del 10 de septiembre de 1993, Ser. C Nº 15, párrafo 43, que cita, entre otros, el *Caso Velásquez Rodríguez, Indemnización Compensatoria,* Sentencia del 21 de julio de 1989. Ser. C Nº 7, párrafo 25; *Caso Godínez Cruz, Indemnización Compensatoria,* Sentencia del 21 de julio de 1989, Ser. C Nº 8, párrafo 23; véase también, *Caso El Amparo, Reparaciones,* Sentencia del 14 de septiembre de 1996, Ser. Nº 28 C, párrafo 14, que cita, entre otros, *Factory at Chorzów, Jurisdictión,* Judgment Nº 8, 1927, P.C.I.J. Series A, Nº 9, pág. 21; *Factory at Chorzów, Merits,* Judgment Nº 13, 1928, P.C.I.J., Series A, Nº 17 pág. 29; y *Reparations for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1949,* pág. 184.

[156] Corte I.D.H., *Caso Bámaca Velásquez.* sentencia de reparaciones del 22 de febrero de 2002, párr. 38.

[157] *Véase, Caso El Amparo...* cit., párr. 15.

accesorias. Entre ellas figuran algunas de carácter extrapatrimonial, que deben se dejadas sin efecto por esa Honorable Corte, como medida restitutoria de la violación a sus derechos sufrida por las víctimas. En consecuencia, debe privarse de todo efecto la disposición del tribunal costarricense mediante la cual ordenó *"la publicación del Por Tanto de la presente sentencia, en el periódico La Nación, en la misma sección, sea la denominada El País y en el mismo tipo de letra de los artículos objeto de la presente querella, ello a cargo de Mauricio Herrera Ulloa por ser el autor responsable de los ilícitos cometidos."* Asimismo debe cesar en sus efectos la orden que pretendió imponer dicha sentencia al periódico "La Nación" en el sentido de *"retirar el enlace existente en La Nación Digital que se encuentra en Internet, entre el apellido Przedborski y los artículos querellados, así como establecer una liga entre los artículos y la parte dispositiva de esta sentencia, cuya publicación ha sido ordenada."*

234. La cesación de los efectos de la condena penal principal, por ser violatoria de la Convención, también acarrea *ipso jure* la ineficacia de las penas accesorias patrimoniales, en particular de la responsabilidad civil derivada del presunto delito, la cual queda inexorablemente impregnada de la ilegitimidad del pretendido crimen que habría sido, a su vez, fuente de los daños objeto del resarcimiento acordado por la sentencia que denunciamos. Por la misma razón deben cesar los efectos de la condenatoria en costas contra los mencionados responsables civiles

235. En los términos de la sentencia penal del 12 de noviembre de 1999 contra Mauricio Herrera Ulloa, se declaró con lugar la acción civil resarcitoria por supuestos daños morales ocasionados al señor Félix Przedborski, por lo cual se condenó a *"MAURICIO HERRERA ULLOA y al PERIÓDICO LA NACION S.A., representada por Fernán Vargas Rohrmoser, presidente de la compañía, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, como demandados civiles yu (sic) en carácter de responsables civiles solidarios, al pago de* ***SESENTA MILLONES DE COLONES***... (El énfasis es del original; el subrayado es añadido). Asimismo, como condena pecuniaria accesoria, se *"condena a los demandados civiles al pago de las costas personales en la suma de* ***TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL COLONES****. Son las costas del proceso a cargo del sentenciado."* (El énfasis es del original; el subrayado es añadido).

236. Estas condenas civiles fueron aplicadas con base en el Título VII del Libro Primero del Código Penal de Costa Rica (*"Consecuencias civiles del hecho punible"*), en el cual se enuncia un principio general expresado en el artículo 103 del mismo Código:

> *Todo hecho punible tiene como consecuencia la reparación civil, que será determinada en la sentencia condenatoria. Esta ordenará:*
>
> ... (Omissis)
> *2) La reparación de todo daño; y la indemnización de los perjuicios causados tanto al ofendido como a terceros...*

237. Por lo tanto, las penas pecuniarias impuestas por la sentencia, tienen carácter accesorio respecto de la condena penal. Se trata de una responsabilidad civil derivada del delito, de tal modo que, de no haber quedado establecida la imputabilidad del hecho punible a Mauricio Herrera Ulloa, no habría sustento para que dicha sentencia penal pronunciara una condenatoria en materia civil. Esto es válido tanto por lo que respecta a la "reparación de todo daño", que se deduce del citado párrafo segundo del artículo 103 del Código Penal; como por lo que respecta a la condenatoria en costas, respecto de las cuales señala expresamente la sentencia condenatoria que *"son las costas del proceso a cargo del sentenciado."* En ambos casos, pues, se trata de sanciones pecuniarias indisolublemente vinculadas con la condena penal, en relación de accesorio a principal. Por esa razón hemos sostenido *supra*, que, en el presente caso, las sanciones civiles en un contexto criminal, son directamente violatorias de la libertad de expresión (*supra*, párrs. 99 al 136).

238. Es notorio, además, que en el presente caso no hubo proceso civil, de manera que ni Mauricio Herrera Ulloa ni el Periódico La Nación S.A., representado por Fernán Vargas Rohrmoser, tuvieron la ocasión de ***ejercer el derecho a la defensa como hubiera correspondido a la imputación de un hecho ilícito meramente civil***. El señor Przedborski prefirió acudir a la vía penal, antes que demostrar que se llenaban los extremos que requiere el artículo 1045 del Código Civil costarricense para la configuración de un hecho ilícito civil:

> *Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia, causa a otro un daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios.*

239. Como ya lo hemos señalado antes en este mismo escrito (*supra*, párr. 107), la prueba del hecho ilícito civil exige la prueba del dolo (intención) o de la culpa (negligencia, imprudencia o impericia) del presunto autor del hecho ilícito. En el caso de la culpa, habría correspondido al demandante comprobar que la conducta del demandado se apartó, dentro de las circunstancias del caso, del patrón ideal de comportamiento de la persona medianamente diligente y prudente (*bonus paterfamilias*). Ahora bien, el estándar de conducta de un periodista medianamente diligente y prudente no puede definirse, para los Estados partes en la Convención, haciendo abstracción del contenido del artículo 13 de ésta ni de la interpretación que esa Honorable Corte y la

Comisión han dado a dicha disposición, lo que incluye el contenido de la libertad de expresión, la función de los periodistas dentro de una sociedad democrática, el derecho de la sociedad de estar bien informada (dimensión social de la libertad de expresión), el particular escrutinio al que pueden estar sometidos ante la opinión pública los funcionarios públicos, etc. No es nuestro propósito detenernos sobre este punto, puesto que es notorio que el periodista Mauricio Herrera Ulloa no fue objeto de una demanda civil autónoma sino de una querella penal, que comportaba como accesoria una acción civil resarcitoria, ligada a la suerte de dicha querella. Sólo queremos destacar que, paradójicamente, la obtención de una condena civil autónoma habría supuesto una dificultad probatoria mucho mayor para el demandante que la condena del periodista como un criminal en la jurisdicción penal, obteniendo así, por vía de consecuencia y como accesorio prácticamente automático de la decisión sobre lo principal (la imputación del delito), una indemnización por daños, a título de *"consecuencia civil del hecho punible"*.

240. Para mayor abundamiento, cabe observar que, de no haberse producido una condena criminal, el juez penal no habría tenido nunca competencia para imponer una indemnización basada exclusivamente en la supuesta responsabilidad civil del reo absuelto. Se aplica plenamente en este caso una conocida regla universal de Derecho: ***lo accesorio sigue la suerte de lo principal*** *(accessorium sequitur principale)*. Esta regla se manifiesta en todos los órdenes. Al aplicarla a la naturaleza de las consecuencias jurídicas de un determinado hecho, es la naturaleza y régimen de este último lo que determina la generación de aquellas consecuencias y el alcance de los mismos: ***lo accesorio sigue la naturaleza de lo principal*** *(accessorius sequitur naturam sui principalis)*. En el mismo sentido, ***lo accesorio jamás se impone sobre lo principal***, pues es lo principal lo que domina su relación con lo accesorio o incidental *(accessorium non ducit, sed sequitur suum principale)*.

241. Como consecuencia de esta regla y del artículo 103 del Código Penal que la expresa en el caso de la responsabilidad civil derivada del delito, cuando la responsabilidad civil no se demanda de manera autónoma, fundándola exclusivamente en un *hecho ilícito civil*, sino que se acude a la vía penal para deducir dicha responsabilidad civil de un *hecho punible*, la existencia de la responsabilidad civil está inexorablemente atada a la configuración y legitimidad del hecho punible imputado al presunto civilmente responsable por *haber cometido delito*. Es por ello que en estos sistemas jurídicos la condena penal principal sobre un hecho ilícito tiene el carácter de ***prejudicialidad*** necesaria para obtener la condena civil a los daños y perjuicios ocasionados por ese mismo hecho ilícito.

242. En tal virtud, si el reo es absuelto, no hay lugar, en sede penal, a condenatoria civil de ninguna especie, sea por daños, sea por costas procesales. Con más razón, si el delito imputado, aun en el caso en que se pronuncie una sentencia condenatoria contra el reo, es incompatible con el orden público que emana de la Convención, de modo que su imputación a una persona en un supuesto determinado es violatoria de sus derechos humanos y, por lo tanto, ilegítima. Por lo tanto, ilegítimas serán también las consecuencias directas de la condena penal, como lo son la reparación de los hipotéticos daños causados por el supuesto delito y las costas del proceso a cargos del ***sentenciado***. ***En otras palabras, si no hay condena penal principal, no puede haber condena civil accesoria o consecuencial.***

243. Esas consideraciones y conclusiones bastan para que los efectos de la condena civil desaparezcan *erga omnes*, es decir, tanto respecto de los condenados como de las personas que pudieran invocar, directa o indirectamente, una pretensión como presuntos acreedores del resarcimiento civil

2. Medidas de restitución, satisfacción y garantías de no repetición

244. En el presente caso están presentes elementos característicos del atraso de la legislación costarricense, como la de otros países del hemisferio, en los conceptos que subyacen en los delitos contra el honor. Como lo señalamos en nuestra petición original ante la CIDH, existe una inusitada contradicción que se da en Costa Rica, el Estado Latinoamericano que con mayor orgullo y razones exhibe su tradición democrática, con normas y prácticas vetustas que atentan de manera flagrante contra la libertad de expresión del pensamiento, tal como ésta ha sido reconocida por los diversos instrumentos que integran el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, particularmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos; la doctrina aprobada por esa Ilustre Comisión en varios de sus Informes y en los trabajos de la Relatoría Especial sobre Derechos Humanos creada por iniciativa de la misma Comisión; y la reiterada jurisprudencia de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos.

245. En ese contexto, ciertas medidas de reparación no pecuniaria adquieren una relevancia excepcional. La condena impuesta a Mauricio Herrera Ulloa como consecuencia del ejercicio de su libertad de expresión, y las violaciones que se han derivado de la misma, demandan que la Corte ordene como forma de reparación integral las medidas de reparación que se señalan a continuación.

246. Reiteramos en primer lugar a esa Honorable Corte, también como medida de reparación inmaterial, que ordene al Estado de Costa Rica dejar sin efecto la sentencia del 12 de noviembre de 1999, expedida por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, así como las sentencias confirmatorias de la misma en la violación del derecho a la libertad de expresión, como también todos sus subsiguientes efectos prácticos y jurídicos que afectan a Mauricio Herrera Ulloa y Fernán Vargas Rohrmoser.

247. En segundo lugar, solicitamos que esa Honorable Corte ordene al Estado que adopte sin dilación las reformas necesarias para adecuar el derecho interno a la Convención, en materia de delitos contra el honor incluida en el Código Penal del Estado, de conformidad con las normas internacionales que rigen la materia, es decir que se requiera al Estado de Costa Rica que adopte las medidas necesarias para que en el sistema legal costarricense no se restrinja indebidamente el ejercicio del derecho de libertad de expresión mediante su legislación respecto de los delitos de difamación calumnias e injurias en casos referidos a publicaciones referentes a funcionarios públicos o a temas de interés público. Igualmente, el Estado debe despenalizar la llamada publicación de

ofensas tipificada por el artículo 152 del Código Penal, particularmente cuando dicha publicación se refiere a funcionarios públicos o a personas voluntariamente expuestas al juicio de la opinión pública. También dentro del campo de los delitos contra el honor, solicitamos a la Honorable Corte que ordene la adecuación de la llamada "prueba de la verdad' o *exceptio veritatis*, a las reglas normales de distribución de la carga de la prueba y que, al menos en casos de interés público como el presente, sea el sedicente agraviado quien deba probar el dolo del presunto agraviante. Ello requiere la adecuación legislativa de los artículos respectivos del Código Penal.

248. En tercer lugar, solicitamos que esa Honorable Corte ordene al Estado que adopte sin dilación las reformas necesarias para adecuar el derecho interno a la Convención, en materia de garantías judiciales, particularmente para establecer un recurso efectivo y pleno contra una sentencia condenatoria en lo penal de primera instancia; y no dejar reducido dicho recurso al extraordinario de casación, con las restricciones que le son propias, tal como ocurre en el orden jurídico costarricense vigente.

249. Asimismo, la Comisión solicita a la Honorable Corte que ordene al Estado costarricense que haga reconocimiento público y extienda una adecuada satisfacción a Mauricio Herrera Ulloa, respecto las violaciones a derechos humanos en las que ha incurrido; y publicar la sentencia que en su momento dicte la Honorable Corte.

3. <u>Reparación por equivalente</u>

250. Dadas las características del presente caso, tal como, por lo demás ocurre normalmente con la violación de los derechos humanos, la *restitutio in integrum* no es plenamente realizable a través del mero cese de la violación y las medidas de reparación y restitución inmateriales a las que acabamos de aludir. Es necesario entonces suplir el resarcimiento de los daños materiales (e inmateriales) no reparados por medio del pago de una *justa indemnización*.

251. La Honorable Corte ha establecido los criterios esenciales que deben orientar una justa indemnización destinada a compensar económicamente, de una manera adecuada y efectiva, los daños sufridos con las violaciones. La Corte ha establecido que la indemnización tiene un carácter meramente compensatorio, y que la misma será otorgada en la extensión y medida suficientes para resarcir tanto los daños materiales como morales causados. La Honorable Corte ha precisado que la indemnización debe ser *justa*. Esto implica que ella debe cumplir un efecto de reparación de un daño, a través de su cuantificación en una suma determinada de dinero. Por la misma razón, la indemnización no debe exceder de la compensación, de modo que se traduzca en

un lucro, al que no aspiramos: la *"reparación no puede implicar ni un enriquecimiento ni un empobrecimiento para la víctima o sus sucesores."*[158]

252. La jurisprudencia del sistema interamericano sobre reparaciones ha sido consistente al incluir en la reparación económica, los daños materiales, es decir el daño emergente y el lucro cesante, así como el daño inmaterial o moral.

- **Daños materiales**

253. El Estado tiene la obligación de reparar económicamente al periodista Mauricio Herrera Ulloa, al señor Vargas Rohrmoser y al Periódico "La Nación" por los perjuicios materiales sufridos como consecuencia de la condena penal contra el primero de los nombrados. En cuanto al daño emergente y lucro cesante, en el presente caso estos conceptos requieren de una especial consideración debido a que actualmente los mismos no son susceptibles de ser cuantificados, es decir, la suma correspondiente a estos aspectos sólo podría establecerse en caso de efectivamente sea ejecutada, en provecho del señor Félix Przedborski, la parte patrimonial de la condena que afecta al periodista Mauricio Herrera Ulloa y al Periódico "La Nación".

254. Sin embargo, debe tenerse presente que esa Honorable Corte, en su decisión sobre medidas provisionales, no incluyó la suspensión de la ejecución de la parte patrimonial del fallo condenatorio de Mauricio Herrera Ulloa. Ello no obstante, el tribunal de la causa ordenó suspender la sentencia *in toto*.

255. Por iniciativa del abogado del querellante señor Przedborski, el tribunal costarricense de la causa emitió una resolución el 17 de junio de 2002, mediante la cual ordenó consultar a la Corte Interamericana *"si las Medidas Provisionales acordadas en su oportunidad, en el caso del periódico 'La Nación', lo son respecto de la totalidad de la sentencia, tanto en el ámbito penal como civil, o si por el contrario lo son únicamente en lo relativo a la esfera penal"*. Mediante escrito recibido en la Corte el 30 de julio de 2002, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica remitió a esa Honorable Corte el exhorto mencionado. El 26 de agosto de 2002 la Corte emitió una resolución para dar respuesta a lo solicitado por el Estado costarricense, en la cual aclara el alcance de las medidas provisionales ordenadas en la resolución del 7 de septiembre de 2001 y añade que *"la Corte pretende obtener los efectos indicados independientemente de las proyecciones civiles, penales o de*

---

[158] *Caso Garrido y Baigorria. Reparaciones... cit.*, párr. 43; *Caso Castillo Paéz. Reparaciones (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos).* Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C, N° 43, párr. 53.

cualquier otro orden de los puntos 1), 4) y 6) de la Sentencia del Tribunal de Juicios del Primer Circuito judicial de San José".

256. El 18 y 20 de noviembre de 2002 la Comisión solicitó a la Corte que revocara su resolución de 26 de agosto de 2002. Sin embargo ese Alto Tribunal no consideró pertinente tal solicitud y el 22 de noviembre de 2002 dictó una resolución en la que estableció que la Resolución de 26 de agosto de 2002 no alteraba lo ya resuelto por el Tribunal mediante Resolución de 7 de septiembre de 2001 y que la Corte se había limitado a precisar cuáles medidas había ordenado que se adoptaran en la resolución de 7 de septiembre de 2001. En esta resolución decidió declarar improcedente la solicitud de la Comisión de 18 de noviembre de 2002 y mantener lo resuelto por ella en sus anteriores Resoluciones emitidas en relación con el presente caso.

257. A partir de esas resoluciones de la Honorable Corte, el querellante Przedborski, a través de sus abogados, apremió al tribunal que emitió la sentencia condenatoria contra Mauricio Herrera Ulloa, para que procediera a ejecutar la sanción civil accesoria contra el mismo reo y contra el Periódico "La Nación", representado por Fernán Vargas Rohrmoser. Los condenados civiles tenían la esperanza de que esa Honorable Corte alcanzara a pronunciarse sobre el fondo de este caso antes de que se ejecutara la sentencia, y se le causara un perjuicio patrimonial innecesario, que deberá resarcir el Estado, como responsable de las actuaciones de sus tribunales y de la no adaptación del derecho interno a los requerimientos de la Convención. Sin embargo, es irónico que tal condena al Estado, para resarcir el daño patrimonial injusto infligido a las víctimas por sus tribunales, se traduzca en un lucro para el querellante Przedborski, lucro que no tiene otro origen que la violación de la Convención.

258. Para el momento de introducir este escrito, ya esa Honorable Corte ha sido puesta en conocimiento por el Estado, mediante nota verbal del Ministerio de Relaciones Exteriores recibida en la sede de la Corte el día 10 de marzo y de la que se nos dio debido traslado, ***de la inminencia de la ejecución de la parte patrimonial del fallo, con los consecuentes daños materiales que tal ejecución acarreará a las víctimas***. Debe tenerse presente que se trata de una condena civil *in solidum* que afecta simétricamente al periodista y al medio de comunicación condenados por la justicia costarricense con base en el artículo 152 del Código Penal, y sin que haya quedado demostrado que se incurrió en un ilícito civil tal como lo define el artículo 1045 del Código Civil costarricense[159]. Debe recordarse, en efecto, que en el presente caso no hubo proceso civil alguno, de modo que ***los condenados como civilmente responsables nunca tuvieron la***

[159] *Véase*, nota al pie N° 77.

oportunidad de ejercer su derecho a la defensa en la jurisdicción civil.

259. Por lo tanto, en caso de hacerse efectiva la ejecución de la parte civil de la sentencia, el Estado deberá reparar a los declarados civilmente responsables *in solidum* la cantidad de sesenta millones de colones, ajustada dicha suma al valor real de la moneda para el momento del pago. El mismo resarcimiento por daños materiales se deberá por concepto de costas personales y costas procesales por tres millones ochocientos diez mil colones y un millón de colones, respectivamente.

- **Daños inmateriales**

260. En el presente caso, el daño moral consiste en el impacto de la violación acaecida para el ejercicio profesional periodístico y los efectos personales de la sentencia de condena sufridos por el señor Mauricio Herrera Ulloa, especialmente a razón de su profesión, en la cual la credibilidad y la imagen personal del periodista juegan un rol trascendente.

261. La Corte Interamericana ha establecido, en relación con la inscripción en el Registro Judicial de Delincuentes del periodista Herrera Ulloa, al otorgar las medidas provisionales en el presente caso, que tal inscripción le causa un daño irreparable, puesto que afecta su ejercicio profesional del periodismo y genera la inminencia de un daño irreparable a su honor. Asimismo indicó que el desempeño de un periodista depende de su credibilidad y que si el delito que le es imputado se relaciona con su profesión se le genera un daño que no es susceptible de ser reparado como aquellos de carácter esencialmente monetario.[160]

262. La Honorable Corte ha señalado en ese sentido que:

> *El mencionado daño moral puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas y a sus allegados, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas y otras perturbaciones que no son susceptibles de medición pecuniaria. Es una característica común a las distintas expresiones del daño moral el que, no siendo posible asignárseles un preciso equivalente monetario, sólo puedan, para los fines de la reparación integral a las víctimas, ser objeto de compensación, y ello de dos maneras. En primer lugar, mediante el pago de una suma de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, que el*

[160] Corte I.D.H., *Caso del Periódico "La Nación". Medidas Provisionales*, Resolución del 7 de septiembre de 2001.

Tribunal determine en aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos de equidad. Y en segundo lugar, mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, que tengan efectos como la recuperación de la memoria de las víctimas, el restablecimiento de su dignidad, la consolación de sus deudos o la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir.[161]

263. De acuerdo con lo anterior, demandamos de esa Honorable Corte que ordene al Estado costarricense reparar el daño moral causado al señor Mauricio Herrera Ulloa por su procesamiento, su condena y por la inscripción del mismo en el Registro Nacional de Delincuentes.

4. Gastos

264. La Honorable Corte ha señalado que las costas y gastos deben entenderse comprendidos dentro del concepto de reparación consagrado en el artículo 63.1 de la Convención Americana.

265. Puesto que la actividad desplegada por la o las víctimas o sus representantes para acceder a la justicia internacional implica erogaciones y compromisos de carácter económico, éstos deben ser compensados al dictar sentencia condenatoria. Es por ello que la Corte ha concluido que las costas a que se refiere el artículo 55.1.h del Reglamento comprenden también los diversos gastos necesarios y razonables que la o las víctimas hacen para acceder al sistema interamericano de protección de los derechos humanos, figurando entre los gastos, los honorarios de quienes brindan asistencia jurídica. En razón de lo anterior, corresponde a la Honorable Corte apreciar prudentemente el alcance de las costas y gastos, atendiendo a las circunstancias del caso concreto, a la naturaleza de la jurisdicción internacional de protección de los derechos humanos y a las características del respectivo procedimiento, que posee rasgos propios y diferentes de los que pudieran revestir otros procesos de carácter nacional o internacional.

266. Ya la Honorable Corte ha señalado anteriormente que en el concepto de costas quedan comprendidas tanto las que corresponden al procedimiento desarrollado en la justicia en el ámbito nacional, como las que se refieren a la justicia en el ámbito internacional ante dos instancias: la Comisión y la Corte.[162]

---

[161] Corte I.D.H., Caso de los "Niños de la Calle" (Caso Villagrán Morales y otros), *supra, pié de página No. 86*, párr. 84.

[162] *Ibid*, párrs. 107 y 108.

267. En el presente caso, ***nos abstendremos de reclamar costas por concepto de honorarios profesionales de los abogados que han actuado en el presente caso, en las etapas del proceso interno yen la correspondiente a los procedimientos que hasta la presente fecha han requerido asistencia profesional ante la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos***. Hacemos expresa ***reserva*** de la posibilidad de ejercer el derecho a obtener reparación por las costas y gastos, incluidos los honorarios profesionales, que puedan causarse a partir de la fecha de introducción de este escrito, por actuaciones de abogados ante esa Honorable Corte o, si fuera del caso, ante los tribunales costarricenses en las diligencias procesales aún pendientes. Por lo tanto, nos limitaremos a solicitar ahora a la Honorable Corte que ordene al Estado costarricense el pago de los gastos de transporte, alojamiento, teléfono y alimentación en que se incurrió como consecuencia de los viajes hechos a Washington y a San José por los abogados de las víctimas, Pedro Nikken y Carlos Ayala Corao, según los recibos anexos. Debemos dejar constancia que algunos de estos gastos se causaron como consecuencia de la falta de cooperación del Estado, que, se abstuvo de enviar a Washington a un representante especial, tal como lo había prometido a la representación de las víctimas, a fin de atender a la gestión de buenos oficios de la Ilustre Comisión, en procura de un arreglo amigable análogo al que se logró en el caso del señor Horacio Verbitsky v. Argentina. Tales gestiones fueron, pues, onerosas pero inútiles. Dejando, pues, pendientes de un eventual reclamo futuro por las costas y gastos que se originen como consecuencia de la presente demanda ante la Honorable Corte, reclamamos como gastos causados hasta este momento, los que a continuación se expresan:

1. Viaje a Washington, primera reunión solución amistosa y otras gestiones ante la CIDH
Abril 2001

Boleto aéreo Pedro Nikken (más impuesto).....	US$ 2.253,32
Transporte terrestre Washington.....	US$ 120,00
Alojamiento Pedro Nikken.....	US$ 1.048,70
TOTAL	US$ 3.422,02

2. Viaje a Washington, segunda reunión solución amistosa y otras gestiones ante la CIDH (Mayo 2001).

Boleto aéreo Pedro Nikken (sin impuesto).....	US$ 2.082,00
Transporte terrestre Washington.....	US$ 120,00
Alojamiento Pedro Nikken.....	US$ 1.106,45
Impuestos venezolanos.....	US$ 63,00
TOTAL	US$ 3.371,45

3. Viaje a San José. Audiencia sobre medidas provisionales, Corte IDH Mayo 2001

Boleto aéreo Pedro Nikken	US$	753,30
Boleto aéreo Carlos Ayala Corao	US$	753,30
Alojamiento Pedro Nikken	US$	492,50
Alojamiento Carlos Ayala Corao	US$	196,65
TOTAL	US$	2.195,75

4. Viaje a Washington, audiencia de admisión y otras gestiones ante la CIDH. Noviembre 2001

Boleto aéreo Pedro Nikken	US$	2.196,00
Boleto aéreo Carlos Ayala Corao	US$	2.196,00
Transporte terrestre Washington	US$	120,00
Alojamiento Pedro Nikken	US$	719,33
Alojamiento Carlos Ayala Corao	US$	666,15
Impuestos venezolanos	US$	61,00
TOTAL	US$	5.958,48

TOTAL GENERAL **US$ 14.947,70**

Por lo tanto, nuestro reclamo de reparación por concepto de gastos incurridos en el presentc caso, hasta el 15 de marzo de 2003, 2s de CATORCE MILNOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES DE LSO ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON SETENTA CENTAVOS (US$ 14.947, 70). Reiteramos que no interponemos reclamación por costas originadas en honorarios profesionales en el pasado.

VI. SOLICITUD DE EJERCICIO URGENTE DE LOS PODERES CAUTELARES DE LA HONORABLE CORTE.

268. En el presente caso se han adoptado medidas cautelares por la Comisión, medidas urgentes por el Presidente de la Corte y medidas provisionales, previa audiencia de las partes, por la Honorable Corte en pleno. A pesar de originarse en distintos órganos y de tener una base legal de diferente naturaleza, todas esas medidas tienen en común la de ser providencias de los órganos del sistema interamericano de derechos humanos que apuntan hacia la protección provisoria de las víctimas mientras no se hayan adoptado las decisiones que, según la Convención, corresponden a la Comisión y a la Corte sobre el fondo del caso que se les ha sometido (o, incluso, que se les podría someter en el futuro)

269. El día 1º de marzo de 2001, la Ilustre Comisión adoptó medidas cautelares con base en el artículo 25 de su Reglamento, las cuales comprendían *inter alia* requerir del Estado *"suspender la ejecución de la sentencia hasta que la Comisión hubiere examinado el caso y adoptado una decisión sobre el fondo del mismo."* Estas medidas no fueron acatadas por el Estado, por considerar de manera expresa, como lo expuso en su escrito de respuesta a la Comisión, que la CIDH no está facultada para dictar medidas cautelares de obligatorio cumplimiento por el Estado. En consecuencia, en virtud del incumplimiento por parte del Estado y de la gravedad del asunto, los peticionarios requirieron de la Comisión que solicitara a esa Honorable Corte que adoptara medidas provisionales con base en la competencia que le atribuye el artículo 63.2 de la Convención.

270. Atendiendo a ese pedido, la Comisión, mediante escrito del 28 de marzo del 2001, solicitó medidas provisionales a esa Honorable Corte en virtud de que las medidas cautelares solicitadas por ella para la protección provisoria de las víctimas habían resultado ineficaces. El señor Presidente de la Corte, Antonio Cançado Trindade, mediante resolución del 6 de abril del 2001, convocó a las partes a una audiencia a celebrarse el 22 de mayo, y requirió al Estado *"en carácter de medida de urgencia, que se abstenga de realizar cualquier acción que altere el* ***status quo*** *del asunto hasta tanto la referida audiencia pública se realice y el Tribunal pueda deliberar y decidir sobre la procedencia o no de las medidas provisionales solicitadas por la Comisión."*

271. El 7 de septiembre de 2001, esa Honorable Corte dictó las siguientes medidas provisionales:

> *1. Requerir al Estado de Costa Rica que adopte, sin dilación, cuantas medidas sean necesarias para dejar sin efectos la inscripción del señor Mauricio Herrera Ulloa en el Registro Judicial de Delincuentes hasta que el caso sea resuelto de manera definitiva por los órganos del sistema interamericano de derechos humanos.*
>
> *2. Requerir al Estado de Costa Rica que suspenda la orden de publicar en el periódico "La Nación" el "por tanto" de la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Penal de Juicios del Primer Circuito Judicial de San José el 12 de noviembre de 1999, y que suspenda la orden de establecer una "liga", en La Nación Digital, entre los artículos querellados y la parte dispositiva de esa sentencia.*
>
> *3. Requerir al Estado de Costa Rica que, dentro del plazo de 30 días contados a partir de la notificación de la presente*

> *Resolución, informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las medidas que haya adoptado en cumplimiento de la misma, y asimismo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presente sus observaciones a dicho informe dentro del plazo de 30 días a partir de su recepción.*

272. En el Considerando Nº 11 de dicha Resolución, la Corte expresó que las medidas provisionales se adoptaban *"para prevenir con ello daños que no puedan ser reparados, a diferencia de aquellos otros, de carácter esencialmente monetario."*

273. Sin embargo, como quedó dicho en este escrito (*supra*, párrs. 255 al 259), el Tribunal de Juicio de San José decidió inicialmente suspender la ejecución del fallo en su totalidad, incluida la condena civil accesoria de la penal. Más tarde, como consecuencia de las gestiones de los abogados del querellante Przedborski, se reabrió el incidente procesal relativo a la ejecución de la condena civil, el cual comprendió, incluso, las Resoluciones de esa Honorable Corte de 2 de agosto y 22 de noviembre de 2002. Ahora, como antes quedó dicho, la ejecución de la condena civil es inminente, como puede deducirse del *"exhorto"* emanado del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, el 28 de febrero del presenta año, transmitido a esa Honorable Corte mediante nota verbal del Ministerio de Relaciones Exteriores recibida en su sede el 10 de marzo de 2003. Como dicho *"exhorto"* no contiene solicitud alguna dirigida a esa Honorable Corte, del mismo no puede interpretarse que el tribunal costarricense consideró necesario o conveniente notificar a la Corte sobre la ejecución del fallo, ejecución que, como el mismo tribunal lo reconoce, agravaría la responsabilidad del Estado, pues podría verse compelido a resarcir a las víctimas de tal ejecución, si la sentencia sobre el fondo del presente caso de la Honorable Corte, resultara en definitiva en una condena del mismo Estado por la violación de los artículos de la Convención que la Ilustre Comisión y nosotros en este escrito hemos denunciado. Presumimos que el juez ejecutor, a través de la notificación a la Honorable Corte de la ejecución inminente de la condena patrimonial, desea dejar salvada su responsabilidad por los daños que eventualmente se causarían al patrimonio público costarricense de resultas de tener que resarcir a las víctima en el presente caso por lo que ellas habrían pagado, ¡no a Costa Rica sino al querellante Przedborski!

274. En todo caso, dado que para la fecha de introducción de este escrito la parte patrimonial del fallo mediante el cual el Estado violó la Convención, aún no se ha ejecutado, respetuosamente nos permitimos presentar ante esa Honorable Corte elementos de hecho y de derecho que no estuvieron presentes en el momento en que se decretaron las medidas

provisionales ni cuando fueron dictadas las Resoluciones del 26 de agosto y del 22 de noviembre de 2002; y que, en nuestro parecer, requieren de una decisión urgente de esa Honorable Corte ordenando al Estado el mantenimiento del *status quo* actual (tal como lo ordenara el Presidente de la Corte en su Resolución de 6 de abril de 2001), para evitar lo que podrían ser resultados manifiestamente irrazonables de la continuación de la ejecución de la sentencia contra Mauricio Herrera Ulloa y el Periódico "La Nación", representado por Fernán Vargas Rohrmoser.

275. En efecto, para esta fecha ya se ha emitido el Informe de la Comisión con base en el artículo 50 de la Convención, cuya primera recomendación es la de: ***"Dejar sin efecto la sentencia condenatoria contra el señor Mauricio Herrera Ulloa y el Diario "La Nación", representado por Fernán Vargas Rohrmoser."*** Como ya se ha reseñado y denunciado en este escrito, tal recomendación fue explícitamente desatendida por el Estado (*supra*, párrs. 193 al 200). Como consecuencia de esa nueva violación a sus obligaciones internacionales según la Convención, la Ilustre Comisión decidió demandar al Estado y elevar el caso al conocimiento y decisión final de la Honorable Corte. En la demanda, la CIDH explícitamente denuncia, en concordancia con su Informe y sus recomendaciones, que***"la sanción civil resarcitoria impuesta tanto al periodista Mauricio Ulloa como al periódico "La Nación" representado por el señor Vargas Rohrmoser como resultado de la condena penal por delito de difamación es violatoria de la Convención Americana."***[163]

276. Por consiguiente, en esta fecha, ya existe un acto jurídico vinculante, como lo es el Informe final emanado de la Ilustre Comisión, que dispone la suspensión de la ejecución de la sentencia *in toto*, y una demanda congruente con dicho Informe. El Estado ha desatendido las recomendaciones de la Comisión y ha puesto en conocimiento de la Honorable Corte por la nota verbal de 10 de marzo de 2003 antes aludida, que se propone continuar incurriendo en actos de desconocimiento de las recomendaciones de la Comisión, a pesar de estar ya demandado ante esa Honorable Corte. Con ello, el Estado desconoce, además, la jurisprudencia de la Corte relativa a la fuerza jurídica de las recomendaciones de la CIDH, cuando emite su Informe basado en el artículo 50 de la Convención, incurriendo con ello en una nueva violación a sus obligaciones internacionales (*supra*, párrs. 198 al 200).

277. Este contexto temporal plantea ante esa Honorable Corte una situación particular e inusual, sobre la cual, hasta donde llega nuestro conocimiento, no ha tenido la oportunidad de decidir en el pasado. En efecto, haciendo abstracción por un momento a la notoria desatención del Estado a las

---

[163] *Véase*, demanda de la CIDH, párrs. 87-95.

recomendaciones de la CIDH, nos permitimos muy respetuosamente llevar ante la atención de la Corte las alternativas previsibles en este caso, teniendo presentes, por una parte, el sentido de la sentencia de esa Honorable Corte sobre el fondo; y, por la otra, los resultados prácticos de la ejecución de la condena civil por los tribunales del Estado.

278. En efecto, si la condena civil consecuencia del delito imputado al periodista Mauricio Herrera Ulloa, es efectivamente ejecutada de inmediato; pero si, además, transcurrido el tiempo necesario para ello según el Reglamento, finalmente la Corte coincide con la Comisión y concluye que el Estado violó la Convención e incurrió en responsabilidad internacional, los resultados prácticos serían los siguientes:

1. El querellante particular en el proceso judicial costarricense, el Sr. Przedborski, habría obtenido, a título de resarcimiento por daños morales deducidos como "consecuencias civiles del hecho punible", la suma de sesenta millones de colones (cerca de US$ 200.000), cuyos deudores solidarios serían Mauricio Herrera Ulloa y el Periódico "La Nación", sobre la única base de una sentencia costarricense violatoria de la Convención Americana.

2. Se habría configurado así el extraño supuesto de un ***lucro injusto*** que favorecería a una persona que se valió de disposiciones y prácticas costarricenses reñidas con la Convención, para promover la violación de ésta por los tribunales del Estado.

3. En efecto, en el supuesto en que la Honorable Corte concluyera que, en este caso, Costa Rica incurrió en responsabilidad internacional, y ejecutó además de manera forzosa una condena civil derivada de un delito, sería el Estado, y no el querellante Przedborski, el obligado internacionalmente a indemnizar a las víctimas por el pago injusto efectuado a éste último. El querellante, no contento con propiciar un hecho del Estado contrario al Pacto de San José, se lucraría como consecuencia de ese ilícito internacional, violatorio de los derechos humanos de las víctimas. Las víctimas en el presente caso, si bien no sufrirían un perjuicio material irreparable, tendrían que sufrir las consecuencias del peso patrimonial de este desembolso; y padecer la lentitud del Estado para indemnizarlas por lo que éstas le habría pagado al querellante Se trataría entonces a todas luces, de un lucro injusto e ilegítimo, ***pus su única fuente sería un hecho violatorio de los derechos humanos garantizados por el Pacto de San José.***

279. En cambio, si la parte patrimonial de la sentencia no se ejecuta de inmediato; y en su sentencia de fondo la Corte concluyera que, en este caso no se ha violado la Convención, nada se opondría a que, en el supuesto que esta demanda fuera desechada por esa Honorable Corte, fuera ejecutada íntegramente la sentencia costarricense denunciada, incluyendo, claro está, la condena civil.

280. Nos encontramos, entonces, ante un dilema cuya deslucida solución esa Honorable Corte está en condición de prevenir: si la Corte falla conforme a la demanda de la Comisión y el presente escrito, pero para ese momento la condena civil se ha ejecutado, el querellante Przedborski, únicamente por haber promovido un proceso penal violatorio del Pacto de San José, ***obtendría un lucro injusto irreversible que sería fruto exclusivo de la violación de los derechos humanos de las víctimas en el presente caso***. En cambio, si la ejecución de la parte civil de la sentencia denunciada se suspende y, al término del presente juicio, esa Honorable Corte concluye que la actuación de los tribunales costarricenses fue legítima y no violó la Convención, los condenados civilmente *in solidum*, tendrían que pagar al querellante la suma determinada por los tribunales costarricenses.

281. Por lo tanto, si la ejecución de la condena civil no queda suspendida y la Honorable Corte declara con lugar la demanda en el presente caso, se produciría el efecto aberrante de que el querellante Przedborski, acusador de Mauricio Herrera Ulloa, resultaría injustamente lucrado gracias a la violación de la Convención, lo cual, por lo demás redundaría en una irónica paradoja respecto de la jurisprudencia de la Honorable Corte en materia de reparaciones a las víctimas de violaciones de los derechos humanos, según la cual la indemnización debe ser justa y no ser un instrumento de enriquecimiento de la víctima (*supra*, párr. 253). De configurarse el supuesto descrito, la sentencia de la Corte no impediría que demandante particular por cuya actuación judicial el Estado incurrió en una la violación de los derechos humanos de Mauricio Herrera Ulloa, resulte injusta, ilegítima e irremediablemente lucrado por obra de dicha violación.

282. En este contexto, en nuestra opinión se impone que la Honorable Corte haga uso urgente de sus poderes cautelares para ordenar que el Estado acate el Informe de la Comisión y ***prevenir el efecto perverso que podría acarrar la ejecución de una sentencia que ya está sub judice ante ella***.

283. Esa Honorable Corte, y muy en particular su Presidente, Juez Cançado Trindade, han subrayado que el propósito de las medidas cautelares,

en los sistemas jurídicos nacionales (derecho procesal interno) en general, es preservar los derechos de las partes en controversia, asegurando que la futura sentencia de fondo no sea perjudicada por las acciones de ellas *pendente lite*. En el campo del derecho internacional de los derechos humanos, tales medidas de protección provisoria, van más allá, por cuanto, además de su carácter esencialmente preventivo, protegen efectivamente derechos fundamentales, en la medida en que buscan evitar daños irreparables a las personas.

284. Esta acertada observación subraya la amplia función de las medidas judiciales de cautela en el campo del derecho procesal internacional de los derechos humanos. Obviamente, esa función es un agregado de especial utilidad de dichas medidas en lo que se refiere a la tutela provisoria de los derechos humanos; pero no podría entenderse nunca como una negación de los poderes inherentes a la función judicial de preservar los efectos de su sentencia, para que ella no resulte nugatoria o permita perjuicios irreparables por actuaciones de las partes *pendente lite*. Es decir, la circunstancia de que las medidas de protección provisoria acordadas por un tribunal internacional de derechos humanos tengan un efecto tutelar agregado a la función que normalmente las medidas de cautela dentro de un proceso judicial, no podría ser interpretado como una negación de que tales medidas produzcan ***también y por lo menos*** las que corresponden al estándar mínimo que normalmente cumplen esas medidas para proteger la integridad de la sentencia.

285. Las medidas cautelares que puede adoptar la Comisión en aplicación del artículo 25.2 de su Reglamento, así como las medidas urgentes que puede adoptar el Presidente de la Corte y las provisionales que puede adoptar ésta con base en los artículos 63.2 de la Convención, 25.2 de su Estatuto y 4, 25 y 29.2 de su Reglamento, tienen en común, en su naturaleza misma -cualquiera sea la denominación que tengan- que son medidas conservatorias temporales, es decir, se trata de providencias destinadas a evitar que se consume una violación a los derechos humanos de la víctima en un caso determinado, a causa de la demora que necesariamente implica una decisión sobre el fondo, de modo que ésta pierda total o parcialmente su efecto útil, en el caso de que la Corte, si el caso es sometido a su conocimiento, en su sentencia definitiva, concluya que un determinado acto imputable al Estado demandado violó alguno de los derechos humanos reconocidos en la Convención.

286. Para ello es necesario que la presunta violación no se haya consumado o sólo lo haya sido parcialmente, pues de haberse consumado totalmente, la decisión sobre el fondo será fundamentalmente resarcitoria, lo cual, si bien entraña un remedio parcial a la lesión experimentada por la víctima, no comporta nunca una verdadera *restitutio in integrum*, puesto que

no es posible borrar retroactivamente la violación a los derechos humanos ya consumada. La relevancia del poder conservatorio o cautelar, por lo tanto, se pone de manifiesto especialmente cuando la transgresión de la Convención aún no se ha consumado o sólo lo ha sido parcialmente. De modo que las medidas conservatorias que adopta esa Honorable Corte tienen como objeto principal evitar que la violación se consume o, en su caso, que continúe produciéndose, hasta tanto haya concluido el trámite del caso dentro de los mecanismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

287. Tanto en el derecho internacional como en el interno, la eficacia de la justicia depende, en gran parte, de la rapidez con que ella se otorgue. Es evidente igualmente que la realización de un proceso, internacional o interno, con todas las garantías debidas requiere de un tiempo razonable, particularmente en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por motivo de los limitados recursos y la complejidad de sus procedimientos -que ni siquiera las reformas adoptadas recientemente por la Comisión y esa Honorable Corte a sus respectivos Reglamentos, pueden salvar-, de modo que lo que pudiera llegar a ser una inminente violación a los derechos humanos de la víctima, aún no consumada, se consumaría antes de que la Honorable Corte haya tenido la oportunidad de sentenciar el fondo del asunto.

288. Cabe destacar a este respecto, que la razón de ser de la Convención es, a título principal, preservar la integridad de los derechos humanos de las personas bajo la jurisdicción de los Estados Americanos, y no la de establecer un sistema cuyo propósito principal sea esperar la consumación de violaciones para limitarse a resarcir los daños causados por las violaciones a tales derechos, lo que comporta que la patología de la infracción se haya consumado. Si la misma pede evitarse, la Corte, como todo juez o tribunal, tiene el poder inherente de preservar los efectos de su sentencia sobre el fondo. Esta es la función mínima de las medidas precautelares en todo sistema judicial, de modo que la circunstancia de que en el campo de los derechos humanos tales medidas cumplan una función tutelar adicional, no las priva de su *ratio* mínima, como es la de preservar los efectos de la sentencia

289. Cabe agregar que, en un tribunal de derechos humanos, el proceso y la sentencia tienen una notoria connotación de ***orden público***, cuya vertiente más importante es la de preservar los derechos fundamentales de las personas; pero que, forzosamente, también comprenden desalentar y *a fortiori* no estimular o premiar a los Estados que incumplan la Convención o a los particulares que propicien su violación.

290. Como una cuestión de principio general en el derecho procesal, el presupuesto para que un tribunal dicte una decisión precautelar supone la

convergencia de dos condiciones, a saber: (i) la apariencia de un derecho (*fumus boni iuris*) y (ii) el peligro de violación del derecho aparente, antes de que hayan concluido los procedimientos ante los órganos del Sistema *(periculum in mora)*, es decir, en la presente situación, antes de que la Corte se haya pronunciado sobre el fondo.

291. El *fumus boni iuris* está plenamente establecido en este caso. Podrían enunciarse diversos argumentos para sustentar esta afirmación, pero consideramos que es bastante y contundente a este respecto la conclusión de la Ilustre Comisión en su Informe, en el sentido de que la sentencia costarricense contra Mauricio Herrera Ulloa y el Periódico "La Nación", representado por Fernán Vargas Rohrmoser, violó el derecho a la libertad de expresión garantizado por la Convención Americana.

292. El *periculum in mora*, que justifica las medidas cautelares, es el peligro del daño que pudiera derivar del retardo de la providencia definitiva, inevitable a causa de la duración del procedimiento ordinario. Tales medidas, sin embargo, no deben dictarse arbitrariamente, sino en el supuesto de que exista una apariencia o presunción razonable de que la reclamación, petición o denuncia tienen fundamento, de modo que se justifica preservar temporalmente los derechos del interesado que, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es la presunta víctima. Esta circunstancia impone un examen sumario de las expectativas de estimación de la petición o denuncia introducida ante la Comisión o, en su caso, de la demanda incoada ante la Corte. Tal examen sumario no implica un prejuicio o un avance de opinión sobre el fondo del asunto. A lo que tiende es a preservar los eventuales derechos que aparentemente están amenazados de violación, hasta tanto concluyan los procedimientos ordinarios. En el presente caso también es notoria la presencia del *periculum in mora*, habida cuenta de la inminente ejecución de la condena civil, con sus perversos efectos de premiar eventualmente, y además de manera irreversible, una violación de la Convención, tal como ha sido informado a esa Honorable Corte por el Estado, según nota verbal de 10 de marzo de 2003.

293. La imposibilidad práctica de acelerar la emanación de la decisión definitiva hace surgir el interés y la necesidad de una medida provisoria que preserve el efecto útil de la providencia definitiva, que en este caso ofrece el peligro adicional de proporcionar un lucro injusto al instigador de la violación de la Convención, como demandante ante los tribunales costarricenses. Se trata, en definitiva, de hacer justicia mediante una sentencia de efectos temporales, que hace preventivamente inocua la mora de la decisión definitiva, considerada en sí misma como posible causa de la lesión a los derechos de la víctima y, además, de perturbación del orden público que emana de la Convención.

294. Así pues, la función de las todas las providencias preventivas que pueden adoptarse en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, nace de la relación que se establece entre dos términos: la necesidad de que la providencia para ser prácticamente eficaz se dicte sin retardo; y la falta normal de aptitud de los procedimientos ordinarios para producir sin retardo una providencia definitiva.

295. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la Sentencia *Factortame* de 19 de junio de 1990, enunció un principio general del Derecho, acogiendo las conclusiones del Abogado General TESAURO, quien lo expresó en estos términos: *"la necesidad del proceso para obtener la razón no debe convertirse en un daño para quien tiene la razón."* [164]

296. Las medidas cautelares son un instrumento que sirve para evitar ese peligro de que la justicia pierda o deje en el camino su eficacia, sin la cual deja de ser justicia. Estas providencias representan una conciliación entre las dos exigencias, frecuentemente opuestas, de la justicia y la de la celeridad, y la de la ponderación, es decir, entre hacer las cosas pronto pero mal o hacerlas bien pero tarde. Las providencias cautelares tienden ante todo, a hacerlas pronto, pero dejando que el problema de fondo, esto es, de la justicia intrínseca de la providencia se resuelva más tarde con la necesaria ponderación en las reposadas formas de los procedimientos ordinarios.

297. Como bien lo ha destacado el Presidente de la Honorable Corte, las medidas preservativas de los derechos en juego en un proceso, tanto en el ámbito interno como en el internacional, las identifican como un verdadero principio general del Derecho:

> *Su uso generalizado en los planos tanto nacional como internacional ha llevado a una corriente de la doctrina contemporánea a considerar tales medidas como equivalentes a un verdadero principio general del Derecho, común a virtualmente todos los sistemas jurídicos nacionales, y convalidado por la práctica de los tribunales nacionales, arbitrales, e internacionales.*[165]

298. Las medidas provisionales de la Corte, como las solicitadas por la Comisión en el presente caso, sirven para que ese Honorable Tribunal, en cada caso concreto utilice los medios que sean necesarios para que el derecho cuya tutela se solicita, permanezca íntegro durante el tiempo que dura el proceso, de tal

---

[164] *Cfr.* E. GARCIA DE ENTERRIA: *La Batalla por las Medidas Cautelares*. Civitas, Madrid, 1992, p. 265.

[165] *Corte IDH, Serie E: Medidas Provisionales. Compendio. N°2 (1996-2000)*. Prólogo del Presidente de la Corte, Juez Antonio Augusto Cançado Trindade, párr. 6.

manera que sea posible ejecutar en su día la sentencia que llegado el caso reconozca el derecho.

299. Citando al Magistrado francés P. ESTOUP, GARCIA DE ENTERRIA afirma *"que no ha dudado en decir que hoy «el honor de la justicia», nada menos, está precisamente en estos juicios cautelares y rápidos."*[166]

300. Estas consideraciones, que resultarían válidas tanto en el derecho interno como en el Internacional, son aún más evidentes en el campo del derecho internacional de los Derechos Humanos, particularmente dentro del sistema de protección establecido por la Convención. Como antes hemos subrayado, el Pacto de San José establece fundamentalmente un sistema de *protección de los derechos humanos* y no un sistema *resarcitorio de las violaciones a dichos derechos*, pues el resarcimiento es el resultado de la indeseable la violación de la Convención, cuya consumación, en la medida de lo posible debe evitarse.

301. En tal virtud, demandamos ***preliminarmente y con carácter de urgencia de esa Honorable Corte*** que, en ejercicio del poder cautelar inherente a la función jurisdiccional, ordene al Estado suspender la ejecución de la totalidad de la sentencia denunciada, y en particular, la suspensión del pago de sesenta millones de colones por supuestos daños morales que serían "consecuencias civiles el hecho unible" imputado a Mauricio Herrera Ulloa, en violación de la Convención, hasta tanto la Corte Interamericana. No haya resuelto sobre el fondo del presente caso Por las mismas razones, solicitamos de esa Honorable Corte que ordene al Estado idéntica suspensión por lo que concierne a la condenatoria, también *in solidum*, a los condenados civilmente, al pago de costas "procesales" por la suma de un millón de colones y de costas "personales" por la suma de tras millones ochocientos diez mil colones.

VII. PETITUM FINAL

302. Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicita a la Honorable Corte que concluya y declare:

1. La responsabilidad internacional del Estado costarricense por la violación, en el presente caso, del derecho a la libertad de expresión garantizado por el artículo 13 de la Convención Americana, en perjuicio de los señores Mauricio Herrera Ulloa y Fernán Vargas Rohrmoser, representante legal del Periódico "La Nación" y de este último medio de comunicación socia.l

---

[166] *Op. cit.*, p. 274.

2. La responsabilidad internacional del Estado costarricense por la violación, en el presente caso, de las garantías judiciales previstas en el artículo 8 de la Convención Americana, particularmente de los párrafos 8.1 (derecho a un juez o tribunal imparcial), 8.2 (presunción de inocencia) y 8.2.h (derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior), también en perjuicio de los señores Mauricio Herrera Ulloa y Fernán Vargas Rohrmoser, representante legal del Periódico "La Nación" y de este último medio de comunicación social

3. La responsabilidad internacional del Estado de Costa Rica por incumplimiento de su deber de adoptar disposiciones legislativas o de otro carácter para hacer dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana en su Informe definitivo en el presente caso, conforme lo establece el artículo 50 de la Convención.

4. La responsabilidad internacional del Estado de Costa Rica por incumplimiento de su deber de adoptar disposiciones de derecho interno para hacer efectivos los derechos y libertades garantizados en la Convención, conforme lo establece el artículo 2 de la misma.

303. Asimismo, solicitamos a la Honorable Corte que ordene al Estado de Costa Rica:

5. Dejar sin efecto y eliminar todas las consecuencias derivadas de la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José el 12 de noviembre de 1999 (sentencia Nº 1320-23); y confirmada por sentencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de 24 de enero de 2001 (Exp: 96-200006-0190-PE Res: 2001-00084). Esto comporta:

5.1 Dejar sin efecto la declaración de Mauricio Herrera Ulloa como autor responsable de cuatro delitos de publicación de ofensas en la modalidad de difamación, así como la pena que se le impuso como autor de tales delitos.

5.2 Dejar sin efecto la condena civil impuesta a "Mauricio Herrera Ulloa y al periódico "La Nación: S. A., representada por Fernán Vargas Rohrmoser, presidente de la compañía, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, como demandados civiles y en carácter de responsables civiles solidarios, al pago de sesenta millones de colones, ello a título de daño moral causado en las publicaciones del periódico La Nación de los días 19, 20, 21 de mayo y 13 de diciembre de 1995."

5.3 Dejar sin efecto la orden del tribunal de la causa de publicar el Por Tanto de la sentencia, "en el periódico La Nación, en la misma sección, sea la denominada El País y en el mismo tipo de letra de los artículos objeto de la presente querella, ello a cargo de Mauricio Herrera Ulloa por ser el autor responsable de los ilícitos cometidos."

5.4 Dejar sin efecto la orden del tribunal de la causa al Periódico La Nación S.A. representada por el señor Fernán Vargas Rohrmoser, de "retirar el enlace existente en La Nación Digital que se encuentra en Internet, entre el apellido Przedborski y los artículos querellados, así como establecer una liga entre los artículos y la parte dispositiva de (la) sentencia."

5.5 Dejar sin efecto la "condena a los demandados civiles al pago de las costas procesales en la suma de un millón de colones y por costas personales en la suma de tres millones ochocientos diez mil colones" todo ello como "costas del proceso a cargo del sentenciado."

6. Retirar de manera definitiva la inscripción del señor Mauricio Herrera Ulloa en el Registro Judicial de Delincuentes.

7. Reparar el perjuicio causado al señor Mauricio Herrera Ulloa y al señor Fernán Vargas Rohrmoser mediante el pago de la correspondiente indemnización de conformidad con lo indicado en la sección anterior.

8. Adoptar las reformas legales necesarias para adecuar el derecho interno, particularmente en el ámbito penal, a fin de adecuarlo a las disposiciones de la Convención en materia de libertad de expresión y de garantías judiciales, en los términos expresados en el presente escrito.

9. Pagar las gastos incurridos por las víctimas para gestionar su defensa ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

VIII. RESPALDO PROBATORIO

304. Nos adherimos a todas las pruebas promovidas por la Comisión; y hacemos valer el mérito probatorio de los anexos a la demanda de la CIDH así como del expediente del caso ante la misma Comisión.

305. Solicitamos a esa Honorable Corte que llame a declarar como perito al señor **Héctor Faúndez Ledesma**, venezolano, Profesor de derecho internacional público de la Universidad Central de Venezuela, para que declare sobre los siguientes particulares: 1) adecuación de la sentencia del 12 de noviembre de 1999 a la libertad de expresión garantizada por el artículo 13 de la Convención Americana; 2) adecuación del derecho penal costarricense en materia de delitos contra el honor, en especial por lo que toca a los artículos 146 (difamación), 149 (prueba de la verdad) y 152 (publicación de ofensas) a la Convención Americana; 3) la criminalización de las presuntas ofensas al honor de funcionarios públicos y su adecuación a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos en materia de libertad de expresión; 4) compatibilidad entre la inexistencia de un recurso de revisión plena de las sentencias condenatorias en lo penal de primera instancia, con el artículo 8.2.h de la Convención Americana.

306. Igualmente solicitamos a esa Honorable Corte que llame a declarar como perito al señor **Julio Maier**, argentino, Profesor titular de derecho penal y derecho procesal penal de la Universidad de Buenos Aires para que declare sobre los siguientes particulares: 1) el contenido y el alcance del derecho a "recurrir" de un fallo condenatorio ante un juez o tribunal "superior", reconocido en el artículo 8.2.h de la Convención Americana; 2) si el recurso de casación previsto en el ordenamiento procesal penal costarricense (artículo 443, Código Procesal Penal de Costa Rica, Ley N° 7594 de 28-3-96 actualizada) satisface los requisitos del recurso a la revisión del fallo condenatorio previsto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana; 3) si dicho recurso de casación como un recurso procesal *extraordinario*, autoriza a una revisión plena del fallo de primera instancia, tanto en los hechos como en el derecho; 4) si en el presente caso la revisión de la sentencia condenatoria de primera instancia efectuada por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica (casación penal), fue idóneo para permitir una revisión plena de los hechos y del derecho de dicha condena penal; 5) el contenido y el alcance del derecho a ser juzgado por un juez "imparcial", reconocido en el artículo 8.2.h de la Convención Americana; 6) si este derecho permite que el mismo juez que revisa una sentencia absolutoria de primera instancia y la anula declarando la procedencia del juicio contra una persona, puede revisar de nuevo la sentencia condenatoria de primera instancia contra

esa misma persona; y 7) si en el presente caso la revisión de la sentencia condenatoria de primera instancia efectuada por la misma Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica (casación penal), respetó el derecho a ser juzgado por un juez imparcial, reconocido en el artículo 8.1 de la Convención Americana.

307. Acompañamos los siguientes anexos:

1. Anexo "A": *Código Penal de Costa Rica.*

2. Anexo "B": Código Procesal Penal de Costa Rica.

3. Anexo "C": Ley de Jurisdicción Constitucional de Costa Rica.

4. Anexo "D": Código Procesal Civil de Costa Rica.

5. Anexo "E": Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de Costa Rica.

6. Anexo "F": Cuestionario remitido por el periodista Mauricio Herrera Ulloa al señor Félix Przedborski, a través del Lic. Ricardo Castro Calvo, el 30 de noviembre de 1995.

7. Anexo "G": Sentencia Nº 000540-99 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, de 7 de mayo de 1999, que anula la absolución en primera instancia del periodista Mauricio Herrera Ulloa.

8. Anexo "H": Copia de artículo del Diario "La Nación" del 10 de diciembre de 1995, donde aparecen declaraciones del ex presidente Luis Alberto Monge, relativas a las contribuciones hecha a los principales partidos costarricenses por el señor Félix Przedborski.

9. Anexo "I": Copia de la nota de la agencia AP del 15 de julio de 1996, relativa a la eliminación de los cargos de diplomáticos honorarios en el Servicio Exterior costarricense.

10. Anexo "J": *Exposición de Motivos y Proyecto de "Ley de Protección a la Libertad de Prensa"*, remitido por el entonces Presidente de la República de Costa Rica, Dr. Miguel Ángel Rodríguez a la Asamblea Legislativa, el 30 de noviembre de 1998.

1. Anexo "K": *Curriculum vitæ* del profesor Héctor Faúndez.
2. Anexo "L": *Curriculum vitæ* del profesor Julio Maier.
3. Anexo "M": Recibos y comprobantes de gastos al 15-3-2003.

[redacted]